



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprensa.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXX - N° 1031

Bogotá, D. C., jueves, 19 de agosto de 2021

EDICIÓN DE 33 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTOS DE LEY

PROYECTO DE LEY NÚMERO 194 DE 2021 CÁMARA

por medio del cual se reestructuran los pasivos financieros para personas naturales y Mipymes, como aporte a la recuperación económica a causa de la crisis ocasionada por el cierre de sectores productivos para evitar la propagación del COVID 19 y se dictan otras disposiciones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

OBJETIVO DE LA LEY

Esta Ley tiene como objetivo reducir las tasas de interés de los créditos de consumo y microcréditos vigentes y adquiridos desde dos años antes del inicio de la pandemia hasta los créditos solicitados a la entrada en vigencia de la presente ley, ordenando a las entidades financieras a reestructurar las tasas de interés a una única tasa la cual será del 1% Efectivo Anual, al mismo tiempo poder ampliar o reducir plazos de crédito, con el fin de que los titulares puedan pagar más rápido sus deudas crediticias, liberar flujo de caja, y poder aumentar su capacidad de endeudamiento, fortaleciendo de esta manera el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD).

CONSIDERACIONES

Dada la crisis económica causada por el cese de actividades productivas para evitar la propagación del virus SarsCov2 o COVID 19, que obligó al gobierno a decretar estado de emergencia sanitaria, conduciendo a confinamientos parciales y totales de la población civil en general por más de 8 meses; se impactó negativamente y de manera directa las finanzas de las personas naturales así como de las empresas, dando un fuerte golpe a la cadena económica nacional afectando su primer eslabón el cual es el consumo masivo.

Como la personas se vieron obligadas a no salir de sus casas, su intención de consumo se vio reducida al mínimo, priorizando sus compras a factores de supervivencia tales como, alimentación, vivienda y servicios públicos; este fenómeno hizo que las personas se limitaran en el consumo de ropa, electrodomésticos, vehículos, ocio, y demás artículos no esenciales, lo que conllevó a una grave crisis en las dinámicas de consumo generando un efecto domino hacia otras variables de la economía como el empleo, la vivienda y el endeudamiento financiero entre otros, esto sumado a la incertidumbre de los mercados, las personas y las empresas se vieron en la necesidad de reducir costos y aprovisionar recursos para enfrentar la crisis, unos restringiendo sus gastos y compras y los otros reduciendo personal y reinventándose productivamente.

Todo este efecto económico negativo, hizo que muchas personas perdieran su empleo y muchas empresas bajaran sus ventas, confluendo en la última alternativa financiera viable la cual es el endeudamiento; no obstante, la incertidumbre de no tener claro la entrada en normalidad se hizo insostenible el pago de deudas y pasivos financieros agravando aún más la crisis económica de la sociedad en general.

En por esto que hoy encontramos aumento de indicadores negativos como por ejemplo la pobreza del país, aumento del desempleo, aumento de la deuda de los hogares y empresas, aumento de empresas liquidadas y establecimientos comerciales cerrados definitivamente entre otros.

En tal sentido, desde nuestra perspectiva es fundamental tomar acciones desde el gobierno para tratar de mitigar la crisis económica y desarrollar herramientas que permitan dinamizar el consumo, el cual, desde nuestra tesis, es el paso inicial para reactivar nuestra economía buscando formas de

incentivar a las personas y empresas a que consuman más y generen más empleo para que así se vuelva a reestablecer el ciclo económico; por lo que estamos seguros que esta ley de reestructuración de pasivos financieros permitirá que tanto las personas como las empresas obtengan mayor liquidez y por ende mayor capacidad de consumo y nuevo endeudamiento; aumentando así la transaccionalidad y el flujo de dinero en los mercados; recuperando confianza, empleo y nuevamente el consumo.

ANTECEDENTES

En el mes de diciembre de 2019 en china se detectó el primer caso de contagio del SARS-CoV2 o Coronavirus en la ciudad de Wuhan capital de la provincia de Hubei, un virus hasta entonces desconocido que afecta las vías respiratorias y podía ocasionar la muerte de quien lo contrajera, las autoridades sanitarias China empezaron a tomar cartas en el asunto cuando se empezaron a reportar casos de una neumonía nunca antes vista convirtiéndose en una posible epidemia en ese país, lo cual termino ocurriendo; no obstante debido a la falta de controles y protocolos de seguridad biológica por parte de China, el virus cruzo la frontera y llego a diferentes países convirtiéndose en un pandemia a cual fue declara por la OMS el 11 de Marzo de 2020.

El virus llego a Colombia el 6 de marzo de 2020 con una joven procedente de Milán, lo cual alerto a las autoridades de salud del país conllevando a la declaración de emergencia sanitaria el 12 de marzo del 2020 a través de la resolución 385 de 2020, conllevando a confinamientos parciales y totales de la población, lo que desato la crisis económica que actualmente atraviesa el país.

En Colombia no existen antecedentes a nivel nacional de un evento pandémico de este calibre, por lo que no se tenía la experiencia ni la capacidad de aprovisionamiento económico dada la incertidumbre de la evolución del virus en nuestro país; ocasionando una crisis económica gravísima dado el cese de actividades laborales, comerciales y económicas no esenciales; generando cierre de establecimientos comerciales, empresas, pérdida de empleos, disminución de la capacidad adquisitiva de los hogares, desestimulación del consumo entre otros problemas socio-económicos.

MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN ENFRENTAR LA CRISIS Italia, uno de los países más afectados por la crisis implemento programas de auxilio para sus ciudadanos y empresas como la suspensión del pago de impuesto y de los créditos hipotecarios bancarios. Fuente BBC News. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-51859984>

Estados Unidos bajo las tasas de interés de sus sistemas financieros a casi el 0% y lanzo programas de estímulo económico por caso 700 mil millones de dólares. Fuente BBC News. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-51859984>

España suspendió el pago de impuestos y seguridad social para trabajadores independientes y PYMES y contempla subsidios a la nómina a empresas de hasta cinco trabajadores. Fuente BBC News. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-51859984>

Alemania busca brindar liquidez para las empresas con créditos sin topes máximos, siendo esta una medida inédita en este país, según lo manifestó su Canciller. Fuente BBC News. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-51859984>

Francia busca que las PYMES de su país puedan acceder al crédito garantizando hasta el 70% de financiación a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que tenga barreras de acceso a la Banca. Fuente BBC News. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-51859984>

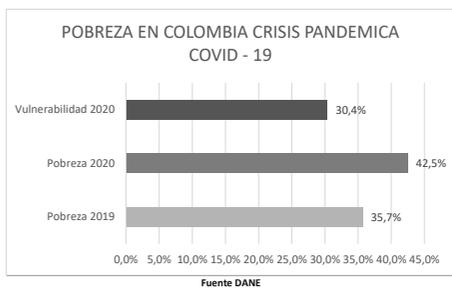
En Colombia se implementó el Programa de Acompañamiento a Deudores PAD el cual definió mecanismos que les permiten a los colombianos cumplir con el pago de sus créditos bancarios o con entidades financieras, estableciendo periodos de gracias o prorrogas para el cumplimiento de sus obligaciones.

JUSTIFICACION

Hoy encontramos una economía nacional gravemente golpeada por la crisis económica y la falta de consumo, observando esta realidad en el aumento de indicadores negativos como por ejemplo la pobreza del país, aumento del desempleo, aumento de la deuda de los hogares y empresas, aumento de empresas liquidadas y establecimientos comerciales cerrados definitivamente, encontrando cifras como las siguientes:

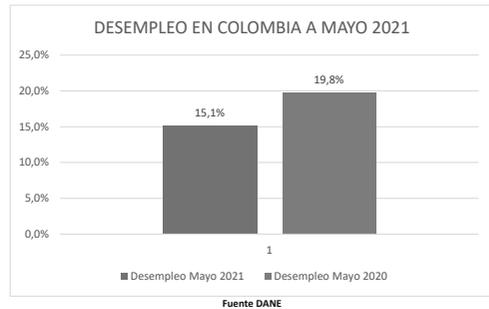
Pobreza: Según el DANE la pobreza en Colombia paso del 35,7% al 42,5% llegando a 21.021.564 en esta vigencia 2020, es decir que prácticamente 5 de cada 10 colombianos solo pueden comer una vez al día, viviendo con menos de 3 dólares diarios; esto sin desconocer el 30,4% de colombianos en situación de vulnerabilidad lo que agrava aún más la situación.

Grafico:



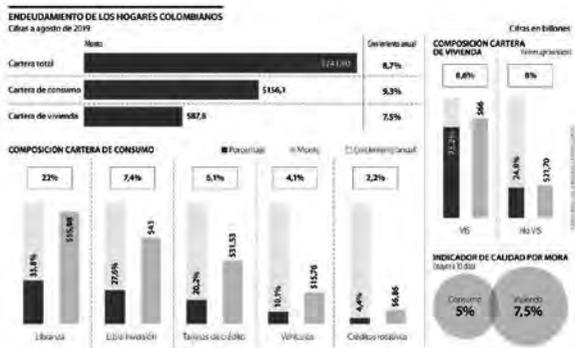
Desempleo: El desempleo en una de las variables que más está afectando el consumo y por ende el impacto en la economía nacional, evidenciando un crecimiento de 9.5 puntos porcentuales, llegando al mes de julio con una tasa de desempleo nacional del 20.2% en comparación con el 10.7% de Julio del 2019; lo que refleja una situación insostenible para los hogares limitando que las personas puedan salir a comprar, a no tener con que pagar sus deudas y más aún sobrevivan con menos de tres dólares al día.

Grafico:



Endeudamiento: Según el segundo reporte de estabilidad financiera de 2019 del Banco de la república, se establece que el crédito en Colombia llego sobre los 600 billones de pesos de los cuales cerca de 243 billones de pesos corresponden a la cartera de los hogares los cuales se distribuyen en los diferentes tipos de productos crediticios:

Grafico:



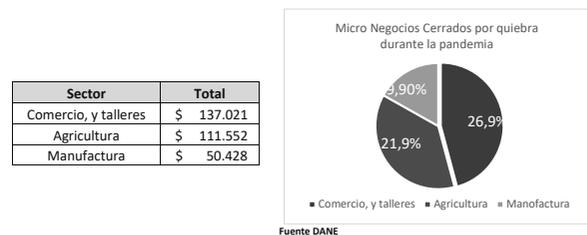
Por otro lado, en cuanto al sector MIPYME según DATA CREDITO, 4 de cada 10 créditos son otorgados a este sector el cual incluye los microcréditos, los créditos empresariales otorgados a MIPYMES con personería Jurídica, los créditos otorgados a establecimientos comerciales con personería jurídica y los créditos de consumo otorgados a personas naturales con actividad MIPYME o con establecimiento comercial.

En este sentido y debido al cese de actividades económicas y productivas tanto de los trabajadores como de las empresas, la mora en los créditos de consumo llego al 5% y en vivienda al 7,5% lo que nos indica que 5 de cada 100 colombianos no están pudiendo cumplir con sus obligaciones crediticias.

Finalmente, y no menos importante, no se puede dejar de tener en cuenta que los colombianos destinaban como mínimo el 20% de sus ingresos al pago de créditos antes de la pandemia, recursos con los que más de 3,8 millones de desempleados no cuentan, teniendo como resultado los más de 2 millones de colombianos que ha acudido a solicitar apoyos en las entidades financieras queriendo aplicar al Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) que lidera la Súper Intendencia Financiera de Colombia.

Cierres de negocios: Según el DANE a causa de la pandemia cerraron 509.370 micro-negocios dentro de los cuales encontramos los que mayor afectación tuvieron al comercio y los talleres automotrices y de motos con un 26,9%, seguido por los micro-negocios que realizaban actividades de agricultura y en el tercer lugar las MIPYMES que se dedicaban a algún tipo de manufactura:

Grafico:



Esta situación de los micro-negocios es demasiado preocupante dado que este sector es el que más genera empleo en el País, por lo cual se hace necesario lanzar programas, políticas y leyes que acudan al rescate de estos negocios con el objetivo de recuperar la economía.

Es por esta razón que la reestructuración de pasivos financieros, será una estrategia que ayudará a alivianar la carga económica de las familias, los comercios, así como las MIPYMES haciendo que liberen flujo de caja para recontratar personal y capacidad de endeudamiento para volver a acudir al crédito buscando invertir nuevamente en sus negocios.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Recopilación Fuente ASOBANCARIA. <https://www.asobancaria.com/normatividad/>

La Constitución Nacional consagra, en su artículo 335, que la actividad financiera, bursátil y aseguradora, en la medida en que implica el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos de captación, es una actividad de interés público; por ello, se señala que esta actividad solamente puede ser ejercida con previa autorización del Estado, según lo establezca la ley. Asimismo, establece que el Gobierno Nacional, al intervenir en esta actividad, debe promover la democratización del crédito. Fuente ASOBANCARIA.

La propia Constitución Política indica cómo se reparten las competencias entre las distintas autoridades que expiden normatividad para el ejercicio de esta actividad. Así, se dispone que el Congreso de la República tiene facultades para expedir leyes marco que regulen la actividad

<p>financiera, bursátil y aseguradora; asimismo, para regular el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (art. 150, n. 19, lit. d). 1 Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>Una vez expedidas las correspondientes leyes marco, el Gobierno Nacional procede a la expedición de decretos, mediante los cuales ejerce la intervención en dicha actividad financiera (art. 335). Estos decretos no pueden desconocer lo dispuesto en las leyes marco respectivas y tienen un ámbito más amplio que los decretos ordinarios, expedidos por el Gobierno en desarrollo de su potestad reglamentaria general. 2 Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>La Carta Política establece que el Gobierno Nacional ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que desarrollan la actividad financiera (art. 189, n. 24); esta función la ejerce a través de la Superintendencia Financiera, organismo técnico con autonomía financiera y administrativa, que expide normas de carácter general, contenidas en resoluciones y circulares, con el objeto de instruir a las entidades sobre cómo deben ejercer su actividad. Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>Por su parte, la Junta Directiva del Banco de la República es la máxima autoridad monetaria, cambiaria y crediticia que, con sujeción a las leyes marco que expide el Congreso (art. 150, n.22), profiere resoluciones y cartas circulares sobre el tema. Estas normas también tienen un carácter especial y su rango es similar al de la Ley. Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>En resumen, la normatividad aplicable al sector financiero está organizada jerárquicamente así: en primer lugar, en la Constitución Política de Colombia; en segundo lugar, las leyes marco expedidas por el Congreso de la República, las leyes ordinarias, las resoluciones y cartas circulares que expide el Banco de la República en desarrollo de sus funciones, y los decretos con fuerza de ley que expide el Gobierno con base en facultades extraordinarias, como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el siguiente nivel se encuentran los decretos reglamentarios que expide el Gobierno en desarrollo de las leyes marco y, finalmente, las circulares y resoluciones que expide la Superintendencia Financiera en ejercicio de su actividad de inspección y vigilancia. Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>Las leyes marco son aquellas mediante las cuales se dictan los objetivos y criterios a los cuales debe someterse el Gobierno para el desarrollo de estas materias. Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>Los decretos que expide el presidente en desarrollo de las leyes marco previstas en el artículo 150, numeral 19, no gozan, (B) de fuerza material de ley. Ellos tienen por límite el texto de la correspondiente ley general, que fija pautas y criterios al ejecutivo, y no pueden modificarla ni cambiar las reglas que establece. Son decretos típicamente administrativos, y más exactamente reglamentarios, aunque con un ámbito más amplio que el señalado en la Constitución para los decretos expedidos en desarrollo del artículo 189, numeral 11, de la Constitución". Corte Constitucional. Sentencia C-608 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Fuente ASOBANCARIA.</p> <p style="text-align: center;">MARCO LEGAL Recopilación Fuente ASOBANCARIA. https://www.asobancaria.com/normatividad/</p> <p>"LEY 45 DE 1990 Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones".</p>	<p>Es una de las reformas estructurales más importantes del sistema financiero colombiano. Estuvo orientada hacia la liberalización de los mercados y la internacionalización de la economía, y dio paso a la estructura de la multibanca dentro del modelo de matrices y filiales. Mediante ésta se autorizó la participación de los establecimientos de crédito en la propiedad de entidades orientadas a la gestión de portafolios, actividades fiduciarias, la administración de pensiones y cesantías, y la venta de seguros y corretaje. Otro de sus aportes fue la autorización al Ejecutivo para expedir el primer Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual estaba contenido en el Decreto Ley 1730 de 1991. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>Normas relativas a las instituciones financieras: filiales de servicios y operaciones novedosas; reglas relativas a la organización, integración, escisión y liquidación de instituciones financieras; inspección, control y vigilancia; revisoría fiscal y estatuto orgánico y disposiciones complementarias. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>De la actividad aseguradora: disposiciones generales; condiciones de acceso a la actividad aseguradora; condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora; revocación o suspensión del certificado de autorización; disolución y seguros oficiales. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>Transparencia de las operaciones: intereses, de la competencia y la información, protección de tomadores y asegurados y disposiciones finales. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p style="text-align: center;">"LEY 35 DE 1993 Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora".</p> <p>Mediante esta ley se reguló la intervención, inspección, vigilancia y control del Gobierno Nacional en las actividades financiera, bursátil y aseguradora. Igualmente, se estableció el procedimiento de venta de acciones del Estado en instituciones financieras y entidades aseguradoras. En desarrollo de las facultades que esta ley otorgó al Gobierno Nacional para la actualización de la normatividad financiera, se expidió el Decreto 663 de 1993, actual Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p style="text-align: center;">"LEY 510 DE 1999 Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades".</p> <p>Esta ley, publicada el 4 de agosto de 1999, constituyó una reforma al sistema financiero, que incluyó la modificación del régimen de toma de posesión y de los requisitos para la creación de instituciones financieras. Además, estableció un nuevo sistema de crédito a largo plazo para vivienda. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p>
<p>De manera concreta, esta ley reformó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en las siguientes materias: Condiciones de ingreso al Sistema Financiero, facultades de intervención del Gobierno Nacional, régimen de inversiones de capital, régimen de los establecimientos bancarios, régimen de las corporaciones financieras, régimen de las corporaciones de ahorro y vivienda, régimen de las compañías de financiamiento comercial, medidas cautelares y toma de posesión, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y seguro de depósitos, Superintendencia Bancaria, disposiciones relativas al mercado de valores, régimen del Banco Cafetero y financiación de vivienda a largo plazo. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>Esta ley ha sido modificada y parcialmente derogada por las Leyes 676 de 2001, 964 de 2005 y por el artículo 54 del Decreto 775 de 2005. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>"LEY 546 DE 1999 Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones".</p> <p>La importancia de esta norma radica en que modificó la estructura de la financiación de vivienda al introducir la denominada Unidad de Valor Real Constante, UVR, unidad que permite ajustar el valor de los créditos en el tiempo de acuerdo con el costo de vida del país (Índice de Precios al Consumidor, IPC). La ley facultó al Consejo de Política Económica y Social (Conpes) para establecer la metodología de cálculo del valor de la UVR. Actualmente, el valor de la UVR es calculado por el Banco de la República para cada uno de los días del año. Otros aportes de la conocida Ley de Vivienda son la innovación en modelos y estructuras para el crédito hipotecario, por ejemplo, el sistema de titularización, y el impulso al desarrollo de garantías estatales para los créditos de vivienda de interés social. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>Disposiciones generales, recursos para la financiación de vivienda, titularizaciones, régimen tributario de los bonos hipotecarios y de los títulos representativos de cartera hipotecaria, régimen de financiación de vivienda a largo plazo, vivienda de interés social, mecanismos de solución de conflictos, régimen de transición y otras disposiciones. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p style="text-align: center;">"LEY 795 DE 2003 Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones". Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>Esta ley introdujo modificaciones a los institutos de salvamento y protección de la confianza del público, la exclusión de activos y pasivos y el desmonte progresivo de operaciones. También reformó el régimen sancionatorio, especialmente el procedimiento para la interposición de sanciones, como consecuencia de algunos pronunciamientos de la rama jurisdiccional relacionados con las facultades sancionatorias de la Superintendencia Bancaria de la época. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p>	<p>Además, incluyó normas en lo relacionado con los siguientes temas: régimen de conflictos de interés, reglas de conducta de los administradores, derechos de información en cabeza de los usuarios, y autorizó a los establecimientos de crédito la realización de dos nuevas operaciones: administración "no fiduciaria" de cartera y operaciones de leasing habitacional. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p>Los capítulos contenidos en esta ley son los siguientes: Disposiciones que modifican el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, régimen sancionatorio, reglas generales, régimen personal, régimen institucional, intereses sobre sanciones, Fondo Nacional de Garantías S.A. y otras disposiciones relacionadas con el sector financiero. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p style="text-align: center;">"LEY 964 DE 2005 Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúan mediante valores, y se dictan otras disposiciones".</p> <p>Mediante esta ley, conocida como del mercado de valores, se dictan disposiciones sobre: los objetivos y criterios de intervención del Gobierno Nacional que impliquen el manejo o inversión de recursos captados del público a través de valores, las actividades del mercado de valores y el concepto de valor, la supervisión del sistema integral de información del mercado de valores, los sistemas de compensación y liquidación de obligaciones, la anotación en cuenta y las operaciones sobre valores, las cámaras de riesgo central de contraparte, autorregulación del mercado de valores, protección a inversionistas, infracciones, sanciones administrativas y el procedimiento sancionatorio. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p> <p style="text-align: center;">"LEY 1328 DE 2009 Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones".</p> <p>La modificación más importante introducida por esta ley es el régimen de protección al consumidor financiero, en el cual se incluyeron los siguientes temas, entre otros: derechos y obligaciones, Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), suministro de información al consumidor y cláusulas y prácticas abusivas. También introdujo una modificación importante al sistema pensional colombiano al establecer un sistema de multifondos, los cuales, para su funcionamiento, tendrán en cuenta el perfil de riesgo de los afiliados. Sobre la estructura del sistema financiero, eliminó la palabra comercial de la denominación legal de las compañías de financiamiento comercial, autorizó a los establecimientos de crédito la realización de dos nuevas operaciones (otorgar crédito para adquirir el control de otras sociedades o asociaciones y realizar operaciones de leasing y arrendamiento sin opción de compra) y clasificó como sociedades de servicios financieros a las antiguas casas de cambio, les cambió su denominación legal por "sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales" y les autorizó la realización de nuevas operaciones, entre las que se destaca la de ser corresponsales no bancarios. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.</p>

También introdujo las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en acuerdos de integración comercial con otros países para la liberalización comercial de los servicios financieros. Acerca de la Superintendencia Financiera de Colombia, estableció como criterios para el ejercicio de la supervisión los principios de materialidad y de acceso a la información para la protección de la estabilidad y confianza en el sistema financiero, y le otorgó facultades para el ejercicio de una supervisión comprensiva consolidada. Finalmente, hizo referencia a otros temas como la titularización de la cartera hipotecaria y de los contratos de leasing habitacional, la impugnación de las decisiones de los organismos autorreguladores y la normalización de cartera, entre otros. Recopilación Fuente ASOBANCARIA.

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO

La presente Ley busca aportar a la recuperación económica, liberando endeudamiento a las personas naturales y MIPYMES con el fin de aumentar su liquidez y capacidad de endeudamiento para que de esta manera se incentive el consumo y la adquisición de más crédito que permita dinamizar al transaccionalidad comercial del país, con mayor flujo de efectivo circulando en la economía, impulsando las compras, la producción y por ende la generación de empleo.

Con esta ley se logrará solventar de alguna manera la crisis económica que tienen los hogares en este momento disminuyendo cargas emocionales, psicológicas y relacionales de las personas ya que, al estar menos endeudados, puede tener mayores niveles de tranquilidad y proyección a futuro para mejorar la calidad de vida.

CONCLUSIÓN

Se hace necesario la aprobación de esta ley por parte del congreso de la república en correspondencia al voto de confianza que los ciudadanos depositan en esta corporación, quienes necesitan sentirse representados de verdad por un congreso que piense y busque soluciones reales a las dificultades por las que atraviesa el país; esta ley permita dar un alivio más a nuestros compatriotas y brindara un aporte significativo a la reactivación económica del país a través del incentivo al consumo.

Con la presente exposición de motivos, me permito solicitarle de la manera más cordial al honorable secretario de la Cámara de representantes asignar coordinador ponente y ponentes secundarios al presente proyecto del Ley y dar trámite para debate en las comisiones que corresponda.

Cordialmente,



GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO
Representante a la Cámara por Cundinamarca
Congreso de la República de Colombia

Texto del proyecto de Ley:

“Proyecto de Ley No () por medio del cual se reestructuran los pasivos financieros para personas naturales y MIPYMES, como aporte a la recuperación económica a causa de la crisis ocasionada por el cierre de sectores productivos para evitar la propagación del COVID 19 y se dictan otras disposiciones”

El congreso de la Republica

Decreta

Artículo Primero: de la tasa de interés para entidades financieras. Crease la tasa de interés única post-pandemia para reestructurar los créditos de consumo y microcréditos que las personas naturales y MIPYMES del país adquirieron desde el primero de enero del año 2018 hasta la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo Segundo: Fijación del valor porcentual de la tasa. El valor de la tasa de interés única post-pandemia será fijado por todas las entidades financieras en el 1% Efectivo anual.

Artículo Tercero: de la Aplicación de la Tasa de interés única post-pandemia. La aplicación de la tasa de interés única post-pandemia será aplicada a todos los créditos de consumo y microcréditos adquiridos por personas naturales y MIPYMES que hayan adquirido un producto financiero desde el 1 de enero del 2018 hasta la entrada en vigencia de la presente ley.

La tasa de interés post-pandemia será efectiva por una única vez a los créditos cuyos titulares decidan reestructurar sus créditos de consumo o microcréditos siendo personas naturales o MIPYMES.

Artículo Cuarto: de los créditos de consumo y microcréditos. A la luz de la presente ley se entiende por créditos de consumo todo aquel producto financiero otorgado a personas naturales o MIPYMES bajo las siguientes denominaciones:

- a. Libre inversión.
- b. Libranza.
- c. Tarjeta de crédito.
- d. Crédito Rotativo.
- e. Crédito de Vehículo.

En referencia a los micro-créditos, entraran en el rango de aplicación de la reestructuración de la deuda, aplicando la tasa de interés única post-pandemia.

Artículo Quinto De los plazos: Los titulares de los cerditos podrán decidir si con la aplicación de la nueva tasa de interés única post-pandemia, redifieren el crédito entre 1 y 72 meses o si prefieren bajar el valor de la cuota mensual con el plazo del crédito actual.

Artículo Sexto: del derecho a reestructurar deudas. Todos los colombianos que desde el 01 de enero del año 2018 y las MIPYMES que hayan adquirido créditos de consumo o microcréditos, tendrán derecho de solicitar por una única vez la reestructuración de sus productos crediticios con todas las entidades financieras que ofrecen servicios crediticios en el país.

Este derecho podrá aplicarse a todos los créditos de consumo o microcréditos que tengan las personas naturales o MIPYES a la entrada en vigencia de la presente Ley siempre y cuando cumplan con lo establecido en el artículo decimo también de la presente Ley.

Artículo Séptimo: de la unificación de deudas. Las personas naturales y/o MIPYMES que tengan más de un producto de crédito con una sola entidad, podrá solicitar a la misma, la unificación de

todos los productos en uno solo, con la tasa de interés única post-pandemia y en los plazos establecidos en el artículo quinto de la presente Ley.

Artículo Octavo: de los créditos de vivienda. Para efectos de la presente ley de reestructuración de pasivos financieros para personas naturales y en relación a los créditos de vivienda, los titulares, podrán a la entrada en vigencia de la presente Ley, solicitar el cambio de línea UVR a pesos con cuota fija sin que la entidad financiera tenga que hacer nuevos estudios ni tramites adicionales.

Artículo Noveno: de la forma de acceder. Los titulares de los créditos de consumo, microcrédito y vivienda que deseen acceder a la reestructuración de sus pasivos con entidades financieras, deberá expresar de forma voluntaria a la entidad financiera su deseo de acogerse a la presente Ley en las condiciones de plazo que le sean favorables.

Artículo Decimo: de los requisitos para acceder: Para acogerse a lo dictado en la presente Ley los titulares de los créditos deberán no haber sido reportado en centrales de riesgo ni haber quedado en mora antes del inicio de los confinamientos dictados por el gobierno nacional el 12 de marzo del 2020.

Para tal efecto las centrales de riesgo deberán cooperar con las entidades financieras con el fin de garantizar el cumplimiento de este articulo y garantizar la aplicación de esta ley a los colombianos que se hubiesen visto afectados por la crisis económica generada por la pandémica del Virus COVID-19.

Artículo Decimo Primero: De las obligaciones de las entidades financieras. Todas las entidades financieras que presten servicios crediticios en el territorio Nacional, deberá garantizar el procedimiento logístico y la aplicación de la presente ley en los términos acá establecidos sin excepción alguna.

Artículo Décimo Segundo: De los organismos de control. Sera la Súper Intendencia Financiera la encargada de vincular los efectos de la presente ley al Programa de Acompañamiento de duros (PAD) reglamentando dichos efectos de su aplicación y ejerciendo los respectivos controles para su cumplimiento.

Artículo Décimo Tercero: Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.



GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO
Representante a la Cámara por Cundinamarca
Congreso de la República de Colombia

El derecho a la igualdad de las mujeres reconocido en la Constitución y en la jurisprudencia, se debe al contexto social que existía antes de la década de los años 90. La Corte Constitucional en la Sentencia C-203 de 2019 refiere que *"las mujeres han tenido que vivir diversas luchas para reivindicar sus derechos y lograr espacios efectivos de participación, históricamente la situación de desventaja que en múltiples campos han padecido las mujeres durante largo tiempo, se halla ligada a la existencia de un vasto movimiento feminista, a las repercusiones que los reclamos de liberación producen, incluso en el ámbito constitucional, y a la consecuente proyección de esa lucha en el campo de la igualdad formal y sustancial (...). Las consideraciones acerca de la inferioridad de la mujer y de su sometimiento a la voluntad del varón, tienen una larga historia; (...) La preocupación básica se tradujo entonces en el logro de la igualdad jurídica, empeño que actualmente, y luego de una lenta evolución, cristaliza en el reconocimiento formal de la igualdad entre los sexos en el ordenamiento jurídico de numerosos países y en el plano internacional"*.

Por otra parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-371 de 2000 indica que en efecto *"No hay duda alguna de que la mujer ha padecido históricamente una situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familia, a la educación y al trabajo. Aun cuando hoy, por los menos formalmente, se reconoce igualdad entre hombres y mujeres, no se puede desconocer que para ello las mujeres han tenido que recorrer un largo camino"*.

En esta misma sentencia se afirma que *"Poco a poco la lucha de las mujeres por lograr el reconocimiento de una igualdad jurídica, se fue concretando en diversas normas que ayudaron a transformar ese estado de cosas. Así, por ejemplo, en materia política, en 1954 se les reconoció el derecho al sufragio, que pudo ser ejercido por primera vez en 1957. En materia de educación, mediante el Decreto 1972 de 1933 se permitió a la población femenina acceder a la Universidad. En el ámbito civil, la ley 28 de 1932 reconoció a la mujer casada la libre administración y disposición de sus bienes y abolió la potestad marital, de manera que el hombre dejó de ser su representante legal. El decreto 2820 de 1974 concedió la patria potestad tanto al hombre como a la mujer, eliminó la obligación de obediencia al marido, y la de vivir con él y seguirle a donde quiera que se trasladase su residencia; el artículo 94 decreto ley 999 de 1988 abolió la obligación de llevar el apellido del esposo, y las leyes 1ª de 1976 y 75 de 1968 introdujeron reformas de señalada importancia en el camino hacia la igualdad de los sexos ante la ley. En materia laboral, la ley 83 de 1931 permitió a la mujer trabajadora recibir directamente su salario. En 1938, se pusieron en vigor normas sobre protección a la maternidad, recomendadas por la OIT desde 1919, entre otras, las que reconocían una licencia remunerada de ocho semanas tras el parto, ampliada a doce semanas mediante la ley 50 de 1990. Por su parte, mediante el Decreto 2351 de 1965, se prohibió despedir a la mujer en estado de embarazo"*.

Igualmente, la Corte Constitucional en la Sentencia C-667 de 2006 ratifica que *"aún cuando la igualdad formal de género se ha incorporado progresivamente al ordenamiento jurídico colombiano, la igualdad material todavía constituye una meta, demostrada en la subsistencia de realidades sociales desiguales. Ahora bien, sin ignorar el avance que supone la igualdad formal, la que se predica ante la ley (su ausencia sería un enorme obstáculo para la elevación de las condiciones de la mujer), no debe*

olvidarse que la exclusión de la discriminación por razón de sexo contenida en el artículo 13 de la Carta, no se detiene en la mera prohibición sino que abarca el propósito constitucional de terminar con la histórica situación de inferioridad padecida por la población femenina; esa decisión autoriza, dentro de un principio de protección, la toma de las ya mentadas acciones afirmativas, dirigidas a corregir las desigualdades de hecho, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económico y social".

Por lo tanto, bajo estos supuestos se hace necesario implementar medidas que vayan direccionadas a disminuir las brechas que persisten en la vida de las mujeres y continuar generando políticas públicas que se acerquen alcanzar una real equidad de género con el compromiso y la participación activa del Estado y la sociedad, en ese sentido la Corte Constitucional en la Sentencia C-667 de 2006 es clara en subrayar *"la mujer es sujeto constitucional de especial protección y en esa medida no sólo sus derechos generales sino igualmente los específicos, requieren de atención fija por parte de todo el poder público, donde se incluyen los operadores jurídicos"*.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 195 DE 2021 CÁMARA

por medio del cual se crea el Código de la Mujer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto de Código tiene por objeto consolidar la normatividad vigente sobre los derechos de las mujeres reconocidos en Colombia, con el propósito que se convierta en el único instrumento jurídico que integra y orienta todas las disposiciones legislativas que garantizan la protección de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida y en aquellos que se encuentran en condiciones de desigualdad y discriminación de género, siendo esta una herramienta que fortalezca la apropiación y aplicación de la norma de manera eficaz y eficiente por parte de todos los actores que intervienen directa o indirectamente por el bienestar de las mujeres.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Fundamento constitucional

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política es un derecho fundamental que *"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica"*. Este principio constitucional comprende que en el Estado Colombiano cualquier persona incluyendo las mujeres gozan de igual trato en la sociedad sin distinción alguna a su identidad o procedencia, así pues se hace énfasis en que la carta política reconoce que todos son sujetos de derechos.

Del mismo modo, en el artículo 43 de la Constitución se reitera que *"La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia"*.

Cuando se señala que, la mujer no podrá ser sometida a ninguna forma de discriminación abarca a nivel político, económico y social, lo que significa que la Constitución y la jurisprudencia, también reconocen los diferentes ámbitos o espacios en los que las mujeres tienen derecho a participar en igualdad de condiciones, de ahí que en el artículo 40 de la Constitución señala que *"Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político"*, asimismo en el artículo 42 está establecido que *"Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes"* y en el artículo 53 se enmarca una protección especial a las mujeres en el sector laboral, lo que demuestra que estos son ejes esenciales en el ordenamiento jurídico.

1. Perspectiva Internacional

La desigualdad y discriminación que experimentan las mujeres a lo largo de la vida siempre ha sido un fenómeno social en estudio desde una visión global, continental y nacional, bajo ese mismo análisis es indiscutible que cada contexto posee unas dinámicas particulares, sin embargo todos tienen un aspecto en común que hace parte de la historia y de la configuración social, política, legal y económica de cada Estado siendo las brechas de género un desafío por resolver para alcanzar un mundo más equitativo.

El abordaje de las persistentes disparidades de género es una preocupación para los países, la comunidad internacional, sociedad civil y academia, de tal magnitud que es una prioridad en la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde su aprobación en 2015; es la nueva hoja de ruta en los posteriores 15 años para los 193 Estados miembros y suscritos a esta guía de referencia, en la que se incluye Colombia, a partir de estos lineamientos se destaca el énfasis en orientar todas las acciones para contribuir a la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, lo que implica que la igualdad de género sea transversal en las políticas e inversión pública para que sea determinante en el fomento de sociedades inclusivas y justas.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un compromiso universal entre las naciones que será materializado mediante el cumplimiento y/o avance de los 17 objetivos propuestos y en lo que respecta a las necesidades de la población femenina, principalmente se resalta el objetivo 5. Lograr la igualdad de género, porque resulta imprescindible eliminar todas las formas de discriminación a mujeres y niñas, proporcionar las condiciones necesarias que garanticen el acceso a la educación,

tecnología, atención en salud reproductiva, un trabajo decente y participación en espacios de toma decisiones políticas y económicas.

En la misma línea, otro aspecto que tiene relevancia mencionar es el correspondiente al objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; el acceso y respeto por los derechos humanos es impostergable, es definitivo que la protección y seguridad hacia las mujeres pasa por reconocer la importancia de la justicia y el rol fundamental que desempeñan los gobiernos y las instituciones democráticas robustas en el sentido que adoptan alianzas y medidas basadas en el aprovechamiento de los recursos públicos y privados orientados a la calidad del servicio, fortalecer la confianza institucional y en general al bienestar de la población.

Esto significa que en el plano nacional e internacional se debe facilitar el acceso a la justicia para todos, lo que conlleva a eliminar cualquier obstáculo que impida el goce efectivo de los derechos de las personas. ONU Mujeres (2020) en el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre Justicia para las Mujeres a través de la aplicación de la Encuesta de Población General del Proyecto de Justicia Mundial realizado en 45 países identifica que los grupos marginados y desfavorecidos tienen más probabilidades de presentar problemas legales y a su vez de enfrentar barreras culturales y estructurales para acceder a la justicia.

En este mismo informe se indica que las necesidades de justicia de las mujeres están sujetas a diferentes variables según su estatus socioeconómico y familiar, ubicación, edad y origen étnico, lo que enmarca una evidente superposición de desventajas que traen como consecuencia una discriminación legal en la familia, el lugar de trabajo, la política y la sociedad, o no tienen una protección legal porque existe una disparidad entre la promesa de justicia y la realidad, lo que significa que la normatividad no es neutral al género termina afectando en cierta medida más a uno que otro.

De igual modo, así como son de heterogéneas las mujeres que pueden acceder a la justicia asimismo son de diversas las necesidades o razones por las que acuden al sistema legal donde abarcan aspectos como la familia, el matrimonio, la propiedad, la herencia y las disputas por tierras, los asuntos de inmigración y asilo, el acoso sexual, el tráfico de personas y la explotación laboral, e incluso la denegación del derecho al trabajo autónomo.

Teniendo en cuenta, lo anteriormente dicho en términos de justicia e instituciones sólidas al igual que lograr una igualdad de género tiene una discusión amplia y multidimensional que en el camino se ira resolviendo, ahora es importante señalar que al destacar ciertos ODS, no se desestima los demás por el contrario desde un panorama general existe una interdependencia entre los objetivos, básicamente el cumplimiento de todos contribuye alcanzar un desarrollo humano integral, por lo tanto los ODS son un instrumento de planeación para avanzar hacia el cierre de brechas para que "nadie se quede atrás".

En cuanto al análisis de revisar los avances en el cierre de brechas el Foro Económico Mundial en el último reporte anual sobre Global Gender Gap Report 2020 (Informe mundial sobre la brecha de género 2020) en la evaluación de 153 países de manera general en promedio el progreso hacia la paridad de género alcanzado el 68,6% lo que indica que todavía hay una disparidad del 31,4% a nivel mundial, igualmente las mujeres

han logrado igualdad aproximadamente en salud y supervivencia el 97%, en logro educativo 96%, en participación y oportunidades económicas 58% y empoderamiento político 25%. Los países nórdicos siguen a la cabeza de la paridad de género, igualmente se resalta que los datos contenidos en la Tabla 1. se visualiza el ranking de los países que ocupan los primeros 30 puestos y Colombia se ubica en la posición número 22 con una puntuación de 0.75.

Tabla 1. The Global Gender Gap Index 2020 rankings (Clasificación del índice Global de Brecha de Género 2020).

Rank	Country	Score	Rank change			Score change		
			0-1	2019	2018	2006		
1	Iceland	0.877	-	-	+0.018	+0.095		
2	Norway	0.842	-	-	+0.007	+0.043		
3	Finland	0.832	1	-	+0.012	+0.038		
4	Sweden	0.820	-1	-	-0.002	+0.007		
5	Nicaragua	0.804	-	-	-0.005	+0.147		
6	New Zealand	0.799	1	-	-0.002	+0.048		
7	Ireland	0.798	2	-	+0.002	+0.065		
8	Spain	0.795	21	-	+0.049	+0.063		
9	Rwanda	0.791	-3	-	-0.013	n/a		
10	Germany	0.787	-4	-	+0.011	+0.034		
11	Latvia	0.785	8	-	+0.027	+0.076		
12	Namibia	0.784	-2	-	-0.005	+0.098		
13	Costa Rica	0.782	9	-	+0.033	+0.089		
14	Denmark	0.782	-1	-	+0.004	+0.036		
15	France	0.781	-3	-	+0.002	+0.129		
16	Philippines	0.781	-8	-	-0.018	+0.028		
17	South Africa	0.780	2	-	+0.025	+0.068		
18	Switzerland	0.779	2	-	+0.024	+0.079		
19	Canada	0.772	-3	-	+0.001	+0.055		
20	Albania	0.769	14	-	+0.035	+0.108		
21	United Kingdom	0.767	-6	-	-0.007	+0.031		
22	Colombia	0.758	18	-	+0.029	+0.053		
23	Moldova	0.757	12	-	+0.023	+0.044		
24	Trinidad and Tobago	0.756	n/a	-	n/a	+0.076		
25	Mexico	0.754	25	-	+0.034	+0.108		
26	Estonia	0.751	7	-	+0.017	+0.057		
27	Belgium	0.750	5	-	+0.012	+0.042		
28	Iceland	0.749	-7	-	-0.004	n/a		
29	Bhaseu	0.748	-1	-	-	n/a		
30	Argentina	0.746	6	-	+0.014	+0.063		

Fuente: World Economic Forum. (2020).

En definitiva, las cifras muestran que hasta la fecha ningún país ha logrado la plena paridad de género, World Economic Forum (2020) estima que al ritmo en que se encuentra el mundo actualmente para alcanzar la igualdad de género se necesitará un siglo para cerrar las brechas y particularmente en participación y oportunidades económicas se tomara 257 años, en empoderamiento político tardará 94,5 años y lo más próximo a cerrarse es el logro educativo en 12 años.

Las proyecciones son desafiante para los Estados y superar las desigualdades entre hombres y mujeres resulta ser una prioridad para cada nación, se requiere focalizar esfuerzos que generen las condiciones pertinentes para acelerar el proceso de igualdad, por ello es necesario establecer coaliciones en el sector público como en el privado, fortalecer el marco legal, desarrollar políticas eficaces, realizar una distribución del

presupuesto acorde la situación de los diferentes países y un sistema político que esté dispuesto avanzar a una sociedad más próspera y justa.

Los compromisos de los Estados, también se encuentran enmarcados en acuerdos internacionales partiendo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada por Naciones Unidas en 1979, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará (1994) y La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995); estos instrumentos históricamente han tenido relevancia porque desde su promulgación y los países que poco a poco han ratificado estos estándares reconocen que la desigualdad de género es una realidad, por consiguiente los tratados se convierten en herramientas que ayudan a contrarrestar los efectos de la desigualdad que viven las mujeres.

En ese sentido, el empoderamiento de las mujeres y niñas ha estado en la agenda de los países, sin embargo en el transcurso del tiempo se presentan complejos cambios políticos, sociales, económicos y ambientales que influyen en que ocurra un retroceso en materia de los derechos de las mujeres e impiden que los avances sean más acelerados, es así que la misma historia y las proyecciones demuestran que los retos son enormes mas no insuperables, es cuestión de insistir y actuar en que las transformaciones sistémicas sean posibles.

Las movilizaciones y conquistas ganadas por las organizaciones de mujeres han contribuido a instaurar cambios en beneficio de la vida de las mujeres y junto con las acciones de la comunidad internacional hoy determinan el horizonte no solo de la generación actual de mujeres jóvenes, sino también de las generaciones futuras. Indiscutiblemente, se reconoce que el progreso para alcanzar la igualdad de género ha sido importante, aunque ha ocurrido de forma gradual y hoy muchas pueden gozar de unos derechos y oportunidades que hace 50 años era impensables, no obstante continúa siendo desigual e insuficiente.

ONU Mujeres (2020) estima que en todo el mundo las mujeres entre 25 y 34 años tienen un 25% más de probabilidad que los hombres de vivir en la pobreza extrema, es decir que por cada 100 hombres, 125 mujeres están atrapadas en la pobreza extrema; El 39% de las mujeres trabajadoras se desempeñan en la agricultura, la silvicultura y la pesca, sin embargo solo el 14% son dueñas de las tierras; En promedio, las mujeres realizan el triple del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres; La disparidad de género en la participación laboral de personas entre 25 a 54 años de edad es del 31%, mientras los hombres ocupan un 93%, las mujeres tan solo el 62%.

Igualmente, este organismo indica que la brecha salarial de género está en un 16% y en algunos países las mujeres ganan hasta un 35% menos que los hombres; 740 millones de mujeres trabajan en el sector informal; El 31% de las jóvenes entre 15 y 29 años no asisten a la escuela, no tienen empleo ni reciben capacitación frente al 14% de los hombres, además se destaca que el 25% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres más del doble que la proporción registrada en 1995 que fue del 11%.

A nivel mundial, el 18% de las mujeres entre 15 a 49 años han experimentado violencia física o sexual por su pareja en los últimos 12 meses; Menos del 40% de las mujeres

que son afectadas por la violencia buscan algún tipo de ayuda, como consecuencia de las barreras y la falta de confianza en los sistemas de justicia; 12 millones de niñas, 1 de cada 5 casos contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años de edad; 190 millones de mujeres entre 15 a 49 años en todo el mundo deseaban evitar el embarazo y no utilizaron ningún método anticonceptivo y el 34% de las adolescentes de entre 15 y 19 años se les ha practicado mutilación genital femenina en 31 países.

2. Panorama en América Latina y Colombia

Por otro lado, es importante conocer los progresos y rezagos en la región, acerca de la situación de las mujeres, de modo general no difiere demasiado de la realidad global; según la Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS (2020) en promedio por cada 100 hombres existen 132 mujeres que viven en la pobreza. A través de un estudio realizado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS-UNLP) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Marchionni (2019) señala que el acceso y participación de las mujeres en la educación ha tenido un notable avance desde la década de 1990.

De tal modo que, los años de educación de las mujeres adultas entre 25 a 54 años de edad aumentaron de 7 años a casi 10 años para el promedio de los países de la región, fue un progreso mucho mayor al que lograron los hombres en el mismo periodo, igualmente se resalta que el acceso a los diferentes niveles educativos el primario es prácticamente universal en América Latinoamericana, sin distinción de género. No obstante, el avance educativo no se ha extendido a todas las mujeres por igual, y ha sido menor en las zonas rurales debido a la insuficiente cobertura geográfica de servicios de educación en estas áreas.

Es de igual relevancia, mencionar que en este mismo estudio se identifican las brechas de aprendizaje de género, según los resultados de la prueba PISA en 2015 (Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos) muestran que el rendimiento de las mujeres en lectura es mayor que el de los hombres (4,2%, en promedio), mientras que lo contrario sucede en matemáticas (-3%) y en ciencias (-2,4%). Estas disparidades se atribuyen a condicionantes culturales y al parecer a temprana edad es poca o inexistente las diferencias entre los géneros, más bien tiende a incrementarse a medida que se progresa en el sistema educativo.

Los datos anteriormente señalados se asocian con la elección de profesión u oficio, donde se registra una baja participación de las mujeres en carreras vinculadas a ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Las estadísticas de la UNESCO en 2015 registraron que solo el 10% de las mujeres que se matriculan en estudios de educación superior en América Latina lo hace en áreas de ingeniería o de tecnología de la comunicación e información, cifra que en el caso de los hombres asciende al 33%.

Por otra parte, en América Latina la participación de la mujer en autonomía económica fue baja hasta la década de los noventa, a partir de este momento se presentó un incremento significativo debido a factores demográficos como la reducción de la fecundidad y el cambio en la composición de las familias latinoamericanas, dando lugar a una clara mejoría en la incursión laboral de la mujer en la región. No obstante de

acuerdo a la evolución en el tiempo el aumento tendencial de la participación laboral femenina se está desacelerando y parece haberse detenido.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2018-2019), refiere que el estancamiento en la participación laboral de las mujeres es ocasionado porque aún existe un grupo importante de mujeres que no puede entrar al mercado laboral por atender situaciones familiares, en particular por el cuidado de personas dependientes, trabajo doméstico o la prohibición por parte de miembros del hogar, un promedio del 70,2% de las mujeres entre 20 y 59 años de edad señalan que por estas razones no buscan activamente o se desempeñan en un trabajo remunerado.

A pesar que, el trabajo no remunerado que se realiza en los hogares no tiene una retribución económica según la CEPAL (2018) se estima que en la región representa entre el 15,2% y el 24,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Otro aspecto a resaltar, es que en promedio el 40% de la población ocupada tiene ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por cada país en América Latina y esa proporción es mucho más elevada entre los jóvenes, los mayores de 65 años y las mujeres a lo largo del ciclo de vida.

Del mismo modo, la OISS (2019-2020) señala que el 79% de las mujeres empleadas trabajan en los sectores de baja productividad y el 75% de las mujeres en la región trabajan sin un contrato laboral y no tienen acceso a ningún sistema de Seguridad Social, lo cual limita sus oportunidades de participar en el sector formal de la economía y de tener mejores sueldos, con prestaciones como la jubilación y el seguro de salud. La exclusión desproporcionada de las mujeres en los sistemas de protección social implica que estas no puedan contar con los mismos niveles de acceso a servicios de salud, cuidados, programas para vivienda, ni de ahorro para el retiro.

Con respecto a la participación política, en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2020) se indicó que han pasado casi treinta años desde la aprobación de la primera Ley de Cupo en América Latina que permitió la incorporación de un número mínimo de mujeres en las nominaciones electorales, lo que significa que el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres ha avanzado sin embargo no son homogéneos en todos los países, en promedio en la región se ha producido un incremento del 15,2% al 31,2% entre 2002 y 2019 esta participación sigue siendo inferior a la masculina, adicionalmente las mujeres indígenas, afrodescendientes, LGBTI y jóvenes continúan experimentando exclusión en los espacios de toma de decisiones.

Asimismo, la violencia de género ocasiona desigualdades en la cual las mujeres son las más afectadas, la CEPAL (2019) indica que 4 de cada 10 niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años han experimentado alguna vez violencia por parte de su pareja y 1,1 millones de niñas y adolescentes de 15 a 19 años han vivenciado en algún momento desde su infancia violencia sexual, también resulta inquietante que la mayor incidencia de pobreza ocurre entre las poblaciones más jóvenes, el 46% en niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años y del 32,5% en las personas de 15 a 24 años, esta situación de vulneración se presenta debido a la alta prevalencia de embarazo a edad temprana y la persistencia del matrimonio precoz o infantil, entre otras.

En lo que atañe al disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPFA (2018) señala que en todos los países aún

no se cumple de forma universal y falta alcanzar el goce pleno para decidir libremente y disponer de la información o los medios necesarios para satisfacer las necesidades en relación al bienestar y la salud de las mujeres, porque persiste las prácticas como el matrimonio a temprana edad que guarda una estrecha relación con la maternidad precoz, la carencia o mala calidad de los servicios de atención en salud y el escaso ingreso mensual que perciben las mujeres, lo que impiden el acceso a servicios de salud reproductiva y conlleva a que en este aspecto se enmarque unos obstáculos sociales, económicos e institucionales.

En Latinoamérica desde una perspectiva general la garantía de los derechos sexuales y reproductivos se caracteriza por tener limitaciones con respecto a la baja inversión pública en planificación familiar, no obstante aun así se le asigna una gran responsabilidad a las mujeres sobre la reproducción, según la UNPFA (2018) en los países en desarrollo, se producen 89 millones de embarazos no deseados al año, y alrededor del 43% de esos embarazos son no planeados. La CEPAL (2019) lo que ha evidenciado es que en la última década ha aumentado los recursos para el acceso a métodos anticonceptivos en promedio para América Latina y el Caribe pasó de un 81,6% en 2010 a un 82,8% en 2017.

A partir de lo anteriormente dicho, es necesario destacar que la situación de las mujeres latinoamericanas y caribeñas es heterogénea, la CEPAL (2019) afirma que se ven enfrentadas a diferentes expresiones de la desigualdad según la etapa del ciclo vital que atraviesen, las disparidades de género perduran durante toda la vida, inician en la infancia y culminan en la edad avanzada, también es importante considerar que detenerse a analizar los avances que han obtenido las mujeres hasta el momento conlleva a observar que continua existiendo diferencias entre hombres y mujeres que producen jerarquías sociales y adentrarse a examinar las condiciones de vida de la población femenina en su diversidad es reconocer que hay grupos invisibilizados.

Es determinante comprender que hay unos nudos estructurales o categorías de la desigualdad (culturales, identitarias, posición socioeconómica, etarias, étnicas, raciales, entre otras), que al entrecruzarse provocan situaciones de mayor discriminación para diversos grupos de mujeres (campesinas, afrodescendientes e indígenas) lo que se traduce en menores niveles de bienestar y desarrollo, por ende es fundamental incorporar una perspectiva de género, enfoque territorial e interseccionalidad para superar las desventajas o barreras específicas que enfrentan las mujeres de acuerdo a sus necesidades contextuales y particularidades como sujeto de derechos.

En definitiva en la región no se ha logrado garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, aún existen obstáculos que limitan su goce, particularmente Vázquez, Arredondo y Garza (2016) refieren que el control sobre el cuerpo femenino, la capacidad de generar ingresos y recursos propios y la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su colectividad continúan siendo tres factores que requieren cumplirse si se busca una mayor igualdad de género. Es necesario generar sinergias entre los países para atender esta deficiencia que de alguna forma le resta competitividad en el escenario internacional.

Justamente estos tres aspectos abarcan la autonomía de las mujeres, específicamente la física, que es relacionada con la capacidad de decidir libremente sobre la sexualidad y la reproducción, la económica vinculada a tener la posibilidad de controlar los propios

recursos y la toma de decisiones en los diferentes ámbitos familiar, comunitario y la sociedad en general y a su vez estas tres dimensiones se articulan con lo que fue definido en el 2016 mediante la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, son acuerdos logrados con los países miembros de América Latina y es entendido como un instrumento técnico orientado a guiar las políticas públicas y la hoja de ruta sobre los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad de género en la región.

Son notorios los esfuerzos que hacen los países, sin embargo en Latinoamérica sigue presente el problema de brechas de género, porque históricamente ha sido el resultado de tradiciones culturales e ideologías que forman una percepción errada sobre los roles a desempeñar, lo que no le ha permitido a las mujeres desarrollar las capacidades necesarias, preservar sus libertades y tener acceso a oportunidades como persona, sin duda estas prácticas sociales desencadenan situaciones que dificultan el empoderamiento de las mujeres, por lo tanto es pertinente tener un abordaje multidimensional e integral para resolver estas desigualdades al considerar los aspectos normativos, conceptuales y estratégicos para desarrollar políticas públicas efectivas.

En lo referente a Colombia, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE (2018) estima que el total de la población oscila en 48,3 millones de personas, de los cuales 51,2% son mujeres y 48,8% son hombres, en el país, aproximadamente hay 22.6 millones de colombianas y 21.6 millones de colombianos, que integran 14.2 millones de hogares, de los cuales cerca de 6 millones tienen al frente a una mujer (40.7%).

La Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH (2019) señala que el índice de feminidad de la pobreza ha pasado de 102,5 en 2008, a 118 en 2018, mostrando que las mujeres siguen presentando una relación superior en las tasas de pobreza frente a los hombres, es decir por cada 100 hombre pobres existe 118 mujeres en condición de pobreza y en algunos departamentos la disparidades son más amplias que el índice nacional registrando por ejemplo caldas 140, Risaralda 130, Cundinamarca 127, Valle del Cauca 126, Bogotá 120, entre otros. Estas cifras revelan el grado de vulnerabilidad al que pueden estar expuestas millones de mujeres y dificultan su empoderamiento económico.

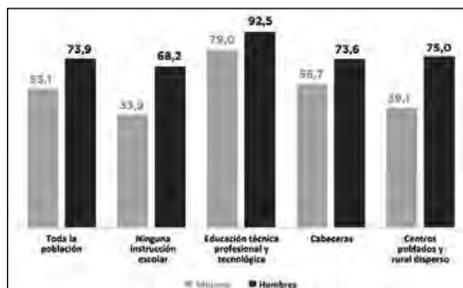
Los rezagos en autonomía económica van más allá de que persista un ciclo de pobreza, en el trasfondo las mujeres experimentan barreras estructurales para acceder a unas condiciones u oportunidades dignas que le permitan tener un papel activo en el mercado laboral, según el informe sobre el progreso de las mujeres en Colombia presentado por ONU Mujeres (2018) la participación laboral para la población femenina ha tenido un avance significativo pasando de 46% a 54% entre 2008 y 2012. Sin embargo, para los últimos años entre 2014 y 2017 se ha estancado en alrededor del 54%, mientras que para los hombres el DANE (2019) registro que entre 2009 y 2019 el aumento fue de 73% a 74%.

Cabe señalar que, el aumento de la participación laboral de las mujeres ha sido favorecido por factores como la reducción en la tasa de fecundidad, el Ministerio de Salud y Protección Social (2019) estima que para el quinquenio 2015-2020 en promedio cada mujer en edad reproductiva (15 a 49 años) tenga 2,29 hijos en comparación con el quinquenio 1950-1955 oscilaba en 5,9 hijos por mujer y para el quinquenio 2045-2050

igualmente se espera una reducción a 1,9 hijo por mujer. En consecuencia, ha ocurrido un cambio en el tamaño y la composición de las familias, del mismo modo, el incremento del acceso al trabajo de las mujeres se debe porque cada vez más están ingresan a estudios superiores y de posgrado, quienes incluso están accediendo en mayor medida a la educación superior que los hombres.

Aunque, ONU Mujeres (2018) afirma que el acceso a la educación en los últimos 10 años ha dado un avance notable para las mujeres. Entre 2006 y 2017 casi duplicaron su participación, pasando de 32,8% a 58,5%, no obstante el DANE (2019) indica que las mujeres con estudios superiores enfrentan dificultades para incorporarse a un empleo en mayor medida que los hombres con el mismo nivel de educación. En el Gráfico 1, se observa que la tasa de participación es 13,5 puntos porcentuales menos que la de los hombres (79% vs 92,5%).

Figura 1. Tasa Global de Participación Laboral de Mujeres y Hombres (%)



Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH 2019

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el DANE (2019) registra que de los 9,2 millones de mujeres trabajadoras, el 61% laboran en empleos informales; 7,8 millones de mujeres que trabajan en la zona urbana, el 56% lo realizan en la informalidad y 1,4 millones de mujeres que trabajan en la zona rural, el 87% lo hacen en la informalidad.

En cuanto a la participación por sectores que concentran la mayor cantidad de mujeres son servicios (41,2%), comercio y hoteles (33,4%) e industria (12,8%) y el 12% de las mujeres ocupadas laboran como empleadas domésticas (646.853) y como trabajadoras familiares sin remuneración (472.159) y del total de mujeres empleadas en el sector

<p>formal e informal, el 46% ganan menos de 500.000 pesos, versus el 28% de los hombres. El Observatorio Colombiano de Mujeres (2019) calcula que la diferencia salarial está entre un 15 y un 25 por ciento del salario inferior de las mujeres que ocupan los mismos cargos y los mismos niveles académicos y de escolaridad de los hombres.</p> <p>En efecto, ONU Mujeres (2018) sostiene que la inserción laboral de las mujeres sigue marcada por los roles asignados al interior del hogar, que limitan sus alternativas de acceso al mercado laboral y las relega al sector informal, asimismo el cierre de la brecha de ingreso mensual promedio entre hombres y mujeres persiste, aun en iguales condiciones en nivel educativo y experiencia, básicamente porque en la contratación laboral se mantienen los sesgos que en últimas no favorecen a las mujeres.</p> <p>Precisamente, en cuestión de factores de desventaja que tienen las mujeres en el ámbito educativo y laboral, hay que añadir las brechas en habilidades y manejo de las TIC, siendo estas competencias fundamentales para la cuarta revolución industrial, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2018) mediante una encuesta sobre acceso, uso y apropiación de las TIC registró que en una escala de 1 a 5 las mujeres se califican a sí mismas con una puntuación de 3,9; ahora con respecto a su conocimiento y habilidad para usar internet, tan solo 7 de cada 1.000 mujeres han creado aplicaciones, software, películas o videojuegos.</p> <p>Es realmente importante, tener en cuenta la percepción que tienen las mujeres alrededor de elegir una profesión dentro del campo de las TIC, a través de la encuesta realizada por MinTIC arroja que el 49% de las colombianas considera que las mujeres se inclinan más por el cuidado de la familia, que por las tecnologías, además se identifica que el 19% está de acuerdo con que los hombres tienen más habilidades para la tecnología que las mujeres y que las mujeres expertas en el manejo de los equipos tecnológicos parecen poco interesadas en verse muy femeninas.</p> <p>Sin embargo, en este mismo estudio el 43% de las jóvenes han pensado estudiar sistemas o una carrera relacionada con las tecnologías, pero los imaginarios de género referentes a "son carreras para hombres" y "a mis padres no les gusta" refuerzan la idea de que las TIC son un campo exclusivo solo para el género masculino, lo que ha llevado a que el 52% de las jóvenes no se inclinen por estudiar algún programa en esta especialidad, sumado a ello el 57% señalo que en el municipio que reside no ofrecen esas carreras.</p> <p>Otro punto importante a mencionar es la participación en escenarios de poder y toma decisiones, en este aspecto se destaca que hace 63 años (Diciembre 1957) por primera vez las mujeres ejercieron el derecho al voto es un hito que marco la historia en Colombia. Otro progreso a destacar, es que en el Gobierno Nacional (2018-2022) ha logrado la paridad en los gabinetes ministeriales 50% y 50% entre hombres y mujeres, sin embargo en otros espacios los avances son lentos e insuficientes y actualmente las mujeres colombianas están subrepresentadas en las instancias de decisión política, de acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil (2018) sólo el 19,7% de las personas elegidas al Congreso fueron mujeres y el promedio de mujeres parlamentarias en la región de las Américas ha alcanzado el 30%.</p> <p>El Observatorio Colombiano de las Mujeres (2019) reporta que a nivel local tan solo el 6,2% son gobernadoras; el 17% lo ocupan en asambleas departamentales; el 12%</p>	<p>alcaldesas y el 18% en los concejos municipales, igualmente ONU Mujeres (2018) enfatiza que desde 1991 el promedio de mujeres electas a Senado y Cámara era 7,7% y paso a 20,3% en 2018. Cabe señalar que, la mayor participación de mujeres en el Congreso de la República corresponde precisamente a los periodos en los que se ha aplicado la cuota de género establecida por la Ley 1475 de 2011, es decir que el aumento de su representación se estima que ha avanzado en un 15,7%.</p> <p>En lo que respecta a la participación de las mujeres en el sector público, el Departamento de Administración Pública (2019) recopiló en el informe de ley de cuotas que el 44,7% de los cargos directivos del Estado lo ocupan las mujeres; 3.870 se encuentran vinculadas en el máximo nivel decisorio, es decir aquellos cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público a nivel nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, lo que representa un 43% y 4.924 mujeres están en otros niveles decisorios correspondientes a cargos de libre nombramiento y remoción que tienen atribuciones de dirección en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las políticas de Estado, de manera que en este último representa un 46%.</p> <p>Ahora bien, en el sector privado la empresa de Consultoría Aequales (2019) a través de la medición anual que realiza sobre el Ranking Par en Colombia con la participación de 265 empresas, se estima que; el 55,1% corresponde a los hombres que hacen parte de la nómina, mientras que las mujeres representan el 44,9% de la totalidad del personal que hace parte de las organizaciones y en niveles directivos las mujeres ocupan un 24,6% y los hombres un 75,4%.</p> <p>Asimismo, se destaca que en promedio el 33,7% de las mujeres ocupan posiciones de liderazgo, tales como ser parte del Comité de Gerencia, Subgerencias, Jefaturas, Coordinadoras o puestos equivalentes, también se resalta que tan solo el 27,2% de las organizaciones cuentan con una mujer como líder de la empresa y en cuanto a herramientas de gestión se destaca que el 31% de las organizaciones tienen un plan de acción focalizado en la equidad de género (Aequales, 2019).</p> <p>Otro asunto que compete mencionar es la salud sexual y reproductiva de las mujeres, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH (2016) refiere que; <i>"La salud sexual y reproductiva se compone de la salud que tiene particulares implicancias para las mujeres debido a su capacidad biológica de embarazo y parto. Se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación"</i>.</p> <p>Bajo esta disposición, el UNPFA (2020) estima que en Colombia las mujeres entre los 15 a 49 años, el 64% utiliza cualquier método anticonceptivo; el 87% de las mujeres de la misma edad se sienten satisfechas por el uso de métodos anticonceptivos modernos y el 7% de las mujeres casadas o en unión libre desean impedir o retrasar la maternidad pero no usan ningún método, en contraste para el 2015 con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) en la medición de esta última y misma variable se registraba 6,7% y se identificó que el 19,1% de las mujeres no emplean un método anticonceptivo.</p>
<p>En lo que respecta a que las mujeres puedan tomar decisiones libres para conformar una familia, aun en el país es legítimo y persiste las uniones tempranas o matrimonios infantiles, de manera que el UNPFA (2019) indica que estas prácticas promueven embarazos a temprana edad, mortalidad materna, deserción escolar y pobreza; en el contexto urbano el 14% de las niñas entre 10 y 14 años son madres y el 39% de los padres tenían más de 20 años; el 72% de las adolescentes entre 15 y 19 años son madres y el 26% de los padres tenían más de 25 años, en relación a la zona rural el 55% de las niñas entre 10 y 14 años son madres y el 52% de los padres tienen más de 20 años; el 75% de las adolescentes entre los 15 y 19 años son madres y el 30% corresponde a que los padres tenían más de 25 años.</p> <p>De acuerdo, al informe Mujeres y Hombres: Brechas de Género en Colombia realizado por el DANE, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) y ONU Mujeres (2020) se calcula que en promedio el 98,4% de los partos reciben atención calificada, sin embargo los departamentos con menor proporción de partos atendidos por personal médico, coinciden con los de mayores tasas de mortalidad materna: Vaupés (58,6%), Chocó (77,8%), Vichada (78,7%), Guainía (80,6%) y Amazonas (82,3%).</p> <p>En esta misma publicación, se identifica que las mujeres que fallecen por causas obstétricas se deben a una falta de atención médica durante el embarazo y el parto, también hay un riesgo latente por embarazos no deseados. Sumado a ello, en el documento se referencia al Instituto Nacional de Salud (2019) señalando que, durante el 2018 el 65,7% de los casos por mortalidad materna tenían ingresos mensuales iguales o menores a un salario mínimo; el 69,3% no estaba vinculada laboralmente; el 21,3% eran mujeres cabeza de familia; el 7,1% de ellas no tuvo acceso a escolaridad alguna y el 22,4% tuvo solo escolaridad primaria; además otro dato a conocer es que el 28,7% no tuvo controles prenatales.</p> <p>Además, el UNPFA (2019) detecta que en Colombia otras de las prácticas que perjudica a las mujeres y niñas es la mutilación genital femenina que es empleada por algunas comunidades indígenas, es un procedimiento ancestral que busca reprimir la sexualidad femenina se asocia con fidelidad, pureza, honor, limpieza y preservación del hogar, sin embargo estas normas sociales que se ejercen contra las mujeres y niñas provocan afectaciones en la salud física y mental, y el desconocimiento de las consecuencias negativas que deja "La Curación" o extirpación del clítoris ha llevado a la pérdida de vida, no se puede determinar cifras porque en el país no hay estadísticas oficiales al respecto.</p> <p>Precisamente, mencionar las diferentes expresiones de violencia que experimentan las mujeres de manera general, el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE) reportó que para el año 2018 y 2019 el número de casos sobre violencias de género fue de 109.470 y 123.714 respectivamente. Igualmente, el SIVIGE (2019) tiene en cuenta el ciclo vital y es notorio que las mujeres en la adultez (29 a 59 años) sufren más violencia con 22,98%, seguidamente se encuentra la juventud (18 a 28 años) con un 20,78% y la adolescencia (12 a 17 años) alcanza 14,98%, no obstante en la infancia (6 a 11 años) las niñas presentan más violencia de tipo sexual en un 25,72%. En lo que refiere, a las víctimas por etnia para este mismo año se registró 3.492 afrodescendientes y 2.363 indígenas fueron afectadas por alguna forma de violencia.</p>	<p>Por otro lado, entre los departamentos con mayor número de casos de violencia, el SIVIGE (2019) encontró que puntuaban Antioquia con 22.536; Valle del Cauca 16.374; Bogotá, D.C. 12.470; Cundinamarca 9.501 y Huila con 5.890 casos. De los casos de violencia de género ocurridos a nivel nacional se identifica que la relación de la víctima con el victimario en promedio el 36,91% corresponde a que es un familiar, el 35,85% es la pareja o expareja y un 27,24% sin ninguna relación. Además el 53,51% de las víctimas convive con el agresor, se estima que el lugar donde ocurre la agresión es en la vivienda en un 70,71% y en la vía pública sucede en un 13,64%.</p> <p>Del mismo modo, para el 2019 entre las diferentes expresiones de violencia se presentaron en mayor medida la violencia intrafamiliar 82.299 casos; violencia sexual 42.652; hostigamiento-discriminación 358; feminicidio 226 y trata de personas 136. Particularmente, <u>Ramírez y Ariza (2015) coinciden que</u> la violencia doméstica viene constituyéndose en un problema de salud pública porque es recurrente y se ha agudizado, tan solo es remitirse a las cifras que reportan las distintas entidades del Estado y cada año va en aumento el número de afectados. De manera general, la ocurrencia de estos hechos se da, como consecuencia de las relaciones de poder que subyacen en el entorno familiar, lo que exige una atención social y Estatal urgente.</p> <p>En el mismo sentido el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF (2019), registro que la violencia perpetuada por la pareja o expareja en hombres fue de 6.892 mientras que en las mujeres 42.134 casos, en este mismo año se reportaron 109 feminicidios, con respecto al presunto agresor el hombre reportó estar vinculado en 42.010 casos y en la mujer 6.928 y del total de casos de violencia de pareja (49.026) se atribuye que el factor desencadenante de la agresión fue intolerancia y machismo 20.791 casos; celos, desconfianza e infidelidad 16.512 y alcoholismo y drogadicción 6.282 casos.</p> <p>Conveniencia social, política y económica</p> <p>Lo anteriormente expuesto, demuestra que comprender la discriminación y desigualdades basadas en el género requiere de una visión holística y el enfoque ecológico de Bronfenbrenner contempla varias dimensiones, de tal modo que este modelo reconoce que cada persona está inmersa en una multiplicidad de niveles relacionales a nivel individual, familiar, comunitario y social, justamente el paso por estos contextos están enmarcados por un proceso de legitimación sobre las brechas que existen entre hombre y mujeres, sin duda la interacción en estos entornos se llevan a cabo por agentes socializadores mediante prácticas sociales que se perpetúan a lo largo del tiempo y repercuten en el desarrollo humano de las futuras generaciones (Inchástegui y Olivares, 2011).</p> <p>En el transcurso del proceso de socialización que comienza desde la infancia y a lo largo de la vida, Bronfenbrenner (1979) sostiene que el ser humano está inmerso en un ambiente que tiene interconexión entre varios sistemas y en el centro está la persona en desarrollo, es así que en el nivel más interno está el microsistema que se compone del entorno más próximo como la familia y el hogar, seguidamente está el mesosistema que se encuentra los contextos comunitarios, vecindario, barriales, ambientes escolares y laborales, por último está el macrosistema que hace referencia a la estructura de la sociedad que se fundamentan en marcos culturales o ideológicos, institucionales,</p>

normativos y a que a su vez la modificación de este sistema puede afectar transversalmente a los sistemas de menor orden.

En ese sentido, cada persona hace parte de una cultura determinada y durante todo su ciclo vital pasa o realiza una transición entre escenarios o contextos, precisamente en este proceso biopsicosocial surge la concepción de "Género", el Ministerio de Justicia y el Derecho (2019); Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú (2016) indican que socialmente a hombres y mujeres se le asignan y transmiten comportamientos, atributos, mandatos y/o roles, cuyas diferencias son basadas en las características fisiológicas y sexuales de cada sexo, de tal modo que se enmarcan en un sistema binario y antagónico entre lo femenino y masculino, es así que a partir de estos elementos se configura las relaciones humanas.

Es decir, que en la transición de los diferentes sistemas (microsistema, mesosistema, macrosistema) los hombres y las mujeres aprenden e interiorizan las normas sociales asociadas a su sexo, la Junta de Andalucía (2015); Incháustegui y Olivares (2011); Rocha y Díaz (2005) refieren que este proceso consiste en el reparto de funciones que conlleva a crear una sociedad patriarcal, donde el hombre disfruta de todas las esferas de la vida, tanto de la pública como de la privada, mientras que la mujer se ve limitada al ámbito privado o doméstico, predominando una relación jerárquica que coloca a los hombres en posiciones de dominio y a las mujeres en estados de subordinación, lo cual contribuye a que se generen desigualdades entre los géneros.

Cabe destacar que, de acuerdo a la CEDAW (1979) las desigualdades entre los géneros prevalece en parte por la discriminación contra la mujer, entendiéndose que es "Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera".

Incluso, por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia T-698 de 2012 se reitera que un acto discriminatorio se entiende como "la conducta, actitud o trato que pretende, consciente o inconscientemente, anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, apelando con frecuencia a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales. Así, se configura una situación de discriminación directa cuando frente a un sujeto se establece un tratamiento diferenciado, injustificado y desfavorable (...)".

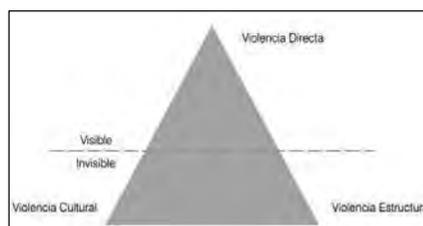
De manera que, los patrones socioculturales incluido los relacionados con la edad, clase, raza, grupo étnico, orientación sexual, religión y origen geográfico, en gran parte van a determinar los atributos y las oportunidades asociadas con la condición de ser hombre o mujer, por lo tanto dichas diferencias limitan el derecho de participar en la vida cultural, social, económica y política, además el cruce de estas identidades propician expresiones de opresión y privilegio que repercuten en múltiples discriminaciones ocasionando relaciones asimétricas de poder entre los géneros.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-878 de 2014 señala que las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres se manifiesta mediante "La violencia de género, aquella violencia que hunde sus raíces en las relaciones de género dominantes

de una sociedad, como resultado de un notorio e histórico desequilibrio de poder. En nuestra sociedad el dominio es masculino por lo que los actos se dirigen en contra de las mujeres o personas con una identidad de género diversa (lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) con el fin de perpetuar la subordinación".

Nuevamente, es notorio que la discriminación y desigualdad que viven las mujeres, es una realidad que necesariamente exige identificar y reconocer sus causas para poder atajar este fenómeno desde la raíz, Galtung (2016); Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú (2016); Mallagón (2005) refieren que para entender la violencia contra las mujeres se puede apoyar en el modelo triangular de Galtung (Figura 2) compuesto por tres tipos violencia: la directa, estructural y la cultural o simbólica, precisamente estas dos últimas son las responsables en invisibilizar y legitimar las brechas de género.

Figura 2. Triangulo de la Violencia



Fuente: (Johan Galtung, 2003)

Se hace preciso señalar que, la violencia directa hacia las mujeres se materializa por aquellos hechos eventuales o cotidianos que atentan contra la misma vida o las necesidades básicas, mediante el maltrato, el desprecio, la descalificación, el acoso, limitar la libertad y negación de derechos. Con respecto a la violencia estructural, comprende el sistema económico y político de una sociedad que es el responsable de la toma decisiones importantes que atañen a las vidas de hombres y mujeres y a su vez determinan el lugar que ocupan en el orden social que es caracterizado por la división sexual del trabajo, inequidades salariales, ocupación en altos cargos públicos y privados mayoritariamente por hombres y feminización de la pobreza, entre otros (Mallagón, 2005).

Continuando con la violencia cultural, Galtung (2003) afirma que esta se expresa a través de "la religión y la ideología, en el lenguaje y el arte, en la ciencia y en el derecho, en los medios de comunicación y en la educación" (p.20) se emplean para justificar y legitimar las otras violencias, la directa y la estructural. No obstante, la diferencia entre las tres surge del "desarrollo temporal porque la violencia directa es un suceso; la violencia estructural es un proceso con sus altibajos; la violencia cultural es inalterable, persistente, dada la lentitud con que se producen las transformaciones culturales" (Galtung, 2016, p.154).

En suma, la violencia se origina en cualquiera de los vértices, pero el principal es el que inicia en la violencia cultural a la violencia directa pasando por la estructural porque es la que más se mantiene en el tiempo, de ahí que ocurra una desvalorización simbólica de la mujer, lo que conlleva a que históricamente ocupe un estatus de subordinación y exclusión institucional, cuyas dinámicas se traducen en marginación y falta de poder, lo que favorece que se perciba como un objeto de abuso físico. Otro aspecto importante a considerar, es que intervenir sobre la violencia directa y estructural no bastara, mientras se continúe reproduciendo la violencia cultural (Galtung, 2016).

Del mismo modo, la Corte Constitucional a través de la sentencia T-878 de 2014 enfatiza que "(...)Centrándose en lo concerniente a la violencia contra las mujeres, las agresiones van más allá de las lesiones físicas y psicológicas, denominadas violencia visible. La invisible se refiere a la violencia estructural que implica inequidad en el ámbito de lo político, lo social y lo económico y a la violencia cultural constituida por los discursos que justifican el trato desigual. Estos tres componentes de la violencia se retroalimentan entre ellos, perpetuando la discriminación, la desigualdad y la violencia. Por tanto, con cada golpe a una mujer se da prevalencia a un patrón social de exclusión y este se reproduce a futuro".

Lo anteriormente mencionado, permite entrar a revisar y analizar lo que sucede en el contexto colombiano, es claro que aunque la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho inalienable y tiene un reconocimiento formal ante la ley, eso no implica una práctica real, el surgimiento de leyes basadas en la igualdad de género son fundamentales, pero no son suficientes.

Continuando con el análisis del impacto que tiene la normatividad, desde una perspectiva de género, "Las leyes son necesarias para regular la convivencia y también actúan sobre las conductas pero, en un momento histórico dado, no son sólo las leyes las que acotan la acción humana. El peso del pasado es demasiado poderoso como para ser eliminado de un día para otro. En particular, el lugar simbólico de la mujer y el hombre echa raíces en capas profundas de la cultura que nos conforma y que han sido y siguen siendo alimentadas por las creencias, la literatura, el arte, la filosofía, la ciencia, los relatos históricos, las costumbres y tradiciones" (Mallagón, 2005, p. 38).

Si bien es cierto que, Colombia en el plano nacional e internacional ha sido un país que se ha caracterizado por tener una normatividad robusta y ha logrado promulgar leyes en favor de los derechos de las mujeres, aún en la realidad la discriminación contra la mujer persiste en muchos ámbitos, directa e indirectamente, a través de las mismas leyes y políticas, estereotipos por razones de género, normas y prácticas sociales (ONU Mujeres, 2015). Por esta misma razón la jurisprudencia recomienda que el Estado desarrolle "acciones afirmativas" la Corte Constitucional en la Sentencia C-044 de 2004 señala que "con esta expresión se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan".

De igual manera, en esta misma sentencia se menciona la igualdad de género comprendiendo que: "la igualdad de derechos que se reconoce al hombre y a la mujer no es simplemente de carácter formal, pues en algunos eventos se justifican diferenciaciones en aras de terminar con la histórica discriminación que ha sufrido la población femenina. En este sentido se autoriza, dentro de un principio de protección,

la toma de medidas positivas, dirigidas a corregir desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales. Es decir, que no siempre que se utilicen criterios distintivos como el sexo, existe un tratamiento discriminatorio; sin embargo, para que estas diferenciaciones sean constitucionalmente válidas, deben sustentarse en criterios razonables y objetivos que así las justifiquen".

Entre las medidas afirmativas se destaca que, el Gobierno Nacional de Colombia en las últimas tres décadas ha elaborado diferentes políticas en pro de las mujeres: en 1992, se formuló la Política Integral para la Mujer; posteriormente, en 1994, la Política de Participación y Equidad para la Mujer; en 1999, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujeres; en 2003, la Política Mujeres Constructoras de Paz, y por último, en el año 2012, se lanzó los Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres (Garzón, 2018).

Precisamente, la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, es una respuesta a la problemática de desigualdad de género y se fundamenta en principios constitucionales (Igualdad y no discriminación; Interculturalidad; Reconocimiento de la diversidad; Autonomía y Empoderamiento; Participación; Corresponsabilidad y Sostenibilidad) que fueron ratificados por Colombia a través de pactos internacionales, que sirven como orientación para la implementación de las diferentes estrategias encaminadas a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencias y prevenir que se siga denigrando a la mujer en todos los campos sociales (Garzón, 2018).

En el mismo sentido, la normatividad vigente en el país a favor de las mujeres son medidas positivas aisladas que responden a necesidades particulares, no obstante se carece de un cuerpo normativo que permita tener una visión integral sobre la situación de las mujeres en Colombia, por esta razón es necesario agrupar estas acciones afirmativas que son orientadas a comprender de forma macro y micro los avances y rezagos en relación a los derechos de las mujeres, también se evita realizar una lectura e interpretación de forma fragmentada o separada de la legislación, es así que es indispensable construir una estrategia o herramienta jurídica que contribuya a dar un mejor abordaje a la discriminación y desigualdad contra las mujeres.

Precisamente, a través de la consolidación del Código de la Mujer se puede estimar de forma unificada las acciones afirmativas promovidas por el Estado y también como resultado de las luchas de organizaciones políticas, sociales y civiles de mujeres que han logrado reivindicar los derechos de la población femenina, lo que evidencia que de manera general y taxativa ha ocurrido avances en la legislación Colombiana en la defensa y reconocimiento de las mujeres.

A su vez cabe resaltar que, en el Código de la mujer se recopila el conjunto de medidas que promueven garantizar en las mujeres el acceso y disfrute de oportunidades en todas las esferas de la vida, tanto en el ámbito público como en el privado. En Colombia, hace más de 70 años se vienen creando leyes que buscan cambiar esa situación de inequidad que viven las mujeres, tal como sucedió con la Ley 28 de 1932 que concedió plena capacidad civil a la mujer casada mayor de edad, permitiéndole la libre administración de sus bienes y suprimió la jefatura de la sociedad conyugal en cabeza del marido, desde entonces paulatinamente se ha ido incorporando al ordenamiento jurídico normas

<p>discriminatorias en materia de género con el propósito de alcanzar una igualdad real y efectiva.</p> <p>Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-371 de 2000 subraya que; <i>"El inciso 2 del artículo 13 superior alude a la dimensión sustancial de la igualdad, al compromiso Estatal de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho. La igualdad sustancial revela, entonces, un carácter remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de grupos ubicados en condiciones de inferioridad, mediante el impulso de acciones positivas de los poderes públicos. Si bien pueden generar una desigualdad, lo hacen como medio para conseguir el fin de una sociedad menos inequitativa y más acorde con el propósito consignado en el artículo 2º de la Carta, de perseguir un orden justo"</i>.</p> <p>De tal forma que, las acciones positivas o disposiciones normativas contribuyen a reconocer la igualdad formal porque pretenden corregir situaciones de desventaja que experimentan las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida, sin embargo al detenerse a evaluar actualmente el progreso en la dimensión de la igualdad material o real sobre el acceso a oportunidades y goce de los derechos que han adquirido las mujeres, en efecto difiere lo que dice la norma jurídica y lo que pasa en la realidad, vale la pena cuestionarse ¿En Colombia el sistema económico, político, cultural y social está avanzando en la misma medida que el surgimiento de la legislación a favor de las mujeres? del mismo modo, a partir de esta configuración se vuelve determinante para entender ¿Qué posición social ocupan los hombres y las mujeres en la sociedad?.</p> <p>En consecuencia, es fundamental conocer y estudiar los factores anteriormente expuestos porque de esta forma se podrá abordar las causas profundas que generan la desigualdad de género e igualmente marca una orientación para quienes ejercen el poder público y la ciudadanía que está comprometida por formular, implementar y evaluar las leyes, políticas y medidas que conducen a eliminar todas las formas de discriminación a las que están expuestas las mujeres, cuyo impacto y efectividad de dichas disposiciones se verá realmente reflejado en el largo plazo al tener una igualdad plena en el acceso a las oportunidades y en las relaciones humanas que se propician en los diferentes escenarios que transcurre la vida de las personas en el ámbito público y privado, eso incluye la familia.</p> <p>Lo que significa que, el camino por recorrer para alcanzar la igualdad material tomara tiempo y más esfuerzos, no obstante antes de continuar ampliando el marco jurídico nacional respecto a los derechos de las mujeres, es fundamental recopilar y unificar la pluralidad legislativa que existe en el país con el propósito de hacer más inteligible el derecho vigente, de tal modo que se obtenga un solo cuerpo normativo que facilite el estudio y análisis de la legislación de las mujeres pasada, presente y futura, y sirva de punto de reflexión para quienes deban aplicarla.</p> <p>Justamente, en un estudio realizado por la Universidad del Rosario se hace hincapié acerca de la amplia normatividad existente en el contexto Colombiano, tanto es así que a través de un análisis al ejercicio del derecho que se práctica dentro del país, particularmente, se enfatiza que el ordenamiento jurídico tiene una excesiva legislación formal, abstracta y dispersa sobre los sujetos de especial protección, incluyendo aquellos que han sido históricamente discriminados, cuyas normas han desembocado</p>	<p>en generar insatisfacción de los derechos y necesidades de estos grupos diferenciales (Peláez, 2015).</p> <p>De tal modo que, desde una mirada general estas normas tratan de definir unas medidas, sin que necesariamente por su contenido se garantice una real protección, por el contrario presentan problemas de organización, sistematicidad, coherencia, publicidad, generalidad, exigibilidad, socialización y adecuada distribución de los recursos públicos. Como consecuencia, hay ausencia de una solución legislativa integral, armónica y estratégica que impacte favorablemente a la población, el funcionamiento del Estado y su desarrollo (Peláez, 2015).</p> <p>En el mismo sentido, el estudio refiere que la legislación en mención es imperfecta y tiende a generar inseguridad jurídica porque hay una desconexión entre lo estipulado constitucionalmente y la tarea de dar una respuesta legislativa y administrativa justa, eficiente y eficaz a los sujetos y grupos de especial protección. Sumado a ello, se presenta que el ciudadano colombiano desconoce las normas que los rige; los principios, derechos, deberes, obligaciones, garantías y el tratamiento diferenciado; las acciones y los procedimientos que se deben seguir; las autoridades encargadas; las conductas prohibidas; los controles, y las sanciones aplicables (Peláez, 2015).</p> <p>En Colombia existen leyes para regular cualquier tipo de comportamiento, situación o problema social, su producción es en serie, no obstante se identifica promulgación de leyes para propósitos distintos a los que señala la disposición, bajos niveles de aceptación para su cumplimiento y pocas veces se evalúa de manera consciente que la obligación del legislador no se limita a expedir normas válidas, también debe asegurar su eficacia, de lo contrario su falta de materialización hace que las normas entren en desuso y no sean el principal referente para interpretar el ordenamiento jurídico, sino en una herramienta más de interpretación (Angarita, 2018).</p> <p>De ahí que, García (2014) señale que <i>"la explosión de normas jurídicas es otra razón de ineficacia, ya que con el propósito de reglamentar tantas, tan variadas y específicas normas, incluso en asuntos que antes eran ajenos al derecho, se reduce su actuación a constituir marcos generales con validez en el largo plazo, desplazando la preponderancia de la ley y convirtiéndola no en la norma suprema y de referencia obligatoria, sino simplemente en un elemento más de interpretación"</i> (Citado en Angarita, 2018, p. 213).</p> <p>Además, se hace referencia que una abundancia normativa no conlleva per se a tener controlada la totalidad de comportamientos calificados por el legislador como reprochables: si las normas no son eficaces, se puede llegar al fenómeno social de la anomia, en el cual desde una perspectiva sociológica Durkheim lo contempla como la ausencia de regulación social y jurídica del comportamiento humano, pero también se presenta en la defectuosidad de las normas, observándose incumplimiento de las mismas, carencia de una definición clara en los límites de la acción de los sujetos, en caso de extralimitación y la falta de contundencia para generar una sanción (Angarita, 2018).</p> <p>Lo anteriormente expuesto, tiene una estrecha relación con la Cultura de la Legalidad y a través de una investigación realizada por Salamanca (2015) de la Pontificia Universidad Javeriana, se hace claridad en que estos términos no se limitan meramente</p>
<p>al establecimiento de leyes escritas, también se fundamenta en actitudes y comportamientos, la aceptación voluntaria de las reglas de juego para la convivencia y la manera como se vive la ley en una sociedad.</p> <p>Por esta razón, al respecto mediante este estudio se determina el índice de legalidad que hay en Colombia, en el cual se obtiene un bajo desempeño, tan solo 61 puntos de 100. Además, con la aplicación de encuestas a 1.705 servidores públicos de diferentes regiones y territorios, dentro de los resultados cabe destacar que el 45,8% de los encuestados cree que el entorno legal y la autoridad no son eficaces. Asimismo, solo el 59% considera que las autoridades investigan los actos ilegales (Salamanca, 2015).</p> <p>Igualmente, mediante el estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres desarrollado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2015) se evidencia dificultad en la atención que reciben las mujeres debido a la dispersión normativa; en esta investigación se encuestaron 1.095 servidores públicos de diferentes ciudades del país y vinculados a entidades del Estado relacionada con los sectores <u>salud, educación, protección, justicia y organismos de control; particularmente se resalta que, entre los funcionarios entrevistados, se comenta que:</u></p> <p><u><i>Al analizar cada una de las leyes se entiende como algo independiente y que nos falta una mirada más holística de la legislación sobre las violencias contra las mujeres: creo que nos falta también hacer una lectura un poco más completa de lo que le pasa a las mujeres víctimas de violencia, independientemente de las leyes, o más bien, dándole una lectura global a todas las leyes que finalmente permitirían una atención más garantista a las mujeres, si hiciéramos una comprensión más articulada (p.122).</i></u></p> <p>Precisamente, realizar una comprensión articulada sobre la legislación implica como lo ha reconocido la Corte Constitucional en la Sentencia T-338/2018 refiriendo que <i>"A nivel legal se han expedido variedad de leyes que buscan, desde diversos puntos de vista, eliminar la brecha histórica y cultural que existe en el país entre hombres y mujeres. Así se han adoptado medidas legislativas y jurisprudenciales en temas económicos, laborales y de protección a la maternidad, de acceso a cargos públicos, de libertades sexuales y reproductivas, de igualdad de oportunidades, entre muchas otras. Por supuesto, también se encuentra legislación referente a la violencia contra la mujer y las formas para combatirla"</i>.</p> <p>Asimismo, dentro del análisis holístico sobre la situación de las mujeres en el país implica considerar que en Colombia pese a la existencia de numerosas normas que formalmente protegen a las mujeres aún prevalece la generalizada injusticia social, porque mientras las mujeres se vean obligadas a demandar sistemáticamente ante los estrados judiciales el amparo de sus derechos constitucionales más básicos, es un indicador que continua sucediendo arbitrariedades tanto de las autoridades como de los particulares, así como la falta de observancia por parte de unos y otros de la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional (Moreno, 2009).</p> <p><u>Lo que significa que,</u> la administración de justicia en Colombia ha tenido avances normativos importantes, no obstante el acceso a la justicia es un derecho complejo porque supone el cumplimiento de obligaciones por parte de todos los poderes públicos y a su vez <i>"depende de cómo las normas se aplican en las instituciones que conforman</i></p>	<p><i>el sistema, lo que está permanentemente influenciado por los sesgos o prejuicios sobre el género que son parte del componente político y cultural del derecho"</i> (Ramírez, 2019, p.109).</p> <p>De este modo, la Corte Constitucional en la Sentencia T-338/2018 afirma que <i>"es evidente que los esfuerzos en pro de la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, desde la administración de justicia, no han sido suficientes. Por tanto, se debe ahondar en la construcción de marcos interpretativos que ofrezcan a los operadores jurídicos visiones más amplias y estructurales del problema, que les permitan ofrecer soluciones judiciales integrales y que aporten, desde su función, a la reconfiguración de los mencionados patrones culturales discriminatorios"</i>.</p> <p>Hay que mencionar, además que si bien es cierto que el derecho ha sido considerado como una herramienta de transformación social y emancipación (Heim, 2014), por otro lado también ha venido convirtiéndose en una estrategia para la resolución de los problemas sociales, y particularmente en lo que respecta a las brechas de género lo que ha sucedido es un proceso creciente de legalización máxima de la vida de las mujeres, de manera que cada vez más se hace notorio la legitimidad de "la idea de que todo problema social tiene una solución legal, y cuando el derecho fracasa en la solución se propone más derecho para encubrir las deficiencias del derecho existente" (Smart, 1994. Citado en Zabala, 2009, p. 74).</p> <p>Por tal motivo, el derecho y acceso a la justicia de las mujeres implica una mirada integral y contextual que abarque la posibilidad de ejercer los derechos legales y constitucionalmente establecidos, reclamar aquellos que aún no han sido reconocidos y, también satisfacer las necesidades de justicia bien sea a nivel individual o colectivamente, de este modo se puede llegar a equilibrar una igualdad formal y material (Heim, 2014).</p> <p>En el mismo sentido, es necesario que el Estado revise y supere aquellos obstáculos que dificultan un acceso pleno de las mujeres a la justicia, así como inadecuadas estructuras organizativas y funcionales, deficiencias en los procedimientos para ponerlos en práctica, una cultura jurídica resistente a las necesidades y/o cambios sociales, el desconocimiento por parte de la ciudadanía en general, así como de las y los operadores jurídicos, de los derechos y los procedimientos, entre otros (Heim, 2014).</p> <p>Igualmente, de forma reiterada en el informe "Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe" realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH (2019) se identifica y recomienda superar los obstáculos que surgen en la institucionalidad porque son un impedimento para que las mujeres y niñas tengan un acceso efectivo a la justicia, como <i>"la falta de conocimientos y/o de formación en materia de igualdad de género en los operadores de justicia, resultando en una dificultad para dimensionar la necesidad de introducir cambios, adoptar o aplicar las normas que protejan los derechos de las mujeres"</i>.</p> <p>Adicionalmente, el Observatorio de Género y Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana señala que en Colombia se presenta una escasa articulación de autoridades nacionales y locales en el cumplimiento de las obligaciones que tienen relación con la protección y defensa de los derechos humanos de la mujer, por ende resulta necesario diseñar e instrumentar un marco institucional y legal sólido,</p>

consensuado y eficaz entre el gobierno nacional y los gobiernos locales que permita implementar mecanismos y políticas públicas, aún más frente a una multiplicidad de instituciones de distintas esferas con competencia en materia de género, que busquen responder estratégicamente y prevenir actos de discriminación y violencia por razón de género, abordando sus causas y consecuencias estructurales (CIDH, 2019).

Por otra parte, la recomendación general N° 33 del comité de la CEDAW enfatiza que las mujeres enfrentan muchas dificultades en el acceso a la justicia como resultado de la discriminación directa e indirecta. Esta desigualdad no sólo es evidente en el contenido y/o el impacto de las leyes, reglamentos, procedimientos, costumbres y prácticas discriminatorias, sino también en la falta de capacidad y conocimientos de las instituciones judiciales y cuasi judiciales para tratar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos de la mujer.

Por esta razón, el Comité recomienda que los Estados partes realicen un examen de su marco legislativo y enmienden y/o deroguen las disposiciones que discriminan contra la mujer, también dentro de las observaciones se sugiere la aplicación de medidas para el fomento de la capacidad para jueces, fiscales, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los derechos humanos, incluida la Convención y la jurisprudencia establecida por el Comité, y sobre la aplicación de leyes nacionales en favor de la mujer e igualmente generar sensibilización en la eliminación de estereotipos de género e incorporación de la perspectiva de género en todos los aspectos del sistema de justicia.

Por otro lado, cabe señalar que las necesidades de las mujeres en el sistema de justicia son tan amplias y a la vez se enmarcan en una superposición de desventajas relacionadas con su estatus socioeconómico, ubicación, edad y origen étnico, cuyas variables inciden en la discriminación legal, igualmente son tan variados los aspectos a tratar que "puede abarcar desde la familia, el matrimonio, la propiedad, la herencia y las disputas por tierras hasta el debido proceso, los asuntos de inmigración y asilo, el acoso sexual, el tráfico de personas y la explotación laboral, e incluso la denegación del derecho al trabajo autónomo" (ONU Mujeres, 2020, p.15).

En suma, de todo lo anterior se deduce que alcanzar una vida libre de discriminación basada en el sexo, es fundamental la labor y esfuerzo conjunto tanto de los operadores jurídicos y los agentes sociales, como de la comunidad académica y la sociedad en general. Del mismo modo, es importante tener en cuenta que la igualdad de género y la justicia para las mujeres están estrechamente relacionadas porque mientras persista la desigualdad de género, ya sea en la ley, el hogar, la comunidad, el lugar de trabajo o la sociedad, se está negando la justicia para las mujeres (ONU Mujeres, 2020).

3. Bibliografía

Aequales. (2019). Informe de Resultados, Ranking Par 2019, 5 años catalizando la equidad, Colombia. Disponible en <https://par.aequales.com/informes/informe-ranking-par-colombia-2019.pdf>

Angarita, J. (2018). Colombia: país donde abundan las leyes y escasea la legalidad. *Razón Crítica*, 4, 195-217, doi: <http://dx.doi.org/10.21789/25007807.1302>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Disponible en <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. (1994). Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem do Para". Disponible en <http://www.equidadmujer.gov.co/eies/Documents/Convencion-Interamericana-Prevenir-Sancionar-Eradicar-Violencia-contra-Mujer-Belem-do-Para-1994.pdf>

Bronfenbrenner, U. (1979). *La Ecología del Desarrollo Humano: Experimentos en entornos naturales y diseñados*. Editorial. Paidós. Buenos Aires. Disponible en <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/la-ecologia-del-desarrollo-humano-bronfenbrenner-copia.pdf>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2018). Panorama social de América Latina. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/1/S1900051_es.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2019). La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45032/S1900723_es.pdf?sequenc e=4

Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. (2019). *Violencia y discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes*. Disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf>

Congreso de Colombia. (1991) *Constitución Política de Colombia*. Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer. (2015). *Segunda Medición del Estudio sobre Tolerancia Social e Institucional de las Violencias contra las Mujeres*. Disponible en <http://www.equidadmujer.gov.co/eies/Documents/Segunda-medicion-estudio-tolerancia-violencias-contra-mujeres.pdf>

Corte Constitucional de Colombia. (2000). *Sentencia C-371/00*. Disponible en <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2000/C-371-00.htm>

Corte Constitucional de Colombia. (2004). *Sentencia C-044/04*. Disponible en <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20002191>

Corte Constitucional de Colombia. (2006). *Sentencia C-667/06*. Disponible en <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-667-06.htm>

[Corte Constitucional de Colombia. \(2012\). Sentencia T-698/12. Disponible en https://bit.ly/2vUsIbR](https://bit.ly/2vUsIbR)

[Corte Constitucional de Colombia. \(2014\). Sentencia T-878/2014. Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-878-14.htm](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-878-14.htm)

[Corte Constitucional de Colombia. \(2018\). Sentencia T-338/2018. Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-338-18.htm](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-338-18.htm)

[Corte Constitucional de Colombia. \(2019\). Sentencia C-203/2019. Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-203-19.htm](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-203-2019.htm)

Departamento Administrativo de la Función Pública. (2019). Informe sobre la participación efectiva de la mujer en los cargos de niveles decisorios del Estado Colombiano. Disponible en <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Informe%20ley%20de%20cuotas%202019.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2019). Boletín Estadístico Empoderamiento Económico de las Mujeres en Colombia. Disponible en <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/Boletín-Estadístico-ONU-Mujeres-DANE.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, *Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer CPPEM y ONU Mujeres. (2020). Mujeres y Hombres: Brechas de Género en Colombia.* Disponible en <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf>

Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA. (2018). El Poder de Decidir Derechos Reproductivos y Transición Demográfica. Disponible en https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2018_ES_SWP_Estado_de_la_Poblacion_Mundial.pdf

Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA. (2020). *Contra Mi Voluntad. Desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas e impiden la igualdad*. Disponible en https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swop_2020_espanol_vf.pdf

Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA. (2020). Estado Mundial de la Población 2020, Datos Colombia. Disponible en https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/datos_colombia_alta.pdf

Galtung, J. (2003). Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización. Editorial. Gernika Gogoratz. Bilbao. Disponible en <https://www.gernikaogoratz.org/wp-content/uploads/2020/05/RG07completo-A4.pdf>

Galtung, J. (2016). *La Violencia: cultural, estructural y directa*. Disponible en <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-LaViolencia-5832797.pdf>

Garzón, M. (2018). *Equidad de Género para las Mujeres en Colombia*. Disponible en <https://repositorio.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/17741/1/Art%C3%ADculo%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero%20para%20las%20mujeres%20en%20Colombia.pdf>

Inchástegui, T. y Olivares, E. (2011). Modelo ecológico para una vida libre de violencias de género. Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. México. Disponible en <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lqamv/v/ModoDecoFinalPDF.pdf>

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF. (2019). Cifras de Lesiones de Causa Externa en Colombia 2019. Observatorio de Violencia. Disponible en <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa>

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2019). *Homicidios en Colombia año 2019. Observatorio de Violencia*. Disponible en <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa>

Junta de Andalucía. (2015). *Violencia de Género*. Disponible en https://www.juntadeandalucia.es/export/drupalida/Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_tolleto.pdf

Magallón, C. (2005). Epistemología y Violencia Aproximación a una Visión Integral sobre la Violencia hacia las Mujeres. *Revista Feminismos* (6) pp. 33-47. Disponible en https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3165/1/Feminismos_6_03.pdf

Marchionni, M., Gasparini, L., & Edo, M. (2019). Brechas de género en América Latina. Un estado de situación. Caracas: CAF. Disponible en <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1401>

Ministerio de Justicia y el Derecho. (2019). *Cartilla Género*. Disponible en <https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Conex%C3%B3n/CajaHerramientas/genero/Cartilla%20G%C3%A9nero%20final.pdf>

Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables de Perú. (2016). *Violencia Basada en Género: Marco Conceptual para las Políticas Públicas y la Acción del Estado*. Disponible en https://oig.cepal.org/sites/default/files/mimp_violencia_basada_en_genero_marco_conceptual_para_las_politicas_publicas_y_la_accion_del_estado.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2019). Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia 2018. Dirección de Epidemiología y Demografía. Disponible en <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2018.pdf>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2018). Encuesta Acceso, Uso y Apropiación de las TIC por parte de las Mujeres Colombianas. Disponible en https://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-64060_recurso_3.pdf

Moreno, S. (2009). *La Evolución de la Protección Constitucional de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia. Estudios Históricos y Geográficos de la Universidad de Salamanca*. (26), p.119-153. Disponible en <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/7854-Texto%20de%20la%20propuesta-28138-1-10-20110331.pdf>

Naciones Unidas. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/2/S1801141_es.pdf

<p><u>Observatorio Colombiano de las Mujeres. (2019) Indicadores Poder y Toma de decisiones. Disponible en http://www.observatoriomujeres.gov.co/es/Empowerment</u></p> <p><u>ONU Mujeres. (2015). Los derechos humanos de las mujeres. Disponible en https://beijing20.unwomen.org/es/infographic/human-rights</u></p> <p>ONU Mujeres. (2018). El progreso de las mujeres en Colombia 2018: Transformar la economía para realizar los derechos. Disponible en https://www2.unwomen.org/-/media/fieldoffice%20colombia/documentos/publicaciones/2018/10/ONU%20mujeres%20-%20libro%20progress.pdf?la=es&vs=1830</p> <p>ONU Mujeres (2020). <u>Justicia para las mujeres: Informe del Grupo de Alto Nivel.</u> Disponible en https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/03/justice-for-women-high-level-group-report</p> <p>ONU Mujeres. (2020). El Mundo para las Mujeres y las Niñas, Informe Anual 2019-2020. Disponible en https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/un-women-annual-report-2019-2020-es.pdf?la=es&vs=5252</p> <p>ONU Mujeres. (2020). Igualdad de Género: A 25 años de Beijing, los derechos de las mujeres bajo la lupa. Disponible en https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/03/womens-rights-in-review</p> <p><u>Organización Iberoamericana de Seguridad Social. (2019). Boletín Iberoamericano sobre Equidad de Género en los Sistemas de Protección Social.</u> Disponible en https://oiss.org/wp-content/uploads/2020/01/OISS20-20Dic201920-20Boletin20Iberoamericano.pdf</p> <p>Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS. (2020). Boletín Iberoamericano sobre equidad de género en los sistemas de protección social, la protección no contributiva de las mujeres en Iberoamérica. Disponible en https://oiss.org/wp-content/uploads/2020/07/OISS-N4-Boletin-Iberoamericano.pdf</p> <p>Peláez, H. (2015). Una mirada al problema del derecho de los sujetos y grupos desaventajados de especial protección en Colombia y la apuesta por una necesaria fundamentación teórica desde las teorías contemporáneas de la justicia. Estudios Socio-Jurídicos, 17 (1), 125-168. Disponible en https://revistas.urosario.edu.co/xml/733/73333009004/html/index.html</p> <p>Profamilia. (2015). Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), Componente de Salud Sexual y Salud Reproductiva, Tomo II. Disponible en https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/05/ENDS-2015-TOMO-II.pdf</p> <p>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). ODS en Colombia: Los retos para 2030. Disponible en file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/undp_co_PUBL_julio_ODS_en_Colombia_los_retos_para_2030_UNU.pdf</p> <p><u>Ramírez, M. y Ariza, G. (2015). Lo político de la violencia en las relaciones de pareja como problema de salud pública. Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad</u></p>	<p><u>Nacional de Colombia, 63 (3), pp. 517-525. Disponible en https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/45191/52458</u></p> <p><u>Ramírez, B. (2019). Acceso a la justicia como derecho en clave de género: Intersecciones entre los estándares internacionales y el rol de la justicia constitucional en casos de violencia contra las mujeres en Perú y Colombia. Anuario de Derechos Humanos, 15 (1), pp. 97-111. Disponible en https://revistas.uchile.cl/index.php/ADH/article/view/53144/56768</u></p> <p><u>Registraduría Nacional del Estado Civil. (2018). Informe: el camino hacia la paridad en el congreso colombiano.</u> Disponible en https://www.registraduria.gov.co/Registraduria-Nacional-del-Estado/26710.html</p> <p><u>Rocha T. y Díaz R. (2005). Cultura de género: La brecha ideológica entre hombre y mujeres. Anales de psicología. Universidad Nacional Autónoma de México, 21 (1), pp. 42-49. Disponible en file:///C:/Users/Lenovo/Documents/1%20Legislatura/Fuentes%20Codigo%20Mujer/cultura%20de%20genero.pdf</u></p> <p><u>Salamanca, J. (2015). Colombia: nos falta mucho para ser un país legal.</u> Disponible en https://www.iavariana.edu.co/pesquisa/colombia-nos-falta-mucho-para-ser-un-pais-legal/</p> <p><u>Secretaría de Gobernación de México. (2014). Compilación de Tratados Internacionales Mujeres. Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos.</u> Disponible en http://codhet.org.mx/WP/wp-content/uploads/2014/11/MUJERES.pdf</p> <p><u>Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género SIVIGE. (2019). Indicadores de Violencia de Género Colombia 2015-2019.</u> Disponible en http://onviolenciasgenero.minsalud.gov.co/Paginas/sivige.aspx</p> <p><u>Vázquez, J., Arredondo, F. y Garza, J. (2016). Brecha de género en los países miembros de la Alianza del Pacífico.</u> Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/eq/v32n141/0123-5923-eg-32-141-00336.pdf</p> <p><u>World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2020.</u> Disponible en http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf</p> <p><u>Zabala B. (2009). El feminismo frente al Derecho. Viento Sur, (104), pp. 74-82. Disponible en https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/8cb813e02a23301.pdf</u></p> <p>Cordialmente,</p> <p>GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO Representante a la Cámara por Cundinamarca Congreso de la República de Colombia</p>
<p style="text-align: center;">PROYECTO DE LEY N° _____ DE 2020</p> <p style="text-align: center;">“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CODIGO DE LA MUJER”</p> <p style="text-align: center;">EL CONGRESO DE COLOMBIA</p> <p style="text-align: center;">DECRETA:</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO I</p> <p style="text-align: center;">DISPOSICIONES GENERALES.</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO I.</p> <p style="text-align: center;">PRINCIPIOS Y DEFINICIONES.</p> <p>ARTÍCULO 1. FINALIDAD. Consolidar la normatividad vigente sobre los derechos de las mujeres reconocidos en Colombia, con el propósito que se convierta en el único instrumento jurídico que integra y orienta todas las disposiciones legislativas que garantizan la protección de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida y en aquellos que se encuentran en condiciones de desigualdad y discriminación de género, siendo esta una herramienta que fortalezca la apropiación y aplicación de la norma de manera eficaz y eficiente por parte de todos los actores que intervienen directa o indirectamente por el bienestar de las mujeres</p> <p>ARTÍCULO 2. OBJETO. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de las mujeres, garantizando el ejercicio y restablecimiento de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado</p> <p>ARTÍCULO 3. SUJETOS TITULARES DE DERECHOS. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos las mujeres en todos sus ciclos vitales, desde la perspectiva de género.</p> <p>ARTÍCULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente código se aplica a todas las mujeres nacionales o extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país y a aquellos con doble nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana.</p> <p>ARTÍCULO 5. NATURALEZA DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE CÓDIGO. Las normas sobre las mujeres, contenidas en este código, son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes.</p>	<p>ARTÍCULO 6. REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. Las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados, convenciones o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés de la mujer.</p> <p>ARTICULO 7. PRINCIPIO INTERCULTURALIDAD E INTERSECCIONALIDAD: Se garantiza el reconocimiento de los derechos humanos, desde la interculturalidad e interseccionalidad, a toda la diversidad de mujeres, prestando especial atención a las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, migrantes, lesbianas, bisexuales, transgénero, intergénero e intersexuales.</p> <p>En virtud de este principio las instituciones del Estado, deberán garantizar que la atención a las mujeres tenga en cuenta el análisis de la realidad social, religiosa y cultural que las circunscribe, con el objetivo de garantizar el pleno desarrollo de la identidad cultural y social de las mujeres. Eliminando todo clase de discriminaciones particulares que se configuran como agravantes de la situación de desigualdad de las mujeres.</p> <p>ARTICULO 8. PRINCIPIO DE CIUDADANÍA PLURAL, DEMOCRACIA PARITARIA, REPRESENTATIVA Y PARTICIPATIVA Se garantiza el libre ejercicio de la participación democrática y la pluralidad ideológica de las mujeres en la participación política, reconociendo las diferencias de intereses. Se garantizará el acceso a la educación, espacios socioculturales y de participación ciudadana.</p> <p>ARTICULO 9. ENFOQUE TERRITORIAL En virtud de este principio las instituciones del estado deberán, previo a la expedición de cualquier acto administrativo destinado a promover o garantizar los derechos de las mujeres, reconocer las particularidades territoriales e identificar a los grupos de mujeres y sus demandas específicas, con el fin de garantizar que las acciones del estado contribuyan sustancialmente al objetivo de la equidad de género. Este enfoque reconoce las generalidades del territorio como sus particularidades, lo que debe materializarse en el presupuesto General de la Nación.</p>

<p style="text-align: center;">TITULO II</p> <p style="text-align: center;">IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES. (LEY 823 DE 2003)</p> <p>CAPITULO I</p> <p>DE LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA LEY.</p> <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 1o. La presente ley tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar las políticas y acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado.</p> <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 2o. La presente ley se fundamenta en el reconocimiento constitucional de la igualdad jurídica, real y efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, en el respeto de la dignidad humana y en los principios consagrados en los acuerdos internacionales sobre esta materia.</p> <p>La igualdad de oportunidades para las mujeres, y especialmente para las niñas, es parte inalienable, imprescriptible e indivisible de los derechos humanos y libertades fundamentales.</p> <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 3o. Para el cumplimiento del objeto previsto en el artículo 1o de la presente ley, las acciones del gobierno orientadas a ejecutar el plan de igualdad de oportunidades deberán:</p> <p>a) Promover y garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades, que les permitan participar activamente en todos los campos de la vida nacional y el progreso de la Nación;</p> <p>b) Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y el acceso a los bienes que sustentan el desarrollo democrático y pluricultural de la Nación;</p> <p>c) Incorporar las políticas y acciones de equidad de género e igualdad de oportunidades de las mujeres en todas las instancias y acciones del Estado, a nivel nacional y territorial.</p> <p>CAPITULO II.</p>	<p>DE LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO.</p> <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 4o. Para la adopción de las políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres, y el fortalecimiento de las instituciones responsables de su ejecución, el Gobierno Nacional deberá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adoptar criterios de género en las políticas, decisiones y acciones en todos los organismos públicos nacional y descentralizados. 2. Adoptar las medidas administrativas para que las instituciones responsables cuenten con instrumentos adecuados para su ejecución. 3. Promover la adopción de indicadores de género en la producción de estadísticas de los organismos e instituciones públicas y privadas. 4. Divulgar los principios constitucionales, leyes e instrumentos internacionales suscritos por Colombia que consagren la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades de todas las personas, y en especial los relacionados con los derechos de las mujeres y las niñas. <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 5o. -Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 1496 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:-> Con el fin de promover y fortalecer el acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural y a la generación de ingresos en condiciones de igualdad, el Gobierno Nacional deberá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar acciones y programas que aseguren la no discriminación de las mujeres en el trabajo y la aplicación del principio de salario igual a trabajo de igual valor. El incumplimiento de este principio dará lugar a la imposición de multas por parte del Ministerio del Trabajo, conforme a lo dispuesto en la legislación laboral. 2. Diseñar programas de formación y capacitación laboral para las mujeres, sin consideración a estereotipos sobre trabajos específicos de las mujeres. En especial, el Gobierno Nacional promoverá la incorporación de las mujeres al empleo en el sector de la construcción, mediante la sensibilización, la capacitación y el reconocimiento de incentivos a los empresarios del sector. 3. Brindar apoyo tecnológico, organizacional y gerencial a las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres y a las que empleen mayoritariamente personal femenino. 4. Divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad y a las mujeres sobre sus derechos laborales y económicos, y sobre los mecanismos de protección de los mismos. 5. Garantizar a la mujer campesina el acceso a la propiedad o tenencia de la tierra y al crédito agrario, la asistencia técnica, la capacitación y la tecnología agropecuaria, para su adecuada explotación.
<p>6. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sobre seguridad social a favor de las mujeres trabajadoras, e imponer las sanciones legales cuando a ello hubiere lugar.</p> <p>7. Realizar evaluaciones periódicas sobre las condiciones de trabajo de las mujeres, especialmente de las trabajadoras rurales, elaborar los registros estadísticos y adoptar las medidas correctivas pertinentes.</p> <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 6o. El Gobierno ejecutará acciones orientadas a mejorar e incrementar el acceso de las mujeres a los servicios de salud integral, inclusive de salud sexual y reproductiva y salud mental, durante todo el ciclo vital, en especial de las niñas y adolescentes.</p> <p>En desarrollo de los artículos 13 y 43 de la Constitución, el Gobierno estimulará la afiliación al régimen subsidiado de seguridad social en salud de las mujeres cabeza de familia, de las que pertenezcan a grupos discriminados o marginados de las circunstancias de debilidad manifiesta.</p> <p>Así mismo, el Gobierno diseñará y ejecutará programas:</p> <p>a) Para dar información responsable de la capacidad reproductiva de la mujer, y</p> <p>b) Para preventivamente reducir las tasas de morbilidad y mortalidad femenina relacionadas con la salud sexual y reproductiva, salud mental y discapacidad.</p> <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 7o. Conforme a lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución, la mujer gozará de la especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo y después del parto. Para el cumplimiento de esta obligación, el Gobierno Nacional diseñará planes especiales de atención a las mujeres no afiliadas a un régimen de seguridad social.</p> <p>Dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional establecerá un programa de subsidio alimentario para la mujer embarazada que estuviere desempleada o desamparada.</p> <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 8o. Los procesos de formación y capacitación de los recursos humanos en salud, públicos y privados, incorporarán la perspectiva de género.</p> <p>El sistema de registro e información estadística en materia de salud especificará el mismo componente, en forma actualizada.</p> <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 9o. El Estado garantizará el acceso de las mujeres a todos los programas académicos y profesionales en condiciones de igualdad con los varones.</p> <p>Para el efecto, el Gobierno diseñará programas orientados a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eliminar los estereotipos sexistas de la orientación profesional, vocacional y laboral, que asignan profesiones específicas a mujeres y hombres. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Eliminar el sexismo y otros criterios discriminatorios en los procesos, contenidos y metodologías de la educación formal, no formal e informal. 3. Estimular los estudios e investigaciones sobre género e igualdad de oportunidades de las mujeres, asignando los recursos necesarios para su realización. 4. Facilitar la permanencia de las mujeres en el sistema educativo, en especial de las que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o en desventaja social o económica. 5. Mejorar la producción y difusión de estadística e indicadores educativos con perspectiva de género. <p>Para el logro de los objetivos previstos en los numerales 2 y 3 de este artículo, el Gobierno realizará, entre otras acciones, campañas a través de los medios masivos de comunicación con mensajes dirigidos a erradicar los estereotipos sexistas y discriminatorios, y a estimular actitudes y prácticas sociales de igualdad y de relaciones democráticas entre los géneros.</p> <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 10. TODOS LOS COLOMBIANOS TIENEN DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA. Con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a una vivienda digna por parte de las mujeres, en especial de las mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres, mujeres trabajadoras del sector informal, rural y urbano marginal, y madres comunitarias, el Gobierno diseñará programas especiales de crédito y de subsidios que les permitan acceder a la vivienda en condiciones adecuadas de financiación a largo plazo.</p> <p>CAPITULO III.</p> <p>DE LA FINANCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ACCIONES DE GÉNERO.</p> <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 11. El Gobierno Nacional promoverá y garantizará la inclusión de proyectos, programas y acciones orientados a dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, en la ley del Plan Nacional de Desarrollo para que las autoridades departamentales, distritales y municipales puedan lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres en los ámbitos públicos y privados, a cuyo efecto los fondos de cofinanciación nacional podrán contribuir a su financiación.</p> <p>CAPITULO IV.</p> <p>DISPOSICIONES VARIAS.</p> <p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 12. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o la entidad que lo reemplace en la dirección de las políticas de equidad para las mujeres, hará el seguimiento y evaluación de las políticas y logros en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres de las entidades y organismos del orden nacional.</p>

<p>LEY 823 DE 2003 ARTÍCULO 13. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o la entidad que lo reemplace en la dirección de las políticas de equidad para las mujeres en su informe anual al Congreso, incluirá un capítulo sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, en las Leyes 248 de 1995, 387 de 1996 y 581 de 2000, y en las demás que reglamenten la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.</p> <p style="text-align: center;">TITULO III</p> <p style="text-align: center;">SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE FORMAS DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES, SE REFORMAN LOS CÓDIGOS PENAL, DE PROCEDIMIENTO PENAL, LA LEY 294 DE 1996 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. (LEY 1257 DE 2008)</p> <p>CAPITULO I.</p> <p>DISPOSICIONES GENERALES.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.</p> <p>Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 3o. CONCEPTO DE DAÑO CONTRA LA MUJER. Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones de daño:</p> <p>a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.</p>	<p>b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.</p> <p>c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.</p> <p>d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 4. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN. Los principios contenidos en la Constitución Política, y en los Tratados o Convenios Internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, las demás leyes, la jurisprudencia referente a la materia, servirán de guía para su interpretación y aplicación.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 5o. GARANTÍAS MÍNIMAS. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en el ordenamiento jurídico, no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a las mujeres no figuren expresamente en él.</p> <p>CAPITULO II.</p> <p>PRINCIPIOS.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 6o. PRINCIPIOS. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes principios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Igualdad real y efectiva. Corresponde al Estado diseñar, implementar y evaluar políticas públicas para lograr el acceso de las mujeres a los servicios y el cumplimiento real de sus derechos. 2. Derechos humanos. Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos. 3. Principio de Corresponsabilidad. La sociedad y la Familia son responsables de respetar los derechos de las mujeres y de contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas. El Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres.
<ol style="list-style-type: none"> 4. Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia comprenderá información, prevención, orientación, protección, sanción, reparación y estabilización. 5. Autonomía. El Estado reconoce y protege la independencia de las mujeres para tomar sus propias desiciones sin interferencias indebidas. 6. Coordinación. Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una atención integral. 7. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, religión entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a través de una previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional. 8. Atención Diferenciada. El Estado garantizará la atención a las necesidades y circunstancias específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo, de tal manera que se asegure su acceso efectivo a los derechos consagrados en la presente ley. <p>CAPITULO III.</p> <p>DERECHOS.</p> <p>ARTÍCULO 7o. DERECHOS DE LAS MUJERES. Además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal.</p> <p>ARTÍCULO 8o. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. Toda víctima de alguna de las formas de violencia previstas en la presente ley, además de los contemplados en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a:</p> <p>a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad.</p> <p>b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a través de la defensoría pública;</p>	<p>c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes;</p> <p>d) Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia;</p> <p>e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva;</p> <p>f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia;</p> <p>g) Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas;</p> <p>h) Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas</p> <p>i) La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia;</p> <p>j) La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta ley.</p> <p>k) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.</p> <p>CAPITULO IV.</p> <p>MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 9o. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN. Todas las autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán reconocer las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.</p> <p>El Gobierno Nacional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulará, aplicará, actualizará estrategias, planes y programas nacionales integrales para la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer.

<p>2. Ejecutará programas de formación para los servidores públicos que garanticen la adecuada prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de la violencia, con especial énfasis en los operadores/as de justicia, el personal de salud y las autoridades de policía.</p> <p>3. Implementará en los ámbitos mencionados las recomendaciones de los organismos internacionales, en materia de Derechos Humanos de las mujeres.</p> <p>4. Desarrollará planes de prevención, detección y atención de situaciones de acoso, agresión sexual o cualquiera otra forma de violencia contra las mujeres.</p> <p>5. Implementará medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de las prácticas discriminatorias y la violencia contra las mujeres.</p> <p>6. Fortalecerá la presencia de las instituciones encargadas de prevención, protección y atención de mujeres víctimas de violencia en las zonas geográficas en las que su vida e integridad corran especial peligro en virtud de situaciones de conflicto por acciones violentas de actores armados.</p> <p>7. Desarrollará programas de prevención, protección y atención para las mujeres en situación de desplazamiento frente a los actos de violencia en su contra.</p> <p>8. Adoptar medidas para investigar o sancionar a los miembros de la policía, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y otras fuerzas que realicen actos de violencia contra las niñas y las mujeres, que se encuentren en situaciones de conflicto, por la presencia de actores armados.</p> <p>9. Las entidades responsables en el marco de la presente ley aportarán la información referente a violencia de género al sistema de información que determine el Ministerio de Protección Social y a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a través del Observatorio de Asuntos de Género, para las labores de información, monitoreo y seguimiento.</p> <p>Departamentos y Municipios</p> <p>1. El tema de violencia contra las mujeres será incluido en la agenda de los Consejos para la Política Social.</p> <p>2. Los planes de desarrollo municipal y departamental incluirán un capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas de la violencia.</p>	<p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 10. COMUNICACIONES. El Ministerio de Comunicaciones elaborará programas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, a garantizar el respeto a la dignidad de la mujer y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, evitando toda discriminación contra ellas.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 11. MEDIDAS EDUCATIVAS. El Ministerio de Educación, además de las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones:</p> <p>1. Velar para que las instituciones educativas incorporen la formación en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de la cátedra en Derechos Humanos.</p> <p>2. Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de la violencia contra las mujeres.</p> <p>3. Diseñar e implementar medidas de prevención y protección frente a la desescolarización de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia.</p> <p>4. Promover la participación de las mujeres en los programas de habilitación ocupacional y formación profesional no tradicionales para ellas, especialmente en las ciencias básicas y las ciencias aplicadas.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 12. MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL. El Ministerio de la Protección Social, además de las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones:</p> <p>1. Promoverá el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres e implementará mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial.</p> <p>2. Desarrollará campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.</p> <p>3. Promoverá el ingreso de las mujeres a espacios productivos no tradicionales para las mujeres.</p> <p>PARÁGRAFO. Las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), los empleadores y/o contratantes, en lo concerniente a cada uno de ellos, adoptarán procedimientos adecuados y efectivos para:</p>
<p>1. Hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial de las mujeres.</p> <p>2. Tramitar las quejas de acoso sexual y de otras formas de violencia contra la mujer contempladas en esta ley. Estas normas se aplicarán también a las cooperativas de trabajo asociado y a las demás organizaciones que tengan un objeto similar.</p> <p>3. El Ministerio de la Protección Social velará porque las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) y las Juntas Directivas de las Empresas den cumplimiento a lo dispuesto en este parágrafo.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 13. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. El Ministerio de la Protección Social, además de las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones:</p> <p>1. Elaborará o actualizará los protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud y de su personal ante los casos de violencia contra las mujeres. En el marco de la presente ley, para la elaboración de los protocolos el Ministerio tendrá especial cuidado en la atención y protección de las víctimas.</p> <p>2. Reglamentará el Plan Obligatorio de Salud para que incluya las actividades de atención a las víctimas que corresponda en aplicación de la presente ley, y en particular aquellas definidas en los literales a), b) y c) del artículo 19 de la misma.</p> <p>3. Contemplará en los planes nacionales y territoriales de salud un apartado de prevención e intervención integral en violencia contra las mujeres.</p> <p>4. Promoverá el respeto a las decisiones de las mujeres sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.</p> <p>PARÁGRAFO. El Plan Nacional de Salud definirá acciones y asignará recursos para prevenir la violencia contra las mujeres como un componente de las acciones de salud pública. Todos los planes y programas de salud pública en el nivel territorial contemplarán acciones en el mismo sentido</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 14. DEBERES DE LA FAMILIA. La familia tendrá el deber de promover los derechos de las mujeres en todas sus etapas vitales reconocidos, consagrados en esta ley y así mismo la eliminación de todas las formas de violencia y desigualdad contra la mujer.</p> <p>Son deberes de la familia para estos efectos:</p> <p>1. Prevenir cualquier acto que amenace o vulnere los derechos de las mujeres señalados en esta ley.</p>	<p>2. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial contra las mujeres.</p> <p>3. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las mujeres.</p> <p>4. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres.</p> <p>5. Promover la participación y el respeto de las mujeres en las decisiones relacionadas con el entorno familiar.</p> <p>6. Respetar y promover el ejercicio de la autonomía de las mujeres.</p> <p>7. Respetar y promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.</p> <p>8. Respetar las manifestaciones culturales, religiosas, políticas y sexuales de las mujeres.</p> <p>9. Proporcionarle a las mujeres discapacitadas un trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad, de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos relacionados con su entorno familiar y social.</p> <p>10. Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y eliminar la violencia y discriminación en su contra en el entorno de la familia.</p> <p>PARÁGRAFO. En los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y los demás grupos étnicos las obligaciones de la familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución Política y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.</p>

<p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento del principio de corresponsabilidad las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas y naturales, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Para estos efectos deberán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres reconocidos señalados en esta ley. 2. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial contra las mujeres. 3. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las mujeres. 4. Denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y discriminación en su contra. 5. Participar activamente en la formulación, gestión, cumplimiento, evaluación y control de las políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia y la discriminación en su contra. 6. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley y en la ejecución de las políticas que promuevan los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia y la discriminación en su contra. 7. Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y eliminar la violencia y discriminación en su contra. <p>CAPITULO V. MEDIDAS DE PROTECCIÓN.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 16. El artículo 4o de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 1o de la Ley 575 de 2000 quedará así:</p> <p>"Artículo 4o. Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de</p>	<p>las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.</p> <p>Quando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.</p> <p>PARÁGRAFO. En los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas, el competente para conocer de estos casos es la respectiva autoridad indígena, en desarrollo de la jurisdicción especial prevista por la Constitución Nacional en el artículo 246".</p> <p>ARTÍCULO 17. El artículo 5o de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 2o de la Ley 575 de 2000 quedará así:</p> <p>"Artículo 5o. Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente ley:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor. e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;
<p>Ley 1761 de 2015; Art. 9</p> <ol style="list-style-type: none"> f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere; g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a esta para su ingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad; h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada; j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; l) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial; m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima; 	<ol style="list-style-type: none"> n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. <p>PARÁGRAFO 1o. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en este artículo.</p> <p>PARÁGRAFO 2o. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar.</p> <p>PARÁGRAFO 3o. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos".</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 18. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA EN ÁMBITOS DIFERENTES AL FAMILIAR. Las mujeres víctimas de cualquiera de las modalidades de violencia contempladas en la presente ley, además de las contempladas en el artículo 5o de la Ley 294 de 1996 y sin perjuicio de los procesos judiciales a que haya lugar, tendrán derecho a la protección inmediata de sus derechos, mediante medidas especiales y expeditas, entre las que se encuentran las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Remitir a la víctima y a sus hijas e hijos a un sitio donde encuentren la guarda de su vida, dignidad, e integridad y la de su grupo familiar. b) Ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima; c) Ordenar el traslado de la institución carcelaria o penitenciaria para las mujeres privadas de la libertad; d) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente ley. <p>CAPITULO VI. MEDIDAS DE ATENCIÓN.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 19. Las medidas de atención previstas en esta ley y las que implementen el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, buscarán evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En las medidas de atención se tendrán en cuenta las mujeres en situación especial de riesgo.</p>

<p>a) Garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado, prestarán servicios de habitación y alimentación en las instituciones prestadoras de servicios de salud, o contratarán servicios de hotelería para tales fines; en todos los casos se incluirá el servicio de transporte de las víctimas de sus hijos e hijas. Adicionalmente, contarán con sistemas de referencia y contrarreferencia para la atención de las víctimas, siempre garantizando la guarda de su vida, dignidad e integridad.</p> <p>b) Cuando la víctima decida no permanecer en los servicios hoteleros disponibles, o estos no hayan sido contratados, se asignará un subsidio monetario mensual para la habitación y alimentación de la víctima, sus hijos e hijas, siempre y cuando se verifique que el mismo será utilizado para sufragar estos gastos en un lugar diferente al que habite el agresor. Así mismo este subsidio estará condicionado a la asistencia a citas médicas, psicológicas o psiquiátricas que requiera la víctima.</p> <p>En el régimen contributivo este subsidio será equivalente al monto de la cotización que haga la víctima al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y para el régimen subsidiado será equivalente a un salario mínimo mensual vigente.</p> <p>c) Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado serán las encargadas de la prestación de servicios de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica a las mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas.</p> <p>PARÁGRAFO 1o. La aplicación de las medidas definidas en los literales a) y b) será hasta por seis meses, prorrogables hasta por seis meses más siempre y cuando la situación lo amerite.</p> <p>PARÁGRAFO 2o. La aplicación de estas medidas se hará con cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud.</p> <p>PARÁGRAFO 3o La ubicación de las víctimas será reservada para garantizar su protección y seguridad, y las de sus hijos e hijas.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 20. INFORMACIÓN. Los municipios y distritos suministrarán información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia adecuada a su situación personal, sobre los servicios disponibles, las entidades encargadas de la prestación de dichos servicios, los procedimientos legales pertinentes y las medidas de reparación existentes.</p>	<p>Las líneas de atención existentes en los municipios y los distritos informarán de manera inmediata, precisa y completa a la comunidad y a la víctima de alguna de las formas de violencia, los mecanismos de protección y atención a la misma.</p> <p>Se garantizará a través de los medios necesarios que las mujeres víctimas de violencia con discapacidad, que no sepan leer o escribir, o aquellas que hablen una lengua distinta al español, tengan acceso integral y adecuado a la información sobre los derechos y recursos existentes.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 21. ACREDITACIÓN DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA. Las situaciones de violencia que dan lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditarán con la medida de protección expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 22. ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. Para la estabilización de las víctimas, la autoridad competente podrá:</p> <p>a) Solicitar el acceso preferencial de la víctima a cursos de educación técnica o superior, incluyendo los programas de subsidios de alimentación, matrícula, hospedaje, transporte, entre otros.</p> <p>b) Ordenar a los padres de la víctima el reintegro al sistema educativo, si esta es menor de edad.</p> <p>c) Ordenar el acceso de la víctima a actividades extracurriculares, o de uso del tiempo libre, si esta es menor de edad.</p> <p>d) Ordenar el acceso de la víctima a seminternados, externados, o intervenciones de apoyo, si esta es menor de edad.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 23. Los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un período de tres años.</p> <p>CAPITULO VII.</p> <p>DE LAS SANCIONES.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 24. Adiciónense al artículo 43 de la Ley 599 de 2000 los siguientes numerales:</p>
<p>10. La prohibición de aproximarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar.</p> <p>11. La prohibición de comunicarse con la víctima y/o con integrantes de su grupo familiar.</p> <p>PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo integran el grupo familiar:</p> <p>1. Los cónyuges o compañeros permanentes.</p> <p>2. El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar.</p> <p>3. Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos.</p> <p>4. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica.</p> <p>Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio, unión libre.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 25. Adiciónense al artículo 51 de la Ley 599 de 2000 el siguiente inciso:</p> <p>La prohibición de acercarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar y la de comunicarse con ellos, en el caso de delitos relacionados con violencia intrafamiliar, estará vigente durante el tiempo de la pena principal y hasta doce (12) meses más.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 26. Modifíquese el numeral 1 y adiciónense el numeral 11 al artículo 104 de la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>1. En los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica.</p> <p>11. Si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer.</p>	<p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 27. Adiciónense al artículo 135 de la Ley 599 de 2000, el siguiente inciso:</p> <p>La pena prevista en este artículo se aumentará de la tercera parte a la mitad cuando se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 28. El numeral 4 del artículo 170 de la Ley 599 de 2000 quedará así:</p> <p>"4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre".</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 29. Adiciónense al Capítulo Segundo del Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000, el siguiente artículo:</p> <p>"Artículo 210 A. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años".</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 30. Modifíquese el numeral 5 y adiciónense los numerales 7 y 8 al artículo 211 de la Ley 599 de 2000 así:</p> <p>"5. La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre.</p> <p>7. Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio.</p> <p>8. Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad".</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 31. Modifíquese el numeral 3 y adiciónense el numeral 4 al artículo 216 de la Ley 599 de 2000 así:</p> <p>"3. Se realizare respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad</p>

<p>doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre.</p> <p>4. Se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio".</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 32. Adiciónese un parágrafo al artículo 230 de la Ley 599 de 2000 así:</p> <p>"Parágrafo. Para efectos de lo establecido en el presente artículo se entenderá que el grupo familiar comprende los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar; los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. La afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio, unión libre".</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 33. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 149 de la Ley 906 de 2004:</p> <p>"Parágrafo. En las actuaciones procesales relativas a los delitos contra la libertad y formación sexual y de violencia sexual, el juez podrá, a solicitud de cualquiera de los intervinientes en el proceso, disponer la realización de audiencias cerradas al público. La negación de esta solicitud se hará mediante providencia motivada. Cuando cualquiera de los intervinientes en el proceso lo solicite, la autoridad competente podrá determinar la reserva de identidad respecto de sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia".</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 34. Las medidas de protección previstas en esta ley y los agravantes de las conductas penales se aplicarán también a quienes cohabiten o hayan cohabitado.</p> <p>CAPITULO VIII.</p> <p>DISPOSICIONES FINALES.</p> <p>ARTÍCULO 35. SEGUIMIENTO. La Consejería para la Equidad de la Mujer en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo crearán el comité de seguimiento a la implementación y cumplimiento de esta ley que deberá contar con la participación de organizaciones de mujeres.</p> <p>La Consejería presentará un informe anual al Congreso de la República sobre la situación de violencia contra las mujeres, sus manifestaciones, magnitud, avances y retrocesos, consecuencias e impacto.</p>	<p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 36. La norma posterior que restrinja el ámbito de protección de esta ley o limite los derechos y las medidas de protección o, en general, implique desmejora o retroceso en la protección de los derechos de las mujeres o en la eliminación de la violencia y discriminación en su contra, deberá señalar de manera explícita las razones por las cuales se justifica la restricción, limitación, desmejora o retroceso. Cuando se trate de leyes esta se realizará en la exposición de motivos.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 37. Para efectos de excepciones o derogaciones no se entenderá que esta ley resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando estas identifiquen de modo preciso la norma de esta ley objeto de excepción, modificación o derogatoria.</p> <p>LEY 1257 DE 2008 ARTÍCULO 38. Los Gobiernos Nacional, departamentales, distritales y municipales, tendrán la obligación de divulgar ampliamente y en forma didáctica en todos los niveles de la población colombiana, y en detalle, las disposiciones contenidas en la presente ley.</p> <p style="text-align: center;">TITULO IV</p> <p style="text-align: center;">DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES</p>
<p style="text-align: center;">MUJER CABEZA DE FAMILIA (Ley 82 de 1993)</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 1. La familia es núcleo fundamental e institución básica de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 2. JEFATURA FEMENINA DE HOGAR. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008: Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.</p> <p>En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.</p> <p>PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 3o. ESPECIAL PROTECCIÓN. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y la participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar, de vivienda, de acceso a la educación básica, media y superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia; de acceso a la ciencia y la tecnología, a líneas especiales de crédito y a trabajos dignos y estables.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 4. El Estado definirá mediante reglamento el ingreso de la mujer cabeza de familia y de la familia a su cargo al sistema de seguridad social, buscando la protección integral, cuyos servicios se les prestarán en forma efectiva, bien sea con sistemas prepagados, a crédito y por excepción de manera gratuita.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 5. APOYO EN MATERIA EDUCATIVA. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Los establecimientos educativos dispondrán de textos escolares para prestarlos a los menores que los requieran y de manera especial a los dependientes de mujeres cabeza de familia, sin menguar el derecho a la igualdad que tiene los demás niños, permitiendo el servicio de intercambio entre bibliotecas a fin de garantizar el cumplimiento de esta</p>	<p>obligación. La divulgación y el apoyo territorial a estos programas y propuestas educativas será prioridad del Ministerio de Educación.</p> <p>Para apoyar las bibliotecas de los establecimientos que así lo hicieren, y más a aquellas que suministren o donen los textos a los beneficiarios de este artículo, el Gobierno Nacional podrá crear un Fondo Especial, en la forma establecida en el artículo 4o de esta ley.</p> <p>PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación desarrollará gestiones encaminadas a promover la suscripción de convenios que faciliten la donación de material educativo para los hijos de las mujeres cabeza de familia. Para este efecto coordinará acciones con el Departamento Nacional de Planeación, para el fortalecimiento del programa de gestión de proyectos.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 6. En ningún caso podrá negarse el acceso a los servicios de educación o de salud a los hijos o demás personas dependientes de mujeres cabeza de familia con base exclusiva en esta circunstancia.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 7. TRATAMIENTO PREFERENCIAL PARA EL ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO Y GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Los establecimientos públicos de educación básica, media y superior atenderán de preferencia las solicitudes de ingreso de hijos o dependientes de mujeres cabeza de familia, siempre que cumplan con los requisitos y que los resultados de sus exámenes de admisión y demás pruebas, sean por lo menos iguales a los de los demás aspirantes.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional promoverá la formulación y presentación de proyectos que puedan ser objeto de cooperación internacional, dirigidos a crear, desarrollar y ejecutar procesos educativos encaminados especialmente a fortalecer la educación inicial y preescolar de los hijos o menores dependientes de las mujeres cabeza de familia.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 8. FOMENTO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno Nacional ofrecerá planes y programas de capacitación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales; empresas familiares, empresas de economía solidaria y proyectos emprendedores, con los cuales la mujer cabeza de familia pueda realizar una actividad económicamente rentable.</p> <p>Para tal efecto, la Dirección Nacional de Planeación (DNP), el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, o quien haga sus veces, y las Secretarías de Planeación departamentales, distritales y municipales, y los demás organismos de naturaleza similar existentes o que llegaren a crearse diseñarán y ejecutarán planes y programas dirigidos especialmente a la mujer cabeza de familia, para lograr la calificación de su desempeño básico y por competencias. Tales entidades deberán:</p> <p>a) Generar estadísticas con perspectiva de género a través de los organismos competentes, que permitan construir y formular planes, programas, proyectos y políticas públicas adecuadas a las necesidades de las mujeres cabeza de familia;</p>

<p>b) Generar programas gratuitos de capacitación, flexibles en su duración y adaptados a la disponibilidad de tiempo de las mujeres cabeza de familia;</p> <p>c) Crear redes regionales emprendedoras y productivas que vinculen a las mujeres cabeza de familia en actividades económicas sostenibles y rentables. El Gobierno Nacional determinará cuáles son las entidades que ejercerán la inspección, vigilancia y control en el cumplimiento y ejecuciones de los planes, programas y políticas públicas dirigidas a la mujer cabeza de familia.</p> <p>PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de la Protección Social fijará los parámetros que permitan la evaluación de estas acciones gubernamentales, a través de indicadores de gestión y resultados.</p> <p>PARÁGRAFO 2o. La Banca de oportunidades financiará de manera prioritaria los proyectos que adelanten las madres cabeza de familia en el marco del fomento para el desarrollo empresarial a que hace referencia el presente artículo.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 9. Dentro del campo cultural del desarrollo, el Gobierno Nacional establecerá y los Departamentos, los Municipios y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá podrán establecer en favor de la mujer cabeza de familia o de quienes de ella dependan:</p> <p>a. Acceso preferencial a los auxilios educativos.</p> <p>b. Servicio básico de textos y apoyo educativo a las entidades de economía solidaria integradas en su mayoría por mujeres cabeza de familia.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 10. INCENTIVOS. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno Nacional establecerá incentivos especiales para el sector privado que cree, promocióne o desarrolle programas especiales de salud, educación, vivienda, seguridad social, crédito y empleo para las mujeres cabeza de familia.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 11. El Gobierno Nacional, mediante reglamento, introducirá un factor de ponderación, que beneficie las propuestas de la mujer cabeza de familia o de las personas jurídicas en las cuales ella participe mayoritariamente, en los procesos de adquisición y venta de bienes estatales y de contratación de servicios también con el Estado. Dicho factor permitirá que se seleccione la oferta de la mujer cabeza de familia o de la correspondiente persona jurídica siempre que sea por lo menos igual a las de las demás proponentes.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 12. APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES PARA EL ACCESO A VIVIENDA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial promoverá la formación de organizaciones sociales y comunitarias de mujeres que les faciliten el acceso a la vivienda de interés social, orientándolas en los procesos de calificación para la asignación de subsidios en dinero o especie y ofrecerá asesoría para la adquisición de vivienda a través de los diversos programas de crédito, otorgamiento de subsidio, mejoramiento y saneamiento básico, construcción in situ propio y autoconstrucción.</p>	<p>Esta política se aplicará también a través de las entidades territoriales y de las instituciones que efectúen labores para el trámite de subsidios familiares de vivienda de interés social, que en alguna forma reciban recursos para vivienda del Presupuesto General de la Nación o del Fondo Nacional de Vivienda. Para el efecto llevarán de manera preferente, el registro de mujeres cabeza de familia con el fin de ofrecerles capacitación respecto de los programas para ellas, en igualdad de condiciones con todos los inscritos como aspirantes a subsidio para vivienda de interés social proveniente de la fuente de recursos antes anotada.</p> <p>Las entidades territoriales cuyos planes de vivienda reciban recursos del presupuesto nacional, facilitarán el lleno de los requisitos para la contratación administrativa de prestación de servicios o de ejecución de obras, a asociaciones u organizaciones populares de vivienda o las que se constituyan dentro del sector de la economía solidaria, que estén integradas mayoritariamente por mujeres cabeza de familia. Es condición para este tratamiento que las utilidades o excedentes que se obtengan se destinen a la adquisición o mejoramiento de la vivienda de las mujeres asociadas, que sean cabeza de familia.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 13. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> La inspección, vigilancia y control de las políticas y programas de las entidades e instituciones a que se refiere el artículo anterior corresponderá al Fondo Nacional de Vivienda o quien haga sus veces. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 14. INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno Nacional facilitará los mecanismos de información y capacitación de las Mujeres Cabeza de Familia que no tengan la posibilidad de asociarse u organizarse, para garantizar su acceso como postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, en sus diversas modalidades.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 15. FLEXIBILIZACIÓN Y APOYO CREDITICIO. <Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno Nacional diseñará instrumentos y estrategias que faciliten y permitan el acceso a las madres cabeza de familia, a los servicios financieros brindándoles acompañamiento y capacitación permanente, a fin de reducir la feminización de la pobreza.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 16. Los departamentos, los municipios y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, podrán promover y financiar la creación y operación de entidades sin ánimo de lucro, que coordinen las estrategias locales o regionales para apoyar a las mujeres cabeza de familia.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 17. DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> En aplicación del principio de igualdad de oportunidades a favor de las mujeres cabeza de familia, las entidades públicas nacionales y territoriales a las cuales corresponda por aplicación de normas vigentes al efecto, que ofrezcan programas de desarrollo social, deberán fijar en la formulación y ejecución de los mismos, un</p>
<p>porcentaje en los presupuestos para proyectos destinados a las mujeres cabeza de familia que contemplen capacitación técnica de acuerdo con la oferta y la demanda, de apoyo a cadenas productivas y a procesos organizacionales, como componente solidario en la ejecución de proyectos sociales de desarrollo que les permitan generar recursos y empleo digno y estable. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 18. Los beneficios establecidos en esta ley para las mujeres cabeza de familia y quienes de ellas dependan, no excluyen las obligaciones de diversa índole que a su favor deban cumplir personas naturales o jurídicas, ni eximen de las acciones para exigirlos.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 19. Dentro del campo social del desarrollo se establece el derecho a exigir judicial y legalmente que un porcentaje del salario, de los ingresos o del patrimonio de quien sea económica y civilmente responsable de la mujer cabeza de familia o de alguien a su cargo, se destine a atenderles sus necesidades básicas.</p> <p>PARAGRAFO. Facúltase al Gobierno Nacional para que dentro del término de un año contado a partir de la publicación de la presente ley dicte las disposiciones necesarias para la eficacia de este artículo.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 20. GARANTÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Para garantizar el desarrollo sostenible de los proyectos sociales que se promueven por la presente ley a favor de las Mujeres Cabeza de Familia, se disponen las siguientes acciones:</p> <p>a) El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, o quien haga sus veces, dirigirá, coordinará, promoverá, planeará, protegerá, fortalecerá y desarrollará proyectos de enfoque empresarial dirigidos a las mujeres cabeza de familia, mediante la ejecución de recursos provenientes del presupuesto nacional, de los particulares u originados en el extranjero, para promover la constitución de organizaciones de economía solidaria sin que esto avale las cooperativas de trabajo asociado que tercerizan las relaciones laborales;</p> <p>b) El Gobierno Nacional garantizará el acceso a los programas crediticios y de asistencia técnica oportuna y permanente para las microempresas, famiempresas y similares que hayan sido organizadas por mujeres cabeza de familia, en relación con el abastecimiento de materias primas, adiestramiento en las áreas de producción, comercialización y distribución de los productos y venta de servicios.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 21. Lo establecido en la presente ley no impide que las mujeres cabeza de familia se beneficien en la misma forma y en los mismos casos que determinen las normas jurídicas en favor de la mujer en general.</p> <p>LEY 82 DE 1993 ARTÍCULO 22. CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Es deber del Estado capacitar a funcionarios públicos y líderes comunitarios en la defensa de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres cabeza de familia.</p>	<p>PARÁGRAFO. Los funcionarios que incumplan o entorpezcan el cumplimiento de la presente ley quedarán incurso en causal de mala conducta, que se sancionará de acuerdo con las normas especiales sobre la materia.</p> <p>POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS SOBRE EL APOYO DE MANERA ESPECIAL, EN MATERIA DE PRISIÓN DOMICILIARIA Y TRABAJO COMUNITARIO (Ley 750 de 2002)</p> <p>LEY 750 DE 2002 ARTÍCULO 1. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez en caso de que la víctima de la conducta punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:</p> <p>Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente.</p> <p>La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos.</p> <p>Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:</p> <p>Cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia.</p> <p>Observar buena conducta en general y en particular respecto de las personas a cargo.</p> <p>Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerida para ello.</p> <p>Permitir la entrada a la residencia, a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y cumplir la reglamentación del INPEC.</p> <p>El seguimiento y control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez, autoridad competente o tribunal que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia con apoyo en el INPEC, organismo que adoptará entre otros un sistema de visitas periódicas a la residencia de la penada para verificar el cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo.</p> <p>LEY 750 DE 2002 ARTÍCULO 2. La pena principal privativa de la libertad sustituida por la que en esta ley se establece, se hará efectiva en cualquier momento en que la infractora violare alguna de las obligaciones impuestas acorde con esta ley, se evada o incumpla reclusión, fundamentalmente aparezca que continúa desarrollando actividades</p>

<p>delictivas, o en el momento en que dejare de tener la calidad de mujer cabeza de familia, o incumpla sus responsabilidades como mujer cabeza de familia y tal hecho sea certificado por autoridad competente salvo que, en estos dos últimos casos, hubiere cumplido con las mencionadas obligaciones durante un lapso de tiempo equivalente a por lo menos las tres quintas (3/5) partes de la condena.</p> <p>LEY 750 DE 2002 ARTÍCULO 3. Transcurrido el término privativo de la libertad contemplado en la sentencia, se declarará extinguida la sanción, salvo procedencia de otro beneficio que tenga igual o más favorable efecto.</p> <p>LEY 750 DE 2002 ARTÍCULO 4. La detención preventiva cuando proceda respecto de una mujer cabeza de familia, será sustituida por la detención domiciliaria en los mismos eventos y bajo las mismas condiciones consagradas en la presente ley para la pena sustitutiva de prisión domiciliaria.</p> <p>LEY 750 DE 2002 ARTÍCULO 5. La mujer cabeza de familia condenada a pena privativa de la libertad o la sustitutiva de prisión domiciliaria podrá desarrollar trabajos comunitarios de mantenimiento, aseo, obras públicas, ornato o reforestación y servicios en el perímetro urbano o rural de la ciudad o municipio sede del respectivo centro carcelario o penitenciario de residencia fijado por el juez, según el caso. El tiempo dedicado a tales actividades redimirá la pena en los términos previstos en el código penitenciario y carcelario.</p> <p>Para tal efecto, el Director del respectivo centro penitenciario o carcelario o el funcionario judicial competente, según el caso, podrá acordar y fijar con el alcalde municipal, o el local las condiciones de la prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de tales actividades.</p> <p>La mujer dedicada a tales labores deberá pernoctar en los respectivos centros penitenciarios o carcelarios o en el lugar de residencia fijado por el juez según el caso.</p> <p>LEY 750 DE 2002 ARTÍCULO 6o. La aplicación de la presente ley se hará sin perjuicio de los demás beneficios consagrados en las normas penales o penitenciarias y carcelarias aplicables.</p> <p style="text-align: center;">POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA ESTRATEGIA SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE DEL ENTORNO LABORAL EN ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y EMPRESAS PRIVADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. (Ley 1823 de 2017)</p> <p>LEY 1823 DE 2017 ARTÍCULO 1o. OBJETO Y ALCANCE. La presente ley tiene por objeto adoptar la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral en entidades públicas y empresas privadas de conformidad con el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.</p> <p>PARÁGRAFO. El uso de estas salas no eximen al empleador de reconocer y garantizar el disfrute de la hora de lactancia, la madre lactante podrá hacer uso de la misma o</p>	<p>desplazarse a su lugar de residencia, o ejercerlo en su lugar de trabajo, en ejercicio del derecho que le asiste en virtud del artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.</p> <p>LEY 1823 DE 2017 ARTÍCULO 2o. ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. Las entidades públicas del orden nacional y territorial, del sector central y descentralizado, y las entidades privadas adecuarán en sus instalaciones un espacio acondicionado y digno para que las mujeres en periodo de lactancia que laboran allí, puedan extraer la leche materna asegurando su adecuada conservación durante la jornada laboral.</p> <p>Las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral deberán garantizar las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la leche materna, bajo normas técnicas de seguridad, para luego transportarla al hogar y disponer de ella, para alimentar al bebé en ausencia temporal de la madre.</p> <p>PARÁGRAFO. Estas disposiciones aplicarán a las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos o aquellas con capitales inferiores a 1.500 salarios mínimos con más de 50 empleadas.</p> <p>LEY 1823 DE 2017 ARTÍCULO 3o. El Ministerio de Salud y Protección Social será el encargado de vigilar y controlar la implementación y funcionamiento de las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral en las entidades públicas y privadas. En un plazo no mayor a seis (6) meses, a partir de la promulgación de la presente ley, establecerá los parámetros técnicos para la operación de las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral, las especificaciones técnicas de higiene, salubridad y dotación mínima que deben tener. Asimismo reglamentará la creación en conjunta de estas salas por parte de las entidades públicas y privadas.</p> <p>LEY 1823 DE 2017 ARTÍCULO 4o. El Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal, en uso de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, promoverá campañas y brindará capacitación para incentivar la lactancia materna en las trabajadoras de las entidades públicas y privadas.</p> <p>LEY 1823 DE 2017 ARTÍCULO 5o. Las entidades privadas con más de 1.000 empleados y las entidades públicas dispondrán de dos (2) años para realizar las adecuaciones físicas necesarias, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.</p> <p>Las empresas privadas con menos de mil (1.000) empleados, contarán con 5 años para para realizar las adecuaciones físicas necesarias para cumplir con esta ley.</p>
<p>LEY 1823 DE 2017 ARTÍCULO 6o. El Ministerio de Hacienda determinará los beneficiarios, alivios o incentivos tributarios para las empresas privadas que adopten las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral.</p> <p style="text-align: center;">TITULO V</p> <p style="text-align: center;">MUJERES RURALES. (Ley 731 de 2002)</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 2. DE LA MUJER RURAL. Para los efectos de la presente ley, mujer rural es toda aquella que sin distinción de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 3. DE LA ACTIVIDAD RURAL. La actividad rural comprende desde las actividades tradicionales, tales como las labores agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras, hasta las no tradicionales, como el desarrollo de agroindustrias y microempresas, además de otras actividades realizadas en el marco de una perspectiva más amplia de la ruralidad, como son las relacionadas con la integración a cadenas agroproductivas y comerciales en todas sus expresiones organizativas, el turismo rural y ecológico, las artesanías, la transformación de metales y piedras preciosas y otros nuevos campos de oportunidad, incluyendo las actividades de mercadeo, transformación de productos y prestación de servicios que se realicen en torno a ellas.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 4. DE LA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA DE LA RURALIDAD. La perspectiva más amplia de la ruralidad implica una relación cada vez más estrecha e interdependiente entre lo rural con lo urbano, caracterizada por los vínculos que se establecen por la ubicación de la vivienda y el lugar de trabajo, así como por los establecidos en desarrollo de las actividades rurales y otras actividades multisectoriales que trascienden lo agropecuario.</p> <p>CAPITULO II.</p> <p>PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES RURALES EN LOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR RURAL.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 5. ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS. Los fondos, planes, programas, proyectos y entidades que favorecen la actividad rural, deberán ajustar sus procedimientos y requisitos en aras de eliminar cualquier obstáculo que impida el acceso de las mujeres rurales a ellos.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 6. DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN. Los fondos, planes, programas, proyectos y entidades que favorecen la actividad rural, deberán apoyar eficazmente el acceso de las mujeres rurales a los recursos, a través de medios</p>	<p>idóneos que permitan su divulgación, la capacitación adecuada para su utilización y la asistencia técnica de los proyectos productivos que se emprendan.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 7. FINANCIACIÓN PARA OTRAS ACTIVIDADES RURALES. Los fondos y entidades que favorecen al sector agropecuario, forestal, pesquero y minero, financiarán y apoyarán según su naturaleza, además de las actividades tradicionales, todas aquellas a las que hace referencia el artículo 3o. de esta ley.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 8. CREACIÓN DE CUPOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO CON TASA PREFERENCIAL PARA LAS MUJERES RURALES DE BAJOS INGRESOS. Teniendo en cuenta las necesidades y demandas de crédito de la mujer rural, Finagro asignará como mínimo el 3% anual de las captaciones que realice a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA, clase A, con destino a constituir cupos y líneas de créditos con tasa preferencial, para financiar las actividades rurales incluidas en el artículo 3o. de esta ley desarrolladas por las mujeres rurales, en los términos que establezca la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.</p> <p>PARÁGRAFO. En el evento de que las solicitudes de redescuento de créditos para la Mujer Rural no alcancen el valor equivalente al porcentaje establecido como cupo mínimo en este artículo, Finagro podrá utilizar los recursos provenientes de los TDA disponibles para atender otras líneas de crédito, siempre y cuando cuente con procedimientos para la realización de operaciones de Tesorería que garanticen que frente a nuevos créditos de Mujer Rural, se contarán con los recursos necesarios para su atención.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 9. ACCESO DE LAS MUJERES RURALES AL FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS, FAG. Las mujeres rurales tendrán acceso a las garantías dadas por el Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, para respaldar los créditos relacionados no sólo con las actividades tradicionales sino con todas aquellas a las que se hace referencia en el artículo 3o. de esta ley, previo el cumplimiento de las condiciones establecidas en el reglamento operativo del fondo. Las mujeres rurales que sean pequeñas productoras tendrán acceso prioritario a dichas garantías.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 10. CREACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO PARA LAS MUJERES RURALES, FOMMUR. Créase el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, Fommur, como una cuenta especial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual deberá orientarse al apoyo de planes, programas y proyectos de actividades rurales, que permitan la incorporación y consolidación de las mujeres rurales y sus organizaciones dentro de la política económica y social del país.</p> <p>PARÁGRAFO 1o. Teniendo en cuenta el origen de los recursos que se destinen para el funcionamiento del Fommur, estos además deberán ser asignados para la divulgación y capacitación sobre el acceso al crédito, la promoción y la formación de planes, programas y proyectos en favor de las mujeres rurales, así como, para la asistencia técnica, comercial y gerencial de los mismos.</p>

<p>Igualmente el Fommur podrá financiar u otorgar incentivos, garantías, apoyos y compensaciones que requieran las mujeres rurales.</p> <p>PARÁGRAFO 2o. El Fommur incentivará tanto la creación, promoción y fortalecimiento de formas asociativas, como el otorgamiento de créditos asociativos, con el fin de lograr una vinculación organizada y directa de las mujeres rurales dentro del mercado. Así mismo, teniendo en cuenta el origen de los recursos que se destinen para su funcionamiento, podrá apoyar a los departamentos y municipios que inviertan en planes, programas y proyectos para las mujeres rurales que guarden relación con su objeto social.</p> <p>PARÁGRAFO 3o. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará la operación del Fommur dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 11. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO PARA LAS MUJERES RURALES, FOMMUR. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contratará la administración del Fommur para lo cual determinará los requisitos que debe cumplir el administrador, la forma de selección del mismo y las condiciones para el desempeño de su labor.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 12. DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE FOMENTO PARA LAS MUJERES RURALES, FOMMUR. Los recursos del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, Fommur, estarán constituidos por:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recursos del Presupuesto Nacional. 2. Empréstitos externos que, con el aval de la Nación, gestione el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 3. Aportes que realicen las entidades nacionales o internacionales. 4. Donaciones de particulares, organizaciones no gubernamentales, entidades y/o gobiernos extranjeros. 5. Bienes muebles e inmuebles y recursos sobre los cuales se declare la extinción de dominio que hayan ingresado al fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, que sean asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de conformidad con los reglamentos, para financiar programas y proyectos de esta ley afines a los contemplados en el artículo 26 de la Ley 333 de 1996. <p>PARÁGRAFO. De los bienes muebles e inmuebles y recursos que se hayan incautado o que tengan vigente una medida cautelar, sobre los cuales se pretenda decretar la extinción de dominio, la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá asignar provisionalmente parte de ellos a este fondo.</p> <p>CAPITULO III.</p>	<p>NORMAS RELATIVAS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS MUJERES RURALES.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 13. EXTENSIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN DINERO, ESPECIE Y SERVICIOS A LAS MUJERES RURALES POR PARTE DE COMCAJA. La Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja, hará extensivo el subsidio familiar en dinero, especie y servicios a mujeres rurales, con recursos del presupuesto general de la nación, o con recursos que se le otorguen en administración por parte de otras entidades del sector público, en cuyos objetivos se incluyan programas para zonas rurales, utilizando convenios interadministrativos suscritos entre las respectivas entidades públicas.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 14. AFILIACIÓN DE LAS MUJERES RURALES SIN VÍNCULOS LABORALES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creará mecanismos de afiliación destinados a las mujeres rurales que carezcan de vínculos laborales, para que puedan tener como trabajadoras independientes la correspondiente cobertura del Sistema General de Riesgos Profesionales.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 15. PROGRAMAS DE RIESGOS PROFESIONALES PARA LAS MUJERES RURALES. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Fondo de Riesgos Profesionales, en desarrollo de su objeto, adelantará estudios, campañas y acciones de prevención, promoción y educación, destinados a las mujeres rurales, con el fin de mejorar su calidad de vida, ya sea por labores que desempeñen desde su casa de habitación o en desarrollo de su actividad rural.</p> <p>CAPITULO IV.</p> <p>NORMAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LAS MUJERES RURALES.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 16. FOMENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL. En desarrollo del artículo 64 de la Ley 115 de 1994, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, promoverán un servicio de educación campesina y rural de carácter formal, no formal e informal, que de manera equitativa amplíe la formación técnica de los hombres y mujeres rurales en las actividades comprendidas en el artículo 3o. de esta ley.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 17. CONDICIONES PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES RURALES A LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS POR EL SENA. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, deberá velar para que en los programas de formación profesional que lleve a cabo, se contemplen las iniciativas y necesidades de las mujeres rurales y se garantice su acceso a todos los programas y cursos de capacitación técnica y profesional sin patrocinio ni discriminación alguna. Para ello, podrá actuar en coordinación con el Ministerio de Agricultura.</p> <p>PARÁGRAFO. En desarrollo de esta norma, el SENA deberá crear para las mujeres rurales que quieran acceder a sus cursos y programas de capacitación, unas</p>
<p>condiciones acordes con su formación educativa y con el estilo de vida y roles que desempeñan.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 18. DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y FORMATIVO COMUNITARIO PARA LAS MUJERES RURALES. Los municipios y departamentos deberán hacer énfasis en los planes, programas y proyectos que estimulen la práctica del deporte social comunitario y formativo comunitario, de acuerdo a los parámetros fijados por la Ley 181 de 1995, como instrumentos indispensables para lograr el desarrollo integral de las mujeres rurales.</p> <p>CAPITULO V.</p> <p>PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES RURALES EN LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 19. PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE LA MUJER RURAL EN DIFERENTES ÓRGANOS DE DECISIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A NIVEL TERRITORIAL. Las mujeres rurales tendrán una participación equitativa en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y en los Consejos Territoriales de Planeación. También se asegurará su participación equitativa en las mesas de trabajo y conciliación; en las instancias creadas para la formulación y seguimiento de los planes de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta para ello lo previsto en los artículos 4o. y 22 de la Ley 388 de 1999 <sic>; así como en otras instancias de participación ciudadana creadas para coordinar y racionalizar tanto las acciones como el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y a la escogencia de los proyectos que sean objeto de cofinanciación.</p> <p>Las representantes de las mujeres rurales serán escogidas en forma democrática por sus propias organizaciones en las condiciones que señale la ley.</p> <p>PARÁGRAFO. Los órganos de planeación y decisión a nivel local deberán considerar temas específicos relacionados con la mujer rural.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 20. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES RURALES EN LAS ENTIDADES Y ÓRGANOS DE DECISIÓN QUE FAVORECEN EL SECTOR RURAL. En todas las entidades y órganos de decisión del orden nacional, departamental y municipal, que realicen políticas, planes, programas o proyectos o creen medidas encaminadas a favorecer el sector rural, deberán estar representadas de manera equitativa las mujeres rurales, las cuales serán escogidas en forma democrática por sus propias organizaciones en las condiciones que señale la respectiva ley.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 21. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES RURALES EN LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES DE EDUCACIÓN. En las Juntas Departamentales, Distritales y Municipales de Educación habrá una representante de las mujeres rurales escogida en forma democrática por sus propias organizaciones, quien participará de acuerdo a los lineamientos fijados por la ley.</p>	<p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 22. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS RURALES EN LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS. En las asambleas generales y en las juntas del consejo comunitario que integran los consejos comunitarios de las comunidades afrocolombianas, así como en las Comisiones Consultivas Departamentales, Regionales y de Alto Nivel, deberá haber una participación no menor del 30% de mujeres afrocolombianas rurales.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 23. CREACIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE LAS MUJERES INDÍGENAS RURALES. Créase una Comisión Consultiva de las mujeres indígenas rurales de diferentes etnias, conformada en forma democrática por ellas, para la identificación, formulación, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo económico, social, cultural, político y ambiental de los pueblos indígenas de Colombia.</p> <p>CAPITULO VI.</p> <p>NORMAS RELACIONADAS CON LA REFORMA AGRARIA.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 24. TITULACIÓN DE PREDIOS DE REFORMA AGRARIA A NOMBRE DEL CÓNYUGE O COMPAÑERA (O) PERMANENTE DEJADO EN ESTADO DE ABANDONO. En los casos donde el predio esté titulado o en proceso de serlo, bien sea, conjuntamente a nombre de los cónyuges o de las compañeras (os) permanentes o, tan sólo a nombre de uno de los cónyuges o de uno de los compañeros permanentes, en el evento en que uno de ellos abandonare al otro, sus derechos sobre el predio en proceso de titulación o ya titulado, deberán quedar en cabeza del cónyuge o compañera (o) permanente que demuestre la situación de abandono y reúna los requisitos para alegar la prescripción.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 25. TITULACIÓN DE PREDIOS DE REFORMA AGRARIA A LAS EMPRESAS COMUNITARIAS O GRUPOS ASOCIATIVOS DE MUJERES RURALES. Podrán ser beneficiarias de la titulación de predios de reforma agraria las empresas comunitarias o grupos asociativos de mujeres rurales que reúnan los demás requisitos exigidos por la ley. Igualmente se garantiza el acceso preferencial a la tierra de las mujeres jefas de hogar y de aquellas que se encuentren en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 26. PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE LAS MUJERES RURALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y USO DE LOS PREDIOS DE REFORMA AGRARIA. En todos los procedimientos de adjudicación y de uso de los predios de reforma agraria que permitan la participación en las decisiones, la capacitación, la asistencia técnica y la negociación de los predios, deben intervenir equitativamente tanto los hombres como las mujeres rurales que sean beneficiarios, con el objeto, de garantizar la transparencia e igualdad de dichos procedimientos.</p> <p>CAPITULO VII.</p> <p>DISPOSICIONES VARIAS.</p>

<p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 27. SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA RURAL PARA LAS MUJERES RURALES. Las entidades otorgantes de subsidios familiares de vivienda de interés social rural deberán dar prelación a la mujer rural que tenga condición de cabeza de familia sobre los demás solicitantes, mediante un puntaje preferencial que se estimará en la calificación de postulaciones y la reglamentación de una asignación mínima de los recursos destinados para el subsidio de vivienda rural</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 28. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES RURALES EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE REFORESTACIÓN. En los planes programas y proyectos de reforestación que se adelanten en las zonas rurales, se deberá emplear por lo menos un 30% de la mano de obra de las mujeres rurales que en ellas habiten, quienes junto con la comunidad a la que pertenezcan, deberán ser consultadas por las autoridades ambientales sobre las plantas originarias existentes en la zona con el fin de asegurar una reforestación acorde con el ecosistema.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 29. IGUALDAD DE REMUNERACIÓN EN EL SECTOR RURAL. En desarrollo del artículo 14 de la <u>LEY 581 de 2000</u>, el Gobierno, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás autoridades, vigilarán el cumplimiento de la legislación que establece igualdad de condiciones laborales, con especial cuidado a que se haga efectivo el principio de igual remuneración para trabajo igual en el sector rural, con el fin de eliminar las inequidades que al respecto se presentan entre hombres y mujeres rurales.</p> <p>PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional deberá crear instrumentos y mecanismos que aseguren la efectiva y oportuna reclamación de este derecho por parte de la mujer rural, acordes con su especial condición.</p> <p>CAPITULO VIII.</p> <p>DISPOSICIONES FINALES.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 30. AMPLIACIÓN DE REGISTROS ESTADÍSTICOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE LA MUJER RURAL. El Gobierno Nacional, a través de los organismos competentes, promoverá la ampliación tanto de registros estadísticos sobre la condición de la mujer rural como de indicadores de evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos del sector rural discriminados por hombre y mujer.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 31. JORNADAS DE CEDULACIÓN PARA LAS MUJERES RURALES. La Registraduría Nacional del Estado Civil realizará jornadas tendientes a la cedulaación de mujeres rurales, de tal modo que les permitan su plena identificación, el ejercicio de sus derechos ciudadanos, el acceso a los servicios y la obtención de créditos y subsidios especiales.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 32. DIVULGACIÓN DE LAS LEYES QUE FAVORECEN A LA MUJER RURAL A TRAVÉS DE MEDIOS DIDÁCTICOS. El Gobierno Nacional emitirá cartillas, folletos y otros medios de comunicación de carácter didáctico, destinados a divulgar ampliamente esta ley y otras que beneficien a la mujer rural.</p>	<p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 33. INSTRUMENTOS BÁSICOS DEL PLAN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y ESTÍMULO A LA MUJER RURAL Y OTROS PLANES A NIVEL REGIONAL. En desarrollo del artículo 10 de la <u>LEY 581 de 2000</u>, deberá tenerse especial consideración dentro de los instrumentos básicos del Plan Nacional de Promoción y Estímulo a la Mujer, a que los mismos satisfagan prioritariamente los intereses y necesidades de las mujeres rurales de bajos ingresos.</p> <p>Así mismo, los gobiernos departamental, distrital y municipal deberán formular y llevar a cabo planes específicos de igualdad de oportunidades, promoción y estímulo para las mujeres rurales, para lo cual tendrán en cuenta la opinión de las organizaciones que las agrupan.</p> <p>LEY 731 DE 2002 ARTÍCULO 34. PLAN DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA MUJER RURAL. El Gobierno Nacional, diseñará un plan de revisión, evaluación y seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales, a través de la Consejería para la Equidad de la Mujer o quien haga sus veces, con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Así mismo, podrán crearse comités interinstitucionales con participación de las mujeres rurales con el fin de colaborar en el cumplimiento de los objetivos del plan.</p> <p>PARÁGRAFO. Para efectos de coordinación, promoción, capacitación, recepción de proyectos, aplicabilidad, revisión, evaluación y seguimiento de la presente ley en los departamentos, las regionales de Dansocial podrán apoyar el cumplimiento de dicha función previo convenio con el Gobierno Nacional.</p> <p>CRITERIOS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ADJUDICACIÓN DE LAS TIERRAS BALDÍAS, VIVIENDA RURAL, PROYECTOS PRODUCTIVOS, SE MODIFICA LA LEY 160 DE 1994 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. (LEY 1900 DE 2018)</p> <p>LEY 1900 DE 2018 ARTÍCULO 1o. La presente ley tiene por objeto promover la equidad en el acceso de la mujer a la adjudicación de los terrenos baldíos nacionales, en la asignación de vivienda rural, la distribución de recursos para la promoción de proyectos productivos para fomento de la actividad agropecuaria, así como fijar mecanismos que garanticen su real y efectiva aplicación con el fin de erradicar cualquier forma de discriminación.</p> <p>LEY 1900 DE 2018 ARTÍCULO 2o. Sin perjuicio de lo previsto en el Decreto número <u>902</u> de 2017, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras priorizará a las pobladoras rurales para el acceso a la tierra, formalización, adjudicación de baldíos nacionales y asignación de recursos para proyectos productivos, mediante la asignación de puntaje dentro de la metodología que para el efecto disponga la autoridad competente, otorgando el doble de puntuación para cada variable de clasificación a aquellos hogares rurales cuya jefatura resida en cabeza de una mujer campesina.</p> <p>LEY 1900 DE 2018 ARTÍCULO 3o. Créase el artículo <u>65A</u> en la Ley 160 de 1994, el cual quedará así:</p>
<p>"Artículo 65A. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o quien haga sus veces, a través de los instrumentos de política sectorial, aplicarán el enfoque diferencial de género en la adjudicación de las tierras baldías nacionales.</p> <p>En la adjudicación de las tierras baldías nacionales, será obligatoria la aplicación de lo previsto en el artículo <u>2o</u> de la presente ley con el fin de garantizar un mayor acceso de las mujeres campesinas cabeza de hogar, siempre y cuando se encuentren vinculadas a actividades agropecuarias y rurales.</p> <p>LEY 1900 DE 2018 ARTÍCULO 4o. Modifíquese el artículo <u>69</u> de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así:</p> <p>"Artículo 69. Los sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito y parcialmente gratuito que soliciten la adjudicación de un baldío, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos <u>4o</u> y <u>5o</u> del Decreto número 902 de 2017 o la norma que lo reemplace o sustituya.</p> <p>En los casos en que la explotación realizada no corresponda a la aptitud específica señalada, el baldío no se adjudicará, hasta tanto no se adopte y ejecute por el colono un plan gradual de reconversión, o previo concepto favorable de la institución correspondiente del Sistema Nacional Ambiental.</p> <p>Las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, lo mismo que las destinadas al uso forestal racional, situadas fuera de las zonas decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales, se tendrán como porción aprovechada para el cálculo de la superficie explotada exigida por el presente artículo para tener derecho a la adjudicación.</p> <p>Las islas, playones y madre viejas desecadas de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional solo podrán adjudicarse a campesinos y pescadores de escasos recursos, en las extensiones y conforme lo disponga la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) o la entidad que lo reemplace o sustituya.</p> <p>En igualdad de condiciones, se debe preferir a quienes sean campesinos o pescadores ocupantes.</p> <p>En las sabanas y playones comunales que periódicamente se inundan a consecuencia de las avenidas de los ríos, lagunas o ciénagas, no se adelantarán programas de adquisición de tierras. En las reglamentaciones que dicte el Instituto sobre uso y manejo de las sabanas y playones comunales, deberán determinarse las áreas que pueden ser objeto de ocupación individual, pero solo para fines de explotación con cultivos de pancoger.</p> <p>Los playones y sabanas comunales constituyen reserva territorial del Estado y son imprescriptibles. No podrán ser objeto de cerramientos que tiendan a impedir el aprovechamiento de dichas tierras por los vecinos del lugar.</p>	<p>No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas.</p> <p>PARÁGRAFO. En el evento en que el solicitante de la adjudicación sea una familia desplazada que esté en el Registro Único de Víctimas, podrá acreditar la ocupación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación, con la respectiva certificación del registro de declaración de abandono del predio. La ocupación se verificará por la Agencia Nacional de Tierras reconociendo la explotación actual sin que sea necesario el cumplimiento de la explotación sobre las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación se solicita.</p> <p>En todo caso, el solicitante de la adjudicación deberá cumplir con los requisitos previstos en este artículo relacionados con la aptitud del predio, no acumulación o transferencia de ocupaciones, conservación de zonas ambientales protegidas, extensiones máximas de adjudicación de islas, playones y madre viejas desecadas de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional, y las zonas especiales en las cuales no se adelantarán programas de adquisición de tierras y los demás requisitos que por ley no están exceptuados para los solicitantes en condición de desplazamiento.</p> <p>LEY 1900 DE 2018 ARTÍCULO 5o. Modifíquese el artículo <u>70</u> de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así:</p> <p>"Artículo 70. Podrán ser beneficiarias de la presente ley las mujeres rurales mayores de 16 años, salvo las excepciones legales, que no sean propietarias de tierras, que tengan tradición en labores rurales, que se hallen en condiciones de pobreza y marginalidad, y que deriven de la actividad rural por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos. Se priorizará a aquellas que ostenten condición de madres cabeza de familia.</p> <p>Las Unidades Agrícolas Familiares sobre tierras baldías se adjudicarán conjuntamente a los cónyuges o compañeros permanentes, siempre que hayan cumplido dieciséis años de edad, sean jefes de familia, compartan entre sí las responsabilidades sobre sus hijos menores, o con sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad si velaren por ellos.</p> <p>Los adjudicatarios podrán contraer las obligaciones inherentes sin necesidad de autorización judicial. Esta disposición se aplicará a todas las adjudicaciones o adquisiciones de tierras que llegaren a hacerse en favor de los campesinos, o para la admisión de estos como socios de las empresas comunitarias o cooperativas rurales.</p> <p>PARÁGRAFO. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o quien haga sus veces, tendrá un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para reglamentar los términos de pobreza y marginalidad que definan los criterios de elegibilidad de las mujeres beneficiarias de la adjudicación de baldíos de reforma agraria, conforme lo dispone el Decreto número <u>902</u> de 2017 o la norma que lo reemplace o sustituya.</p>

<p>LEY 1900 DE 2018 ARTÍCULO 6o. Conforme lo dispuesto por el Decreto número 1934 de 2015 o la norma que lo reemplace o sustituya, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, definirán los criterios de asignación del subsidio.</p> <p>Para tal efecto, en los criterios de clasificación previstos en el artículo 2.2.1.5.2.1 Preselección y Selección de Postulantes del Decreto número 1071 de 2015 o la norma que lo reemplace o sustituya, los hogares postulantes con jefatura de hogar femenina recibirán el valor máximo de calificación por cada criterio establecido.</p> <p>LEY 1900 DE 2018 ARTÍCULO 7o. Adiciónese el literal 10 al artículo 2.2.1.1.6. del Decreto número 1071 de 2015. Hogares susceptibles de postulación:</p> <p>10. Los hogares con jefatura femenina.</p> <p>LEY 1900 DE 2018 ARTÍCULO 8o. La Nación a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o quien haga sus veces y las entidades que favorecen la actividad rural, aplicarán el enfoque diferencial de género en la asignación de los recursos que cada año se destinen para proyectos productivos por parte de los diferentes fondos, planes, o programas.</p> <p>Para efectos de garantizar el acceso mayoritario y progresivo de las mujeres rurales en los recursos destinados para los proyectos productivos rurales, será obligatoria la aplicación de lo previsto en el artículo 2o de la presente ley.</p> <p>PARÁGRAFO. Para el caso de los proyectos productivos de los que trata el presente artículo, se reconocerán las actividades adelantadas por las mujeres bajo la denominación de economía del cuidado, conforme lo define la Ley 1413 de 2010 y que se configuran como un hecho positivo constitutivo de ocupación o posesión según el artículo 9o del Decreto número 902 de 2017.</p> <p>LEY 1900 DE 2018 ARTÍCULO 9o. Para el cumplimiento de la presente ley, el Gobierno nacional deberá desarrollar un programa de acompañamiento en orientación y capacitación en conjunto con el Sena y el Ministerio de Educación, para que las mujeres beneficiarias de esta medida puedan hacer un uso eficiente de los recursos a los que acceden y de las tierras baldías adjudicadas, con el fin de impulsar sus proyectos productivos. El acceso a estos programas será gratuito y deberá garantizarse el cupo de todas las mujeres beneficiarias de la ley.</p>	<p style="text-align: center;">TITULO VI</p> <p style="text-align: center;">PARTICIPACION POLITICA Y EN NIVELES DECISORIOS DEL PODER PUBLICO</p> <p style="text-align: center;">POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA ADECUADA Y EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS NIVELES DECISORIOS DE LAS DIFERENTES RAMAS Y ORGANOS DEL PODER PÚBLICO (Ley 581 de 2000)</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 1. FINALIDAD. La presente ley crea los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y además promuevan esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 2. CONCEPTO DE MAXIMO NIVEL DECISORIO. Para los efectos de esta ley, entiéndase como "máximo nivel decisorio", el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 3. CONCEPTO DE OTROS NIVELES DECISORIOS. Entiéndase para los efectos de esta ley, por "otros niveles decisorios" los que correspondan a cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público, diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 4o. PARTICIPACION EFECTIVA DE LA MUJER. La participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas:</p> <p>a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2o., serán desempeñados por mujeres;</p> <p>b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3o., serán desempeñados por mujeres.</p> <p>PARAGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en el</p>
<p>ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 5. EXCEPCION. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplica a los cargos pertenecientes a la carrera administrativa, judicial u otras carreras especiales, en las que el ingreso, permanencia y ascenso se basan exclusivamente en el mérito, sin perjuicio de lo establecido al respecto en el artículo 7o. de esta ley.</p> <p>Tampoco se aplica a la provisión de los cargos de elección y a los que se proveen por el sistema de ternas o listas, los cuales se gobiernan por el artículo 6o. de esta ley.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 6. NOMBRAMIENTO POR SISTEMA DE TERNAS Y LISTAS. Para el nombramiento en los cargos que deban proveerse por el sistema de ternas, se deberá incluir, en su integración, por lo menos el nombre de una mujer.</p> <p>Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, quien las elabore incluirá hombres y mujeres en igual proporción.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 7. PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE SELECCION. En los casos de ingreso y ascenso en la carrera administrativa o en cualquiera de los sistemas especiales de carrera de la administración pública, en los que la selección se realice mediante concurso de méritos y calificación de pruebas, será obligatoria la participación de hombres y mujeres en igual proporción, como integrantes de las autoridades encargadas de efectuar la calificación.</p> <p>Para establecer la paridad, se nombrarán calificadores temporales o ad hoc, si fuere necesario</p> <p>PARAGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en el presente artículo, será sancionado en los términos previstos en el parágrafo único del artículo 4o. de la presente ley.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 8. INFORMACION SOBRE OPORTUNIDADES DE TRABAJO. El Departamento Administrativo de la Función Pública, enviará a las Instituciones de Educación Superior información sobre los cargos a proveer en la Administración Pública y los requisitos exigidos para desempeñarlos.</p> <p>Periódicamente deberá actualizar esta información, de acuerdo con las oportunidades de vinculación que se vayan presentando.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 9o. PROMOCION DE LA PARTICIPACION FEMENINA EN EL SECTOR PRIVADO. La Presidencia de la República, en cabeza de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Educación Nacional, los gobernadores, alcaldes y demás autoridades del orden nacional, departamental, regional, provincial, municipal y distrital, desarrollarán medidas tendientes a promover la participación de las mujeres en todas las instancias de decisión de la sociedad civil.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 10. INSTRUMENTOS BÁSICOS DEL PLAN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y ESTÍMULO A LA MUJER. El plan deberá contener como instrumento básico, de carácter obligatorio, para alcanzar los objetivos mencionados, los siguientes:</p>	<p>a) Educación a los colombianos en la igualdad de sexos y promoción de los valores de la mujer;</p> <p>b) Acciones positivas orientadas a la comprensión y superación de los obstáculos que dificultan la participación de la mujer en los niveles de decisión del sector privado;</p> <p>c) Capacitación especializada de la mujer en el desarrollo del liderazgo con responsabilidad social y dimensión del género;</p> <p>d) Disposición de canales efectivos de asistencia técnica;</p> <p>e) Divulgación permanente de los derechos de la mujer, mecanismos de protección e instrumentos adecuados para hacerlos efectivos.</p> <p>PARAGRAFO. Para el desarrollo de los instrumentos contemplados en los literales a) y e), el plan deberá adoptar medidas orientadas a mejorar la calidad de la educación, mediante contenidos y prácticas no sexistas, que promuevan la formación de hombres y mujeres para compartir tareas de hogar y crianza; así mismo, se dará especial atención a los programas de alfabetización dirigidos a la población femenina.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 11. PLANES REGIONALES DE PROMOCION Y ESTIMULO A LA MUJER. Los gobernadores y alcaldes prepararán planes departamentales, municipales y distritales de promoción y estímulo a la mujer, que deberán ser presentados ante la corporación administrativa de elección popular correspondiente, a fin de obtener su aprobación.</p> <p>Estos planes se regirán en su formación, adopción, desarrollo y cómputo de plazos, por las disposiciones de la presente ley.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 12. INFORMES DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO. Con el fin de evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Promoción y Estímulo a la Mujer, el Consejo Superior de la Judicatura, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Dirección Administrativa del Congreso de la República, presentarán al Congreso, al Procurador General de la Nación, antes del 31 de diciembre de cada año, un informe sobre la provisión de cargos, el porcentaje de participación de las mujeres en cada rama y órgano de la administración pública.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 13. REPRESENTACION EN EL EXTERIOR. El Gobierno y el Congreso de la República, deberán incluir mujeres en las delegaciones de colombianos que en comisiones oficiales atiendan conferencias diplomáticas, reuniones, foros internacionales, comités de expertos y eventos de naturaleza similar.</p> <p>Así mismo, asegurarán la participación de mujeres en los cursos y seminarios de capacitación que se ofrezcan en el exterior a los servidores públicos colombianos en las diferentes áreas.</p> <p>PARAGRAFO. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 14. IGUALDAD DE REMUNERACION. El Gobierno, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás autoridades vigilarán el cumplimiento de la legislación que establece igualdad de condiciones laborales, con especial cuidado a que se haga efectivo el principio de igual remuneración para trabajo igual.</p>

<p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 15. APOYO A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. El Gobierno promoverá y fortalecerá las Entidades No Gubernamentales con trayectoria en el trabajo, por los derechos y promoción de la mujer.</p> <p>LEY 581 DE 2000 ARTICULO 16. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY. El Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, velarán por el estricto cumplimiento de esta ley.</p> <p style="text-align: center;">COMISIÓN PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER EN LOS CONCEJOS Y ASAMBLEAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. (Ley 1981 de 2019)</p> <p>LEY 1981 DE 2019 ARTÍCULO 1o. Adiciónese un nuevo inciso al artículo 25 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 25. Comisiones. Los concejos integrarán comisiones permanentes encargadas de rendir informe para primer debate a los proyectos de acuerdo, según los asuntos o negocios de que estas conozcan y el contenido del proyecto acorde con su propio reglamento. Si dichas comisiones no se hubieren creado o integrado, los informes se rendirán por las Comisiones Accidentales que la Mesa Directiva nombre para tal efecto.</p> <p>Todo concejal deberá hacer parte de una comisión permanente y en ningún caso podrán pertenecer a dos o más comisiones permanentes.</p> <p>Además de las Comisiones Permanentes, con el objeto de fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control político, los concejos municipales crearán la Comisión para la Equidad de la Mujer, la cual tendrá como funciones además de las que el Concejo delegue, dictar su propio reglamento, ejercer el control político así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de género, promover la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y de designación, ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres, al igual que fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes. De igual manera esta Comisión podrá hacer seguimiento a los procesos de verdad, justicia y reparación para los delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interno en sus territorios, a los que haya lugar.</p> <p>Para la conformación se tendrá en cuenta a todas las mujeres cabildantes de la Corporación respectiva de igual forma la participación voluntaria y optativa de los hombres concejales.</p> <p>LEY 1981 DE 2019 ARTÍCULO 2o. Adiciónese un nuevo inciso al artículo 19 del Decreto Ley 1421 de 1993, el cual quedará así:</p>	<p>Artículo 19. El Concejo creará las comisiones que requiera para decidir sobre los proyectos de acuerdo en primer debate y para despachar otros asuntos de su competencia.</p> <p>Todos los concejales deberán hacer parte de una comisión permanente. Ningún concejal podrá pertenecer a más de una comisión.</p> <p>Además de las Comisiones Permanentes, el Concejo de Bogotá con el objeto de fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control político, crearán la Comisión para la Equidad de la Mujer, la cual tendrá como funciones además de las que el Concejo del Distrito delegue, dictar su propio reglamento, ejercer control político, así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de género, promover la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y de designación, ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres, al igual que fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes. De igual manera esta Comisión podrá hacer seguimiento a los procesos de verdad, justicia y reparación para los delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interno en el Distrito Capital.</p> <p>Para la conformación se tendrá en cuenta a todas las mujeres cabildantes del Concejo de Bogotá, de igual forma la participación voluntaria y optativa de los hombres concejales.</p> <p>LEY 1981 DE 2019 ARTÍCULO 3o. Adiciónese un nuevo inciso al artículo 36 del Decreto 1222 de 1986, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 36. Las Asambleas deberán integrar comisiones encargadas de dar informes para segundo y tercer debate a los proyectos de ordenanza, según los asuntos o negocios de que dichas comisiones conozcan y el contenido del proyecto.</p> <p>Ningún Diputado podrá pertenecer a más de dos (2) comisiones permanentes y obligatoriamente deberá ser miembro de una.</p> <p>Además de las Comisiones Permanentes, las Asambleas con el objeto de fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control político, las Asambleas Departamentales crearán la Comisión para la Equidad de la Mujer, la cual tendrá como funciones además de las que la Asamblea delegue, dictar su propio reglamento, ejercer control político, así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de género, promover la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y de designación, ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres, al igual que fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes. De igual manera esta Comisión podrá hacer seguimiento a los procesos de verdad, justicia y reparación para los delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interno en su departamento.</p>
<p>Para la conformación se tendrá en cuenta a todas las mujeres cabildantes de la Corporación respectiva de igual forma la participación voluntaria y optativa de los hombres diputados.</p> <p style="text-align: center;">TITULO VII</p> <p style="text-align: center;">DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS</p> <p>ARTÍCULO 10. DEFINICIÓN: Los derechos sexuales son derechos humanos fundamentales y universales que reconocen y protegen la facultad de las personas, hombres y mujeres, de tomar decisiones libres sobre su sexualidad y su reproducción.</p> <p>ARTÍCULO 11. SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA: Es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y el sistema reproductivo.</p> <p>ARTÍCULO 12. OBJETIVO: Garantizar un estado de bienestar físico, mental y social de la mujer en todos los aspectos relacionados con su sistema reproductivo, sus funciones y procesos como también la capacidad de disfrutar de una vida sexual libre de todo tipo de discriminación, violencia física o psíquica, abuso, agresión o coerción.</p> <p>El Estado y la sociedad no podrán implantar restricciones injustificadas en contra de las determinaciones adoptadas por cada persona en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.</p> <p>ARTÍCULO 13. DERECHOS SEXUALES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Todo individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto y la expresión emocional siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de otros. 2. Todo individuo tiene derecho a la intimidad, a la privacidad sexual y a la libertad de pensamiento. 3. Todo individuo tiene derecho a decidir autónomamente a tener o no relaciones sexuales. 4. Todo individuo tiene derecho a disponer de información y educación adecuada sobre los distintos aspectos de la sexualidad humana. Este derecho implica que la información sexual debe ser generada a través de la investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión apropiada en todos los niveles sociales. 5. Todo individuo tiene derecho al acceso de de forma gratuita, libre e informada a todos los servicios de salud sexual, así como la potestad de elegir de forma libre sobre los métodos de anticoncepción. La atención de la salud sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas sexuales tales como infecciones del aparato reproductor, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, cáncer entre otros. 6. La mujer y el hombre tienen derecho a decidir libremente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, así como a acceder a la información, a la educación y a los medios que les permitan ejercer ese derecho por vía natural o por procedimientos asistidos científicamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Derecho a recibir servicios adecuados de atención en salud que garanticen embarazos y partos sin riesgos e hijos sanos, abarcando la atención prenatal el parto y el post-parto, interrupción involuntaria del embarazo, prevención de aborto y el tratamiento de sus consecuencias. <p>ARTICULO 14 DEBERES DEL ESTADO: El Estado garantizará y promoverá las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Las políticas públicas de salud sexual y reproductiva y los programas se diseñarán en consonancia con los principios y normas que se establecen en este capítulo.</p> <p>ARTICULO 15. Las políticas y programas de salud sexual y reproductiva tendrán los siguientes objetivos generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantizar la universalidad de la cobertura en salud sexual y reproductiva, bajo los principios de calidad y oportunidad de la prestación de los servicios de salud. 2. Garantizar la calidad, confidencialidad y privacidad de las mujeres 3. Adoptar la perspectiva de género en la prestación de los servicios: Los Prestado de salud deberán incluir en la prestación de los servicios la perspectiva de género, garantizando la adopción de decisiones libres por parte de las usuarias. La formación adecuada de los recursos humanos de la salud tanto en aspectos técnicos y de información como en habilidades para la comunicación y trato; 4. Asegurar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas en cualquier procedimiento de salud. 5. Promover en la población la adopción de medidas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. <p>ARTICULO 16. Son objetivos específicos de las políticas y programas de salud sexual y reproductiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Difundir y proteger los derechos de las mujeres en materia de información y servicios de salud sexual y reproductiva. 2. Proteger la privacidad de las personas, en los asuntos relacionados con la vivencia de la sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a través de mecanismos que aseguren la confidencialidad y la integridad física y psicológica, así como el establecimiento de vínculos de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del sector salud. 3. Prevenir la mortalidad materna y sus causas 4. Promover el parto humanizado garantizando la intimidad y privacidad; respetando el tiempo biológico y psicológico y las pautas culturales de la mujer y evitando prácticas invasiva o suministro de medicación que no estén justificados o informados a la paciente de forma previa. 5. Promover la maternidad y paternidad responsable y la accesibilidad a su planificación. 6. Garantizar el acceso universal a diversos métodos anticonceptivos seguros y confiables. 7. Garantizar el acceso efectivo la gratuidad y promoción de la anticoncepción quirúrgica, (la ligadura de trompas de Falopio y la vasectomía)

8. Fortalecer las prestaciones de salud mental desde la perspectiva del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia física, psicológica, sexual y las conductas discriminatorias;
9. Promover la prevención primaria y detección temprana del cáncer que afecta la salud sexual y reproductiva garantizando los tratamientos oportunos, continuos, pertinentes y seguros que mejoren la calidad de vida.
10. Prevenir y reducir el daño de las infecciones de transmisión sexual;
11. Prevenir y reducir el daño de los efectos del consumo de sustancias adictivas legales e ilegales.

ARTICULO 17. Para el cumplimiento de los objetivos contemplados en la presente ley, corresponde al Ministerio de Salud:

1. Dictar normas específicas para la atención integral de la salud sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes y capacitar los recursos humanos para los servicios correspondientes.
2. Impulsar campañas de promoción del ejercicio saludable y responsable de los derechos sexuales y reproductivos.
3. Implementar acciones de vigilancia y control de la gestión sanitaria en salud sexual y reproductiva en el nivel local y nacional.
4. Desarrollar acciones de vigilancia epidemiológica de los eventos que afectan la salud sexual y reproductiva.
5. Fortalecer el sistema de información sanitario como herramienta para conocer el desarrollo nacional de la salud sexual y reproductiva de la población.
6. Promover la investigación en salud sexual y reproductiva como insumo para la toma de decisiones políticas y técnicas.
7. Promover la captación precoz de las embarazadas para el control de sus condiciones de salud;
8. Garantizar e implementar en todo el territorio nacional la normativa sanitaria vigente acerca de la atención integral en los casos de embarazo no deseado-no aceptado, denominada "Asesoramiento para la maternidad segura, medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo";
9. Dictar normas que incluyan el enfoque de derechos sexuales y reproductivos para el seguimiento del embarazo, parto, puerperio y etapa neonatal;
10. Promover la investigación y sistematización sobre las principales causas de mortalidad materna, incluidos los motivos de la decisión voluntaria de interrupción del embarazo y métodos utilizados para concretarla.
11. Brindar información suficiente sobre el trabajo de parto, parto y post parto, de modo que la mujer pueda elegir las intervenciones médicas si existieren distintas alternativas.
12. Promover la participación comprometida de los hombres en la prevención de la salud de las mujeres, así como en la maternidad y paternidad responsables
13. Promover cambios en el sistema de salud que faciliten a los hombres vivir plenamente y con responsabilidad su sexualidad y reproducción.
14. Apoyar a las parejas y personas en el logro de sus metas en materia de sexualidad y reproducción, contribuyendo al ejercicio del derecho a decidir el número de hijos y el momento oportuno para tenerlos.

15. Protocolizar la atención sanitaria en materia de anticoncepción e infertilidad.
16. Protocolizar y brindar atención integral de calidad y derivación oportuna a las personas de cualquier edad que sufran violencia física, psicológica o sexual.
17. Detectar la incidencia en la mortalidad materna de la violencia física, psicológica y sexual, a los efectos de fijar metas para su disminución.
18. Incorporar a la historia clínica indicadores para detectar situaciones de violencia física, psicológica o sexual.
19. Impulsar campañas educativas de prevención de las enfermedades crónicas degenerativas de origen génito-reproductivo desde la perspectiva de la salud sexual y reproductiva.
20. Dictar normas para la atención integral de la salud de hombres y mujeres en la etapa de la perimenopausia, incorporando la perspectiva de género y los derechos sexuales y reproductivos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y disminuir la mortalidad vinculada a patologías derivadas de esta etapa del ciclo vital.
21. Promover en todos los servicios de salud sexual y reproductiva la educación, información y orientación sobre los comportamientos sexuales responsables y los métodos eficaces de prevención de las infecciones de transmisión sexual en todas las etapas etarias;
22. Proporcionar a las mujeres desde antes de la edad reproductiva la información y los tratamientos necesarios para evitar la transmisión de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en situaciones de embarazo y parto;
23. Impulsar campañas educativas que combatan la discriminación hacia las personas que conviven con enfermedades de transmisión sexual, y proteger sus derechos individuales, incluyendo el derecho a la confidencialidad
24. Investigar y difundir los resultados sobre la incidencia y mecanismos de transmisión del VIH-SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en diferentes grupos poblacionales, incluidos los recién nacidos, con miras a focalizar las acciones de autocuidado específicas.

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE FORMA GRATUITA Y SE PROMUEVE LA LIGADURA DE CONDUCTOS DEFERENTES O VASECTOMÍA Y LA LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y LA MATERNIDAD RESPONSABLE. (LEY 1412 DE 2010)

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 1o. LA PATERNIDAD Y LA MATERNIDAD RESPONSABLES SON UN DERECHO Y UN DEBER CIUDADANO. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos que conformarán la familia. La progeneración responsable, se considera una actitud positiva frente a la sociedad, y como tal será reconocida, facilitada y estimulada por las autoridades.

TÍTULO II.

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 2o. GRATUIDAD. El Estado garantiza de manera gratuita la práctica de la vasectomía o ligadura de trompas.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 3o. FINANCIACIÓN Y CUBRIMIENTO. El sistema de seguridad social en salud, será el encargado de que esas prácticas quirúrgicas (vasectomía y ligadura de trompas) sean cubiertas de manera gratuita, a todos los sectores de la población que así lo soliciten.

Las IPS públicas o privadas que atiendan la población que no se encuentre afiliada a ninguno de los dos regímenes de salud vigentes (vinculados), realizarán los recobros a la subcuenta de prevención y promoción del FOSYGA

ARTICULO 18. EL ARTÍCULO 4. LEY 1412 DE 2010 QUEDARA ASI: SOLICITUD ESCRITA. Las personas que quieran realizarse esas prácticas quirúrgicas deberán solicitarlo por escrito a la respectiva entidad. Será suficiente el diligenciamiento de la solicitud expresa de la voluntad de realizarse el procedimiento para que la persona tenga derecho a acceder al procedimiento quirúrgico.

Las IPS públicas o privadas autorizadas para realizar la vasectomía o ligadura de trompas, eliminarán toda barrera o demora injustificada que tenga por objeto o resultado anular el derecho establecido en la presente Ley.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 5o. DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CUALIFICADO. Los médicos encargados de realizar la operación respectiva deben informar al paciente la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos sobre la salud de la práctica realizada, así como las alternativas de utilización de otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos.

Cuando las personas tengan limitaciones de lectoescritura, las EPS, del régimen contributivo o subsidiado a las IPS, públicas o privadas, según la práctica médica, deberán ofrecer al paciente medios alternativos para expresar su voluntad tanto para la solicitud escrita como para el consentimiento informado.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 7o. PROHIBICIÓN. En ningún caso se permite la práctica de la anticoncepción quirúrgica a menores de edad.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 8o. RECUPERACIÓN DEL PACIENTE. Las personas que se someten a estas prácticas quirúrgicas tendrán derecho a recibir incapacidad laboral, en los términos y condiciones dispuestas por el médico tratante, garantizando la recuperación en la salud del paciente.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 9o. REGISTRO. Las Secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales llevarán el registro de todas las operaciones realizadas en desarrollo de las prácticas quirúrgicas autorizadas por esta ley, que a su vez remitirán al Ministerio de la Protección Social quien llevará un registro nacional.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 10. DIVULGACIÓN. Las Secretarías de Salud departamentales, distritales y Municipales y el Ministerio de la Protección Social se encargarán de divulgar entre la población a través de campañas educativas, los

beneficios, implicaciones y efectos de la anticoncepción quirúrgica, así como los demás métodos de anticoncepción no quirúrgicos.

TÍTULO III.

DEFINICIONES.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 11. ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA. Se entiende por anticoncepción quirúrgica el procedimiento médico – quirúrgico tendiente a evitar la concepción a través de la vasectomía o ligadura de trompas.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 12. LIGADURA DE TROMPAS. Es la operación consistente en ligar las trompas de Falopio, las cuales son cortadas y selladas para evitar que el espermatozoide llegue al óvulo.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 13. VASECTOMÍA. Es la operación dirigida a cortar y ligar los vasos o conductos deferentes para obstruir el circuito y paso normal de los espermatozoides.

TÍTULO IV.

DISPOSICIONES FINALES.

LEY 1412 DE 2010 ARTÍCULO 14. La presente ley será divulgada de manera constante a través de los miembros de comunicación del Estado, tanto por el Gobierno Nacional como por las administraciones seccionales o locales respectivas y se promoverá a través del Ministerio de la Protección Social, las Secretarías de Salud Territoriales y las EPS del régimen subsidiado y contributivo, de manera que se dé información detallada sobre el procedimiento quirúrgico mostrando sus beneficios y características.

ARTÍCULO 19. ADICIÓN A LA LEY 1412 DE 2010 EL SIGUIENTE ARTÍCULO: PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. Cuando no se pueda conocer la decisión de la persona con discapacidad, se recurrirá a lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019 para efectos de determinar su voluntad.

ARTÍCULO 20. ADICIÓN A LA LEY 1412 DE 2010 EL SIGUIENTE ARTÍCULO: ATENCIÓN A POBLACIÓN RURAL. Se garantizará la atención a población rural para la práctica de las cirugías de ligadura de trompas y vasectomías en los municipios de segunda a sexta categoría. El Gobierno Nacional deberá generar mecanismos que garanticen lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 21. INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL. La inspección, seguimiento, vigilancia y control de lo dispuesto en la presente Ley serán responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y las Secretarías de Salud.

<p style="text-align: center;">GESTION MENSTRUAL</p> <p>ARTICULO 22. CONDICIONES DIGNAS PARA LA GESTIÓN MENSTRUAL: El Estado garantizará como derecho el acceso efectivo y gratuito a productos de gestión menstrual y garantizará el suministro efectivo, gratuito e irrestricto de tales elementos para las adolescentes, jóvenes y adultas en el territorio nacional, que como consecuencia de su condición económica, social, territorial o cultural no puedan acceder a los productos adecuados para el manejo de la higiene menstrual.</p> <p>ARTÍCULO 23: Toda persona menstruante tiene derecho a elegir y acceder al tipo de producto que mejor se ajuste a sus necesidades.</p> <p>ARTÍCULO 24: PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN MENSTRUAL. Compréndase dentro de los productos de gestión menstrual: tampones, copas menstruales y toallas higiénicas. El Ministerio de Salud podrá incorporar nuevas tecnologías de gestión menstrual.</p> <p>ARTÍCULO 24: SON FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantizar el acceso de las mujeres en condición de vulnerabilidad de forma permanente a los productos de gestión menstrual en condiciones de seguridad, salubridad e higiene. 2. Proveer información veraz, detallada, eficaz y suficiente basada en evidencia científica de acuerdo a la variedad de productos de gestión menstrual existentes, junto con los productos. 3. Garantizar educación de calidad para las niñas y adolescentes, que incluya información oportuna sobre su ciclo menstrual. 4. Promover campañas con el fin de desestigmatizar la menstruación y eliminar los estereotipos y prejuicios de género que refuerzan la discriminación hacia las mujeres. 5. Categorizar a los productos para la gestión menstrual como insumos básicos y necesarios, que contribuyen a la protección de la salud de toda persona menstruante. <p>PARRAGRAFO. En el término de un (1) año el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deberán crear las estrategias necesarias para reducir el índice de deserción y ausentismo escolar de niñas y adolescentes por falta de acceso a los productos de gestión menstrual.</p>	<p style="text-align: center;">TITULO VIII</p> <p style="text-align: center;">HERRAMIENTAS METODOLOGICAS</p> <p style="text-align: center;">OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE GÉNERO CON CARÁCTER PERMANENTE (Ley 1009 de 2006)</p> <p>LEY 1009 DE 2006 ARTÍCULO 1. OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE GÉNERO, OAG. Créase con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género, OAG, el cual estará a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer o de la entidad rectora de la política pública para el adelanto de la mujer y la equidad de género.</p> <p>El OAG tiene por objeto identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los programas, las normas, la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia.</p> <p>LEY 1009 DE 2006 ARTÍCULO 2. DE LAS FUNCIONES DEL OAG. Son funciones generales del OAG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Investigar, documentar, sistematizar, analizar y generar información sobre la situación de las mujeres y la equidad de género en Colombia. 2.2 Divulgar a nivel internacional, nacional y territorial la información recogida, analizada y generada por el OAG. 2.3 Contribuir al fortalecimiento institucional de la equidad de género en Colombia y de la entidad encargada de la dirección de las políticas de equidad para las mujeres. 2.4 Formular recomendaciones en materia de políticas, planes, programas, proyectos y normas, que contribuyan a cerrar las brechas de equidad de género en el país. <p>LEY 1009 DE 2006 ARTÍCULO 3. SON FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL OAG.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Actuar como órgano permanente de recolección y sistematización de información cuantitativa y cualitativa de las diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la situación de las mujeres en Colombia y la equidad de género, teniendo en cuenta aspectos estadísticos, normativos, jurisprudenciales y administrativos (políticas, planes, proyectos y programas). 3.2 Recibir, sistematizar y procesar la información secundaria desagregada por sexo, edad, condición socioeconómica, ubicación territorial (rural/urbano) y etnia, y la información cuantitativa y cualitativa relacionada con las políticas, los programas, los planes, los proyectos, las normas, y la jurisprudencia de las entidades del orden nacional, departamental, municipal y distrital.
<ol style="list-style-type: none"> 3.3. Alimentar el sistema de información que contiene indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento a políticas, planes, programas, proyectos, normas, estadísticas, indicadores y jurisprudencia. 3.4 Estudiar y hacer reflexiones críticas sobre la información recogida. 3.5 Divulgar la información recolectada y los análisis elaborados y mantener disponible para los ciudadanos a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer o de la entidad que haga sus veces, un sistema de información ciudadana sobre asuntos de género. 3.6 Formular a través de la Consejería para la Equidad de la Mujer o de la entidad rectora de la política pública para las mujeres en Colombia, recomendaciones y propuestas tendientes a mejorar los indicadores y sistemas de información que contribuyan a superar la inequidad de género. 3.7. Coordinar con las distintas instancias del Estado a nivel nacional y territorial, las medidas administrativas que se deben tomar para la recolección de información interna y posterior sistematización de los asuntos de género de cada entidad. 3.8. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico de la situación de las mujeres en Colombia, que deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo de las políticas públicas. 3.9 Las demás que le señale el reglamento del OAG. <p>LEY 1009 DE 2006 ARTÍCULO 4. COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL OAG. La orientación del OAG estará a cargo de un Comité Interinstitucional, integrado por:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1 La Consejera Presidencial Para la Equidad de la Mujer o su delegado/a, quien lo presidirá. 4.2 El/la Ministro/a de la Protección Social, Interior y de Justicia, Agricultura o su delegado/a. 4.3 El/la Director/a del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, DNP o su delegado/a. 4.4 El/la Director/a del Departamento Administrativo de Estadística, DANE o su delegado/a. 4.5 El/la Director/a del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF o su delegado/a. 4.6 El/la Procurador/a Delegada para la Niñez y la Familia o su delegado/a. 4.7 El/la Defensor/a Delegada para los derechos de la mujer y el anciano o su delegado/a. 	<ol style="list-style-type: none"> 4.8 Un representante de la Academia. 4.9. El/la directora/a o quien haga sus veces, de alguna organización o asociación representativa de mujeres con amplia trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. <p>El Comité Interinstitucional estará encargado de realizar las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Velar por el cumplimiento de los objetivos del OAG; b) Acordar mecanismos generales para la ejecución de las funciones asignadas al OAG; c) Tomar las decisiones operativas necesarias para el desarrollo de las funciones; d) Diseñar su propio plan de acción y dictar su reglamento interno, y e) Las demás que le señale el reglamento. <p>LEY 1009 DE 2006 ARTÍCULO 5. FUNCIONAMIENTO DEL OAG. La creación permanente del OAG no implicará, crear, suprimir o fusionar dependencias dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ni afectar la planta global del mismo.</p> <p>LEY 1009 DE 2006 ARTÍCULO 6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento Nacional de Planeación, y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, adelantarán gestiones para obtener el apoyo técnico y financiero de las agencias de cooperación internacional para la implementación y ejecución del OAG.</p> <p>LEY 1009 DE 2006 ARTÍCULO 7. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES. Las entidades del orden nacional, departamental, municipal y distrital deberán suministrar al OAG, la información secundaria desagregada por sexo, edad, condición socioeconómica, ubicación territorial (rural/urbano) y etnia; y, la información cuantitativa y cualitativa relacionada con las políticas, los programas, los planes, los proyectos, las normas y la jurisprudencia que se relacionen con la entidad. Además de la información cuantitativa y cualitativa de mujeres vinculadas a las entidades del orden nacional o territorial según sea el caso y los niveles de decisión en los cuales se ubican en la estructura organizativa de cada entidad.</p> <p>Para el cumplimiento de este fin, las entidades designarán a un funcionario responsable del suministro de la información.</p> <p>PARRAGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente.</p>

LEY 1009 DE 2006 ARTÍCULO 8. APLICACIÓN Y DESARROLLO. El Gobierno Nacional expedirá las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley con el acompañamiento y asesoría del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer o la entidad que haga sus veces.

LEY 1009 DE 2006 ARTÍCULO 9. CONTROL Y SEGUIMIENTO. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, o la entidad responsable de las políticas de equidad para las mujeres, hará el seguimiento, control y evaluación del OAG.

INCLUSIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CUIDADO EN EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES CON EL OBJETO DE MEDIR LA CONTRIBUCIÓN DE LA MUJER AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS Y COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. (Ley 1413 DE 2010)

LEY 1413 DE 2010 ARTÍCULO 1. OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto incluir la economía del cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.

LEY 1413 DE 2010 ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación de la presente ley se adoptan las siguientes definiciones:

Economía del Cuidado: Hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de trabajo es de fundamental importancia económica en una sociedad.

Trabajo de Hogar no Remunerado: Servicios domésticos, personales y de cuidados generados y consumidos dentro del propio hogar por las que no se percibe retribución económica directa.

Encuesta de Uso del Tiempo: Instrumento metodológico que permite medir el tiempo dedicado por las personas a las diferentes actividades, trabajo remunerado y no remunerado, estudio, recreación y ocio, entre otros.

Cuenta Satélite: Cuenta específica del Sistema de Cuentas Nacionales que organiza y registra la información de un sector económico o social, en este caso del trabajo en los hogares.

LEY 1413 DE 2010 ARTÍCULO 3. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. Se consideran Actividades de Trabajo de Hogar y de Cuidado No Remunerado, entre otras, las siguientes:

1. Organización, distribución y supervisión de tareas domésticas.
2. Preparación de Alimentos.
3. Limpieza y mantenimiento de vivienda y enseres.
4. Limpieza y mantenimiento del vestido.
5. Cuidado, formación e instrucción de los niños (traslado al colegio y ayuda al desarrollo de tareas escolares).
6. El cuidado de ancianos y enfermos.
7. Realizar las compras, pagos o trámites relacionados con el hogar.
8. Reparaciones al interior del hogar.
9. Servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes, amigos y vecinos.

La presente clasificación no excluye otras actividades que se puedan incorporar en su oportunidad.

LEY 1413 DE 2010 ARTÍCULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, es la autoridad responsable de coordinar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

Para ello deberá establecer los mecanismos y realizar las gestiones necesarias para planear, diseñar, aplicar y actualizar una Encuesta de Uso del Tiempo, instrumento indispensable para obtener la información sobre Trabajo de Hogar No Remunerado.

El Gobierno Nacional, en cabeza del DANE, integrará una Comisión Multisectorial que definirá la forma de inclusión de la información sobre trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales. Lo anterior se hará a través de la creación de una Cuenta Satélite adscrita al sector correspondiente o como se estime conveniente para el objeto de la ley.

El concepto de la comisión multisectorial tiene carácter vinculante y dará lugar a los trámites administrativos y contables necesarios para la inclusión del trabajo de hogar no remunerado en las Cuentas Nacionales.

LEY 1413 DE 2010 ARTÍCULO 5. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY. El DANE, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con sus competencias, en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, iniciarán el proceso de adecuación de procedimientos y gestiones necesarias para planear, diseñar y definir técnica, conceptual y metodológicamente la encuesta de uso del tiempo y la inclusión de sus resultados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

PARÁGRAFO 1o. La aplicación de la Encuesta de Uso del Tiempo, no podrá superar los tres (3) años contados a partir de la vigencia de la ley.

PARÁGRAFO 2o. Una vez aplicada la Encuesta de Uso del Tiempo se deberá garantizar su actualización de manera continua conforme con el período de tiempo que defina el DANE como autoridad responsable. En todo caso este período no podrá ser superior a los tres (3) años entre una y otra medición.

LEY 1413 DE 2010 ARTÍCULO 6. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL. La Consejería Presidencial para la Equidad de Género coordinará una mesa de trabajo con la participación de los entes de control, la academia y las organizaciones sociales con el objeto de hacer seguimiento y coadyuvar al proceso de implementación de la Encuesta de Uso de Tiempo.

El DANE presentará a la mesa de trabajo informes semestrales de avance que den cuenta de las labores que se adelantan para dar cumplimiento a la ley.

LEY 1413 DE 2010 ARTÍCULO 7. USO DE LA INFORMACIÓN. El Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Banco de la República, la Contaduría Nacional, la Contraloría General de la República y los demás entes gubernamentales que participan en la preparación, seguimiento y control del presupuesto y estudio de la economía nacional, deberán incluir dentro de sus análisis el Trabajo de Hogar no remunerado como contribución al desarrollo económico del país.

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 25. El Gobierno Nacional en cabeza del Consejo Nacional para la Gestión y Desempeño Institucional, o quien haga sus veces creará el Decreto Único en materia de mujer, en el cual se encontrarán las disposiciones que reglamentan las leyes contenidas en el presente código.

ARTÍCULO 26 VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de su publicación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,



GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO

Representante a la Cámara por Cundinamarca
Congreso de la República de Colombia

**PROYECTO DE LEY NÚMERO 197 DE 2021
CÁMARA**

por medio de la cual se modifica la Ley 1819 de 2016 “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” en cuanto al Impuesto Nacional al Carbono y se dictan otras disposiciones.

**“El Congreso de Colombia,
Decreta”:**

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 222 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así:

ARTÍCULO 222. BASE GRAVABLE Y TARIFA. El Impuesto al Carbono tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión de dióxido de carbono (CO₂) para cada combustible fósil determinado, expresado en unidad de volumen (kilogramo de CO₂) por unidad energética (Terajouls) de acuerdo con el volumen o peso del combustible. La tarifa corresponderá a diecisiete mil seiscientos sesenta pesos (\$17.660) por tonelada de CO₂; los valores de la tarifa por unidad de combustible serán los siguientes:

Combustible fósil	Unidad	Tarifa/unidad
Carbón	Tonelada	\$44.750
Gas Natural	Metro cúbico	\$34
Gas Licuado de Petróleo	Galón	\$112
Gasolina	Galón	\$159
Kerosene y Jet Fuel	Galón	\$174
ACPM	Galón	\$179
Fuel Oil	Galón	\$208

Corresponde a la DIAN el recaudo y la administración del Impuesto al Carbono, para lo cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los impuestos de su competencia, y para la aplicación de las sanciones contempladas en el mismo y que sean compatibles con

la naturaleza del impuesto. La declaración y pago del impuesto, se hará en los plazos y condiciones que señale el Gobierno Nacional.

Se entenderán como no presentadas las declaraciones, para efectos de este impuesto, cuando no se realice el pago en la forma señalada en el reglamento que expida el Gobierno nacional.

PARÁGRAFO 1o. La tarifa por tonelada de CO₂ se ajustará cada primero de febrero con la inflación del año anterior más un punto hasta que sea equivalente a una (1) UVT por tonelada de CO₂. En consecuencia, los valores por unidad de combustible crecerán a la misma tasa anteriormente expuesta.

PARÁGRAFO 2o. El impuesto al carbono será deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del costo del bien en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO 3o. El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal, animal o producido a partir de residuos sólidos urbanos de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel, no están sujetos al impuesto al carbono.

PARÁGRAFO 4o. La tarifa del impuesto al carbono por unidad de combustible de la que trata este artículo, en Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y los municipios de Sipí, Río Sucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandí, Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Iró, Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del departamento del Chocó, para los combustibles enlistados en el inciso 1 del presente artículo será de cero pesos (\$0).

PARÁGRAFO 5o. Los combustibles a los que se refiere este artículo no causarán el impuesto cuando sean exportados.

PARÁGRAFO 6o. La venta de diésel marino y combustibles utilizados para reaprovisionamiento de los buques en tráfico internacional es considerada como una exportación. En consecuencia, el reaprovisionamiento de combustibles de estos buques no será objeto de cobro del impuesto al carbono. Para lo anterior, los distribuidores mayoristas deberán certificar al responsable del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, a más tardar el quinto (5o) día hábil del mes siguiente en el que se realizó la venta del combustible por

parte del productor al distribuidor mayorista y/o comercializador, para que el productor realice el reintegro del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM al distribuidor.

PARÁGRAFO 7o. Para estimular la conversión de carbón a energías más limpias, los agentes de las cadenas de energía eléctrica y de gas combustible podrán ofrecer condiciones comerciales especiales para viabilizar nuevos proyectos o ampliaciones que impliquen el aumento de la demanda. Para poder cumplir lo anterior, la CREG permitirá a las empresas aplicar canastas tarifarias flexibles en todas las actividades de las cadenas de prestación del servicio.

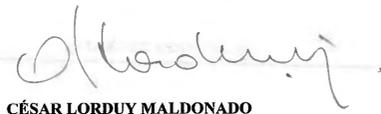
ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 223 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así:

ARTÍCULO 223. DESTINACIÓN ESPECÍFICA DEL IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. El recaudo del impuesto nacional al carbono se destinará al Fondo Nacional ambiental FONAM. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentarán la subcuenta de estos recursos en el FONAM.

Los recursos se destinarán a cumplir las metas de reducción de gases de efecto invernadero y material particulado nocivo para la salud y el medio ambiente, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTÍCULO 3. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley deroga las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su publicación.

Del honorable Congreso,



CÉSAR LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara

PROYECTO DE LEY No _____ DE 2021 CÁMARA

“Por medio de la cual se modifica la Ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” en cuanto al Impuesto Nacional al Carbono” y se dictan otras disposiciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETO DEL PROYECTO

Disminuir las emisiones de CO₂ y material particulado en la atmósfera, incluyendo al Carbón Mineral en la base gravable del Impuesto al Carbono, con el fin de estimular el uso de energías de bajas o cero emisiones en su remplazo.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROYECTO DE LEY

- Mejorar la calidad del aire en el país.
- Destinar \$358.000 millones de pesos anuales, como recursos para la reducción de gases de efecto invernadero y material particulado nocivo para la salud y el medio ambiente, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas.
- Corregir la omisión legislativa dada en el 2016 cuando se creó el Impuesto Nacional al Carbono, pero no se incluyó el mineral más contaminante, el Carbón.

3. CONTEXTO NORMATIVO

- **CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA**

ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

ARTÍCULO 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario.

- **CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. DECRETO 2811 DE 1974.**

ARTÍCULO 8

a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables, son factores que deterioran el ambiente.

ARTÍCULO 73. Corresponde al gobierno mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o daños o interfieran el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de los recursos naturales renovables.

ARTÍCULO 74. Se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga en la atmósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, en general, de sustancias de cualquier naturaleza que pueda causar enfermedad, daño o molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando sobrepasen los grados o niveles fijados.

ARTÍCULO 75. Para prevenir la contaminación atmosférica se dictarán disposiciones concernientes a:

a). La calidad que debe tener el aire, como elemento indispensable para la salud humana, animal o vegetal;

4. MODIFICACIONES

ARTICULOS DE LA LEY 1819 DE 2016 QUE ESTAN EN VIGENCIA Y SE PRETENDEN MODIFICAR			PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 222 Y 223 DE LA LEY 1819 DE 2016		
ARTÍCULO 222. BASE GRAVABLE Y TARIFA.			ARTÍCULO 222. BASE GRAVABLE Y TARIFA.		
El Impuesto al Carbono tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) para cada combustible determinado, expresado en unidad de volumen (kilogramo de CO2) por unidad energética (Terajoules) de acuerdo con el volumen o peso del combustible. La tarifa corresponderá a quince mil pesos (\$15.000) por tonelada de CO2 y los valores de la tarifa por unidad de combustible serán los siguientes:			El Impuesto al Carbono tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) para cada combustible fósil determinado, expresado en unidad de volumen (kilogramo de CO2) por unidad energética (Terajoules) de acuerdo con el volumen o peso del combustible. La tarifa corresponderá a diecisiete mil seiscientos sesenta pesos (\$17.660) por tonelada de CO2; los valores de la tarifa por unidad de combustible serán los siguientes:		
Combustible fósil	Unidad	Tarifa/unidad	Combustible fósil	Unidad	Tarifa/unidad
Gas Natural	Metro cúbico	\$34	Carbón	Tonelada	\$44.750
Gas Licuado de Petróleo	Galón	\$112	Gas Natural	Metro cúbico	\$34
Gasolina	Galón	\$159	Gas Licuado de Petróleo	Galón	\$112
Kerosene y Jet Fuel	Galón	\$174	Gasolina	Galón	\$159
ACPM	Galón	\$179	Kerosene y Jet Fuel	Galón	\$174
Fuel Oil	Galón	\$208	ACPM	Galón	\$179

ARTICULOS DE LA LEY 1819 DE 2016 QUE ESTAN EN VIGENCIA Y SE PRETENDEN MODIFICAR			PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 222 Y 223 DE LA LEY 1819 DE 2016		
			Fuel Oil	Galón	\$208
Corresponde a la DIAN el recaudo y la administración del Impuesto al Carbono, para lo cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los impuestos de su competencia, y para la aplicación de las sanciones contempladas en el mismo y que sean compatibles con la naturaleza del impuesto. La declaración y pago del Impuesto, se hará en los plazos y condiciones que señale el Gobierno nacional.			Corresponde a la DIAN el recaudo y la administración del Impuesto al Carbono, para lo cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los impuestos de su competencia, y para la aplicación de las sanciones contempladas en el mismo y que sean compatibles con la naturaleza del impuesto. La declaración y pago del impuesto, se hará en los plazos y condiciones que señale el Gobierno Nacional.		
Se entenderán como no presentadas las declaraciones, para efectos de este impuesto, cuando no se realice el pago en la forma señalada en el reglamento que expida el Gobierno nacional.			Se entenderán como no presentadas las declaraciones, para efectos de este impuesto, cuando no se realice el pago en la forma señalada en el reglamento que expida el Gobierno nacional.		
PARÁGRAFO 1o. La tarifa por tonelada de CO2 se ajustará cada primero de febrero con la inflación del año anterior más un punto hasta que sea equivalente a una (1) UVT por tonelada de CO2. En consecuencia los valores por unidad de combustible crecerán a la misma tasa anteriormente expuesta.			PARÁGRAFO 1o. La tarifa por tonelada de CO2 se ajustará cada primero de febrero con la inflación del año anterior más un punto hasta que sea equivalente a una (1) UVT por tonelada de CO2. En consecuencia, los valores por unidad de combustible crecerán a la misma tasa anteriormente expuesta.		
PARÁGRAFO 2o. El impuesto al carbono será deducible del impuesto sobre la renta			PARÁGRAFO 2o. El impuesto al carbono será deducible del impuesto sobre la renta		

ARTICULOS DE LA LEY 1819 DE 2016 QUE ESTAN EN VIGENCIA Y SE PRETENDEN MODIFICAR		PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 222 Y 223 DE LA LEY 1819 DE 2016	
como mayor valor del costo del bien, en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario.		como mayor valor del costo del bien, en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario.	
PARÁGRAFO 3o. El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal, animal o producido a partir de residuos sólidos urbanos de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel, no están sujetos al impuesto al carbono.		PARÁGRAFO 3o. El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal, animal o producido a partir de residuos sólidos urbanos de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel, no están sujetos al impuesto al carbono.	
PARÁGRAFO 4o. La tarifa del impuesto al carbono por unidad de combustible de la que trata este artículo, en Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y los municipios de Sipí, Río Sucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandí, Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Iró, Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del departamento del Chocó, para los combustibles enlistados en el inciso 1 del presente artículo será de cero pesos (\$0)		PARÁGRAFO 4o. La tarifa del impuesto al carbono por unidad de combustible de la que trata este artículo, en Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y los municipios de Sipí, Río Sucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandí, Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Iró, Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del departamento del Chocó, para los combustibles enlistados en el inciso 1 del presente artículo será de cero pesos (\$0)	
PARÁGRAFO 5o. Los combustibles a los que se refiere este artículo no causarán el impuesto cuando sean exportados.		PARÁGRAFO 5o. Los combustibles a los que se refiere este artículo no causarán el impuesto cuando sean exportados.	
PARÁGRAFO 6o. La venta de diésel marino y combustibles utilizados para reaprovisionamiento de los buques en		PARÁGRAFO 6o. La venta de diésel marino y combustibles utilizados para reaprovisionamiento de los buques en	

ARTICULOS DE LA LEY 1819 DE 2016 QUE ESTAN EN VIGENCIA Y SE PRETENDEN MODIFICAR		PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 222 Y 223 DE LA LEY 1819 DE 2016	
tráfico internacional es considerada como una exportación. En consecuencia el reaprovisionamiento de combustibles de estos buques no será objeto de cobro del impuesto al carbono. Para lo anterior, los distribuidores mayoristas deberán certificar al responsable del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, a más tardar el quinto (5o) día hábil del mes siguiente en el que se realizó la venta del combustible por parte del productor al distribuidor mayorista y/o comercializador, para que el productor realice el reintegro del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM al distribuidor.		tráfico internacional es considerada como una exportación. En consecuencia, el reaprovisionamiento de combustibles de estos buques no será objeto de cobro del impuesto al carbono. Para lo anterior, los distribuidores mayoristas deberán certificar al responsable del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, a más tardar el quinto (5o) día hábil del mes siguiente en el que se realizó la venta del combustible por parte del productor al distribuidor mayorista y/o comercializador, para que el productor realice el reintegro del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM al distribuidor.	
		PARÁGRAFO 7o: Para estimular la conversión de carbón a energías más limpias, los agentes de las cadenas de energía eléctrica y de gas combustible podrán ofrecer condiciones comerciales especiales para viabilizar nuevos proyectos o ampliaciones que impliquen el aumento de la demanda. Para poder cumplir lo anterior, la CREG permitirá a las empresas aplicar canastas tarifarias flexibles en todas las actividades de las cadenas de prestación del servicio.	
ARTÍCULO 223. DESTINACIÓN ESPECÍFICA DEL IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. El recaudo del impuesto nacional al carbono se destinará al "fondo Colombia en Paz (FCP)"		ARTÍCULO 223. DESTINACIÓN ESPECÍFICA DEL IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. El recaudo del impuesto nacional al carbono se destinará al Fondo Nacional ambiental	

ARTÍCULOS DE LA LEY 1819 DE 2016 QUE ESTAN EN VIGENCIA Y SE PRETENDEN MODIFICAR	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 222 Y 223 DE LA LEY 1819 DE 2016
de que trata el artículo 1o del Decreto-ley 691 de 2017. Estos recursos se presupuestarán en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	FONAM. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentarán la subcuenta de estos recursos en el FONAM.
El 25% se destinará al manejo de la erosión costera; la reducción de la deforestación y su monitoreo; la conservación de fuentes hídricas; la conservación de ecosistemas estratégicos, especialmente páramos; acciones en cambio climático y su respectivo monitoreo, reporte y verificación, así como al pago por servicios ambientales.	Los recursos se destinarán a cumplir las metas de reducción de gases de efecto invernadero y material particulado nocivo para la salud y el medio ambiente, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El 5% se destinará al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras estrategias de conservación a través de creación y ampliación de áreas protegidas, manejo efectivo y gobernanza en los diferentes ámbitos de gestión.	
El 70% se destinará a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con criterios de sostenibilidad ambiental.	

5. CONVENIENCIA DEL PROYECTO DE LEY

La contaminación ambiental causa 7 millones de muertes al año, más que el VIH, la tuberculosis y la malaria juntos.¹ En el caso de Colombia, según un reciente estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud, 17.549 personas mueren al año por factores de riesgo ambiental como el aire. (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 2019)²

No hay acción más fundamental en la vida que respirar. En un minuto, una persona aspira entre 5 y 6 litros de aire y en toda una vida, alrededor de 250 millones de litros pasan por sus pulmones. La mala noticia es que al menos el 90 por ciento de las personas respira aire que contiene partículas con toxinas, las cuales no solo enferman, sino que matan.

La cifra no es exagerada. Según el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hoy 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado y al menos 7 millones más mueren al año por esta causa. Concretamente, el aire tóxico causa un tercio de las muertes por accidente cerebrovascular, cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas. Casi tantas como todos los cánceres juntos y muy superior a las muertes producidas por el VIH, la tuberculosis y la malaria juntas.

La evidencia resulta abrumadora, pero los expertos coinciden en que además de voluntad ciudadana se necesita con urgencia una acción política que impulse inversiones en energía saludable y acelere la acción para reducir la contaminación del aire.

La contaminación ambiental es un problema de salud pública. Solo en Bogotá el 43 % de la contaminación de aire es generada por los vehículos de carga y transporte público, los cuales se movilizan con diésel, que, a pesar de haberse mejorado el contenido de azufre en el mismo, sigue siendo uno de los más contaminantes de Latinoamérica.

Bogotá es la muestra de lo que está sucediendo en algunas otras ciudades y que se puede extender a todo el país sino hacemos algo pronto, ya que el material contaminante en el ambiente ha venido aumentando, específicamente partículas PM 10 (las más grandes), y PM 2.5, las más pequeñas y por ende más peligrosas, pues pueden ser inhaladas por los humanos, llegar hasta sus bronquios y causar afecciones respiratorias.

¹ Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud (2015). Tomado de https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9406:2014-7-million-deaths-annually-linked-air-pollution&Itemid=135&lang=es Unidad de Comunicación, OPS/OMS — www.paho.org
² INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, M. (2019). INFORME DE GESTIÓN.

A lo anterior hay que sumarle las fuentes fijas, las industrias, en especial aquellas que utilizan como combustible el carbón, y que por extrañón que parecería, su uso estaba excluido del impuesto al carbono.

Las centrales eléctricas que queman carbón son un emisor importante de contaminación. En Colombia, aproximadamente un 80% de la contaminación del aire proviene de fuentes móviles (camiones, volquetas, motos, buses y taxis) y el 20% restante de fuentes fijas (chimeneas, industrias, quemadas y minería).

Según el DNP, 12.3 billones de pesos es el costo estimado de la morbilidad y mortalidad (1,5 % del PIB de 2015). Costos sociales y económicos representados en enfermedades, restricción en el desarrollo de actividades, atenciones por el sistema de salud y muertes. (DNP 2018)³. Ese mismo estudio plantea que al año, se causan más de 67 millones de enfermedades y síntomas por estas enfermedades. (CONPES 3943 de 2018)⁴.

En Bogotá y Antioquia, 22% y 18% de las emisiones de material particulado fino contaminante provienen de fábricas que usan hornos y calderas a carbón, donde se destacan las tintorerías, ladrilleras y las fundiciones. En ambas regiones se consumieron alrededor de 1.1 millones de toneladas de carbón en el 2017 por parte de más de 200 fábricas que usan carbón⁵, lo que las convierte en la segunda mayor fuente de emisiones que afectan la calidad del aire.

Ajustar el impuesto al carbono para estimular el uso de combustibles más limpios:

Un calentamiento peligroso del planeta no es solo un desastre ambiental. Fundamentalmente representa una dificultad económica y social. Atribuir un valor o poner un precio a las emisiones de carbono es una forma de abordar de raíz el cambio climático. Se crea así un incentivo para que las empresas y las personas físicas cambien sus patrones de inversión, producción y consumo. A través de una señal de precios clara y firme, la fijación del precio del carbono establece los incentivos adecuados para la transición de gran escala tan necesaria hacia una economía con bajos niveles de emisión de carbono.

Poner un precio al carbono es un paso importante, y muchos en el sector privado creen firmemente que los Gobiernos deben ir en esa dirección para abordar eficazmente el cambio

³ DNP. (2018). Evaluación de resultados de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire. Obtenido de Departamento Nacional de Planeación.
⁴ CONPES (2018). CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 3943, 86.
⁵ Encuesta Anual Manufacturera 2017

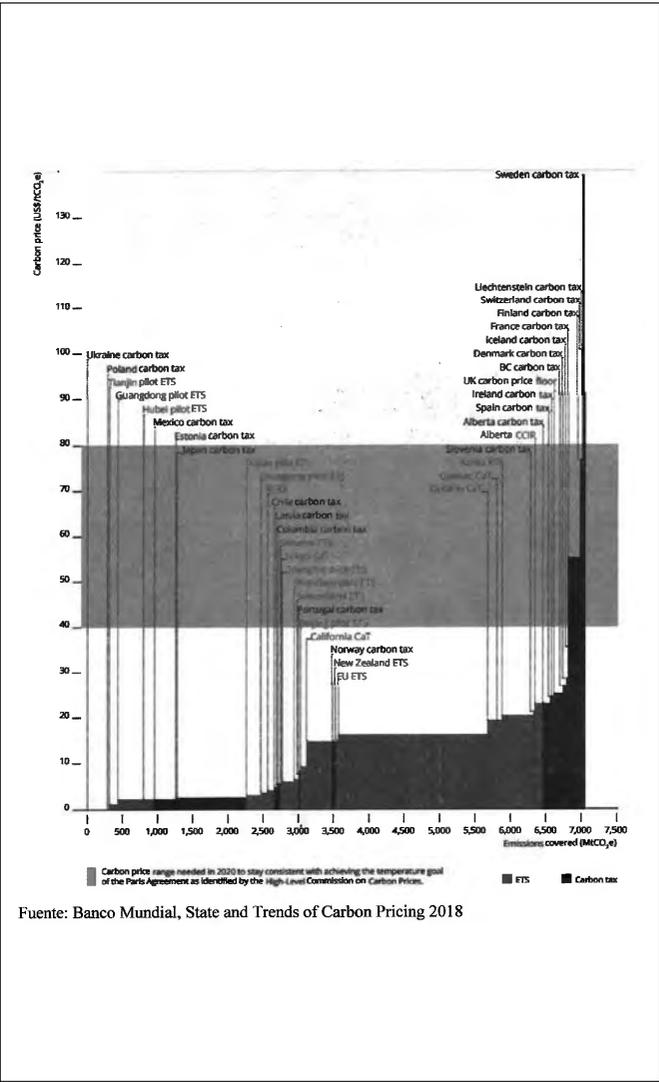
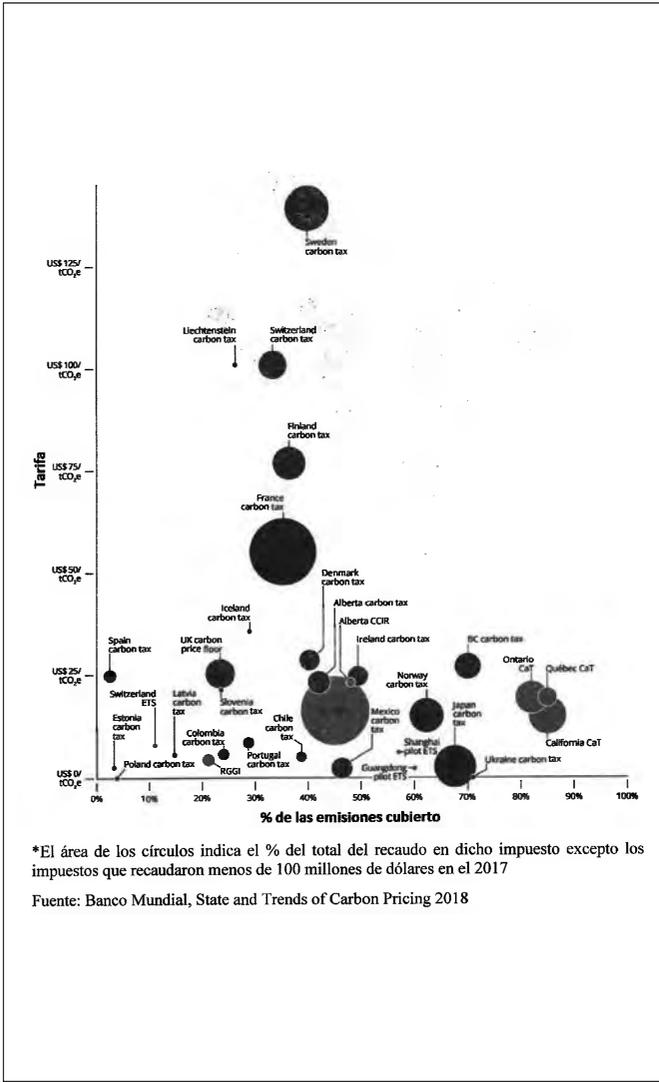
climático. Un número cada vez mayor de empresas se están preparando para un mundo con un costo más elevado de emisiones de carbono⁶

En el 2016 Colombia creó el impuesto nacional al carbono que consistía en el pago de una tarifa de acuerdo con la cantidad de toneladas de carbono que se liberan a la atmósfera por el uso de combustibles fósiles. En este sentido, los combustibles más contaminantes contribuirían más a proyectos de protección para las fuentes hídricas, los ecosistemas y la biodiversidad.

Los combustibles gravados en la Ley 1819 de 2016 fueron el “fuel oil”, “Acpm”, “jet fuel”, gasolina, GLP y el gas natural (para la refinación de hidrocarburos y la petroquímica), dejando por fuera al carbón, el combustible más contaminante. Esta omisión tiene un efecto perverso de política pública dado que promueve el uso del carbón al darle una ventaja competitiva.

Lo anterior se ve reflejado al analizar los impuestos al carbono alrededor del mundo, en donde se observa que en Colombia tanto el valor del impuesto como el porcentaje de las fuentes de emisión cubiertas es bastante reducido, como se presenta en las siguientes gráficas:

⁶ (BANCO MUNDIAL, 2017)



Por lo tanto, es necesario incluir al carbón dentro de los combustibles que pagan impuestos por daño ambiental, no para eliminar su uso (pues el nivel del tributo en Colombia es aún bajo, como lo muestran las gráficas), pero sí para incentivar el uso de energías más limpias.

Por otro lado, cuando se creó el Impuesto Nacional al Carbono, su destinación de los recursos captados iba al fondo denominado "Fondo para una Colombia Sostenible". Sin embargo, bajo el Decreto 691 de 2017 se sustituye el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el conflicto por el "Fondo Colombia en Paz" perdiendo su cometido original de emplear sus recursos para reducir de gases de efecto invernadero y material articulado nocivo para la salud y el medio ambiente.

Haciendo pagar más al que más contamina, incentivaremos al mercado al uso de tecnologías más limpias y eficientes, y las diferentes industrias podremos seguir ayudando al desarrollo medioambiental del país y mejorar la calidad del aire que respiramos.

La fijación del precio del carbono constituye una opción de políticas sencilla, justa y eficiente para abordar el cambio climático. También puede reportar beneficios adicionales, y reducir la contaminación y la congestión del aire mientras se evita al mismo tiempo el mayor costo de las medidas correctivas vinculadas con el rumbo de crecimiento de elevados niveles de emisión de carbono del mundo en la actualidad. (BANCO MUNDIAL, 2017)⁷

Las iniciativas de fijación de precios del carbono pueden servir para múltiples objetivos ambientales y sociales. Si bien el objetivo principal de implementar iniciativas de fijación de precios del carbono es estimular la mitigación de emisiones rentable, dichas iniciativas también pueden ayudar a lograr resultados más amplios. Por ejemplo, China, la República de Corea, Québec y Singapur mencionaron la estimulación de la innovación baja en carbono como complementaria. objetivo.

Algunas jurisdicciones también utilizan iniciativas de fijación de precios del carbono para abordar otros problemas ambientales más allá del cambio climático. Por ejemplo, el emissions trading scheme ETS (esquema de comercio de emisiones) piloto de Beijing pretende ser un instrumento clave para reducir la contaminación del aire, mientras que en Chile se introdujo un impuesto al carbono como parte de un paquete de impuestos ambientales para reducir el impacto negativo en la salud y el medio ambiente del uso de combustibles fósiles.(World Bank and Ecofys., 2018)⁸

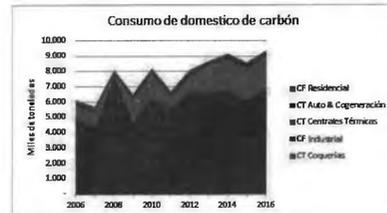
⁷ BANCO MUNDIAL. (2017). Fijación del precio del carbono. Recuperado 14 de junio de 2019, de World Bank website: <http://projects-beta.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/carbon-pricing>

⁸ World Bank and Ecofys. (2018). State and Trends of Carbon Pricing. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1292-7>.

Impacto fiscal de incluir el carbón en el impuesto al carbono:

De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el carbón genérico del interior de Colombia tiene un factor de emisión de 2534.8 kgCo2/tonelada. Por lo anterior, si se le aplica la tarifa actual de COP\$17.660/tonCO2 al carbón⁹, el valor a pagar por tonelada es de \$44.750pesos/tonelada.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el consumo de carbón a nivel nacional ha tenido una tendencia creciente desde 2011 para llegar a 8 millones de toneladas año en 2020 ¹⁰



De lo anterior, se puede concluir que el recaudo fiscal adicional por concepto del impuesto al carbono por parte del carbón sería de: \$374.520 millones de pesos:

	Producción (ton)	Tarifa (COP\$/tonCo2)	Recaudo adicional esperado (millones)
Carbón	8.000.000	44.750	358.000.000.000

No sobra mencionar que instrumentos legales para la salud y el ambiente como estos, fundamentados entre otras, en algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como:

- 3.Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades,
- 7.Garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos,
- 12.Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, y

⁹ Resolución 7 de 2021 DIAN <https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%2000007%20de%2029-01-2021.pdf>

¹⁰ <https://datos.enerdata.net/carbon-ignito/consumo-mundial-carbon.html>

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.



Demuestran ser de vital importancia en circunstancias como las actuales en que el cambio climático y la contaminación atmosférica en las principales ciudades de Colombia hacen necesario una transición hacia tecnologías limpias y energías alternativas.

6. DERECHO COMPARADO

A nivel internacional el impuesto al carbono ha sido un instrumento exitoso para la mitigación del cambio climático, a través de la disminución de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Entre las mejores políticas para la mitigación del cambio climático se encuentra la asignación de un precio al carbono, para responsabilizarnos de los costes sociales de nuestras acciones y, adoptando medidas contra el cambio climático los beneficios superarán los costes, ya que no actuar tendrá un gran impacto en la economía mundial¹¹.

Naciones como Finlandia, Suecia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Reino Unido e Italia han llevado a cabo reformas ambientales en las cuales se ha obtenido un incremento del 2% de la carga fiscal y el PIB ha aumentado hasta en 9%, indicando que es factible conseguir beneficios para la economía y tornarla más verde¹².

Estos son algunos ejemplos de los países que incluyen al Carbón, en su impuesto al Carbono:

Canadá

El Gobierno de Columbia Británica (provincia de Canadá) cobra una tarifa, actualmente 30 dólares canadienses, por cada tonelada métrica de emisiones equivalentes de dióxido de carbono resultantes de la combustión de diversos combustibles, incluyendo gasolina, diesel, gas natural, y, por supuesto, el carbón.¹³

¹¹ Stern Review: The economics of climate change. 30, HM treasury, London (2006)
¹² Slavickiene, Cileviciene Comparative Assessment Of Environmental Taxes In The European Union States European Scientific Journal, 10 (14) (2014)
¹³ Cambio Climático Global (2015). Impuesto sobre el carbono, caso ejemplar de Columbia Británica, Canadá. Tomado de <https://cambioclimaticoglobal.com/impuesto-sobre-el-carbono-bc-canada>

Dinamarca

La tasa danesa, creada en 1992, es un ejemplo de la aplicación del concepto de impuesto sobre el carbono realmente modulado. El impuesto se aplica a todos (gobiernos, empresas, hogares) aplica para todos los combustibles fósiles y se basa en la cantidad de combustible y electricidad consumidos. El impuesto se modula según el nivel de emisión de CO₂ de los productos gravados. La tasa ascienda a 12 euros por tonelada (en promedio), con tasas reducidas para algunas industrias.

Gracias a ese impuesto, las emisiones de carbono se han reducido en un 15% entre 1990 y 2005, a pesar de que el crecimiento económico ha sido uno de los más fuertes de los países desarrollados durante aquellos años.

Los ingresos del impuesto han sido utilizados para subsidios a las industrias para que inviertan en las tecnologías ecológicas. Ese mecanismo ha incitado a las industrias a adaptarse a energías renovables y desarrollar innovaciones. Esta evolución ha sido favorecida por la intervención financiera masiva del gobierno para promover energías renovables, permitiendo una transición rápida de las industrias del carbón hacia las energías verdes.

Finlandia

Finlandia fue el primer país del mundo en introducir un impuesto sobre el carbono, en 1990. Es una tasa ecológica que se suma a los impuestos normales sobre la energía.

En 2008, la tasa ascendía a 20 € por tonelada de CO₂. Se aplica tasas normales al petróleo y carburantes de transporte (gasolina, queroseno, diésel), a los combustibles de calefacción y al carbón.

Suecia

El impuesto fue introducido en 1991 y se estableció inicialmente en 27 € por tonelada. Es un impuesto según la cantidad de combustible consumido (petróleo, gas natural y carbón). La reforma fue introducida en paralelo a la reducción de otros impuestos sobre el consumo de combustible para que los precios al consumidor no varían. A las industrias les fueron concedidas fuertes exenciones (pagar sólo el 25% de tasa en 1991 y el 50% actualmente).

Todos los impuestos sobre el medio ambiente de Suecia en 2005 representaron el 2,9% del PIB.

Suiza

Este país introdujo un impuesto sobre el carbono en 2008. El impuesto se aplica a los combustibles fósiles utilizados con fines energéticos, como el carbón para calefacción o el gas natural.

A continuación, su muestra una relación de la experiencia Internacional en la aplicación de impuestos al carbono:

País/año	Fecha de inicio	Tasa Impositiva por tCO ₂ e (en dólares)	Principales características
Reino Unido	1996	Comenzó con 15,00	Aplica a todos los combustibles de combustibles fósiles, exceptando al consumo de energía para la producción de electricidad y calentar residencial.
Hungría	1991	De 4 a 69 dependiendo del tipo y uso de combustible.	Aplica a todo el consumo de aceite mineral, gasolina y gas natural. Se exenta a las empresas incluidas en el EUT ETS, excepto a la industria de extracción de petróleo en instalaciones terrestres.
Suecia	1991	168,00	Aplica a todos los combustibles fósiles utilizados como calefacción y para calefacción. Se exenta a las empresas manufactureras incluidas en el EUT ETS.
Dinamarca	1992	31,00	Aplica a petróleo, carbón y electricidad. La tasa impositiva crece al 1,8% anual desde el 2008-2015.
Suecia	2008	68,00	Aplica al uso de combustibles fósiles para calefacción y generación de electricidad en plantas tradicionales y de ciclo combinado. No aplica para calefacción residencial. Se exenta del pago a las empresas incluidas en el EUT ETS. Puede obtenerse exenciones temporales en el caso de energía y una obligación de compensación para calentar nuevas edificaciones de edificios (regulaciones vinculadas) al 2020.
Canadá (Columbia Británica)	2008	28,00	La tasa impositiva se incrementa gradualmente desde 2012. El gas natural y petróleo para calefacción están exentos en un 50%. Las empresas fósiles se han exentado para reducir el impuesto sobre la renta y la aplicación de subsidios fiscales, sin embargo, desde su introducción se presiona una disminución de los impuestos fiscales.
Islandia	2010	10,00	Aplica al uso de gas natural, diesel, gasóleo, gasóleo, gas natural de petróleo y otro tipo de hidrocarburos. También, a los combustibles importados y producidos al interior del país. Se exenta del pago a las empresas incluidas en el EUT ETS.
Islandia	2011	28,00	Aplica a todos los combustibles de gas natural y aceite mineral. Se exenta del pago a las empresas incluidas en el EUT ETS.
Australia	2012	21,54	Reduce el Carbon Pricing Mechanism (CPM) que desde el 2012-2015 opera con una tasa fija que reduce de manera efectiva el costo de los combustibles.
Japón	2012	2,00	Aplica a todo uso de combustibles fósiles, excepto para algunas compañías de sectores productivos como la agricultura, el transporte y la producción de electricidad. Las empresas que producen energía eléctrica que reducen las emisiones de CO ₂ relacionadas al uso de energía nuclear son exentas de pagar impuestos.
Italia	En 2014: 15,75		Aplica al uso de combustibles fósiles para generación de electricidad. Se limita a Gran Bretaña. El impuesto se actualiza anualmente con base al precio del carbono.
Francia	En 2015: 16		Aplica al uso de gas natural, combustibles y carbón que no se consideran en el EUT ETS. A partir de 2015 se exenta a los combustibles para transporte y calefacción.
México	2014	De 1 a 4 dólares, dependiendo del tipo de combustible.	Aplica a los ventas e importación de combustibles fósiles del sector manufacturero. No se aplica sobre el consumo total de carbón de los combustibles, sino al volumen del combustible que se vende al consumidor final. Por lo tanto, este último está exento de su aplicación. Las compañías que se pagan pueden pagar mediante cantidades de propósitos al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), por sus propios usos en México.
Chile	2017	5,00	Impuesto anual que genera carbón de CO ₂ producido por combustibles fósiles excepto para calefacción residencial y gas natural. El impuesto se actualiza anualmente con base al precio del carbono. Se exenta a las empresas que producen energía eléctrica que reducen las emisiones de CO ₂ relacionadas al uso de energía nuclear. El impuesto se actualiza anualmente con base al precio del carbono. Se exenta a las empresas que producen energía eléctrica que reducen las emisiones de CO ₂ relacionadas al uso de energía nuclear.

Fuente: CEPAL (2017) Efectos potenciales de un impuesto al carbono sobre el producto interno bruto en los países de América Latina. p15.

7. CONFLICTO DE INTERESES

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones, que modifica el artículo 291 de la Ley 5 de 1992, en la que se estableció que el autor del proyecto y el ponente presentarán en la exposición de motivos la descripción de las posibles circunstancias o eventos que podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, siendo estos, criterios guías para que los congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento.

Frente al Proyecto de Ley propuesto, se considera que pueden existir conflictos de interés relacionados con:

- El interés particular, actual y directo del cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de los Congresistas; derivados de estar relacionados con la explotación y/o comercialización de Carbón, ser funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible u ocupen cargos en el Estado que puedan llegar a ser impactados con las modificaciones que se proponen en este proyecto de ley.

Finalmente, sobre los conflictos de interés resulta importante recordar lo señalado por el Consejo de Estado (2019):

“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”.

CONTENIDO

Gaceta número 1031 - jueves 19 de agosto de 2021

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Págs.

PROYECTOS DE LEY

Proyecto de ley número 194 de 2021 cámara, por medio del cual se reestructuran los pasivos financieros para personas naturales y Mipymes, como aporte a la recuperación económica a causa de la crisis ocasionada por el cierre de sectores productivos para evitar la propagación del COVID 19 y se dictan otras disposiciones. 1

Proyecto de ley número 195 de 2021 cámara, por medio del cual se crea el Código de la Mujer. 5

Proyecto de ley número 197 de 2021 cámara, por medio de la cual se modifica la Ley 1819 de 2016 “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” en cuanto al Impuesto Nacional al Carbono y se dictan otras disposiciones. 27

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

De igual forma, es pertinente señalar lo que la Ley 5 de 1992 dispone sobre la materia en el artículo 286, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019:

“Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”

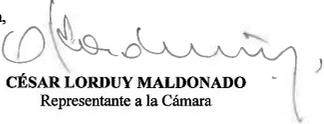
Se recuerda que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan presentar frente al trámite del presente proyecto de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la ley 5 de 1992, no exime del deber del Congresista de identificar otras causales adicionales.

7. CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto de ley está estructurado en 3 artículos, que tratan de manera expresa la modificación de los artículos 222 y 223 de la Ley 1819 de 2016. En su último artículo, establece la vigencia y las derogatorias.

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, pongo en consideración del Honorable Congreso de la Republica este proyecto de ley que consulta las más profundas necesidades del pueblo colombiano.

Del honorable Congresista,


CÉSAR LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara